**Dictámenes y Acuerdos correspondientes a la Décima Sexta Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.**

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes en cartera:

**A.-** Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, del Código Municipal para el Estado y de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**B.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa de Decreto que Expide la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, planteada por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, y al oficio del Lic. Eduardo Dávila Aguirre, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Saltillo.

**C.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia**,** relativo a la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo tercero del artículo 154 de la Ley del Seguro Social, suscrita por el Dip. Jesús Berino Granados.

**D.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la propuesta de iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo, recorriendo el que actualmente ocupa esa posición a la siguiente, haciendo lo propio con el resto de los párrafos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**E.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado para que se autorice al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un lote de terreno con una superficie de 28,721.10 m2., identificado como la Manzana 19 del “Nuevo Centro Metropolitano” en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a favor de la Comisión Estatal de Vivienda.

**F.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para que se autorice a celebrar un Convenio de Colaboración entre el ayuntamiento de dicho municipio con el Parque España de la Laguna S.A. de C.V., para la custodia y conservación del buen estado del área verde con una superficie de 1,349.79 m2., ubicada en el Fraccionamiento “Quintas San Isidro”, con objeto de llevar a cabo el acondicionamiento de un paseo público general y además conservar en buen estado el área verde, por una vigencia de 30 años.

**G.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 1,823.96 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Quintas San Isidro” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor de la persona moral “Parque España de la Laguna S.A. de C.V.”, con objeto de llevar a cabo su remodelación, en el cual está considerada sustituir la barda actual que colinda con esta porción de terreno alineándolo con la banqueta.

**H.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Allende, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, los lotes de terreno con una superficie de 8-84-52.57 hectáreas, que constituye el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora” de ese municipio, a favor de sus actuales poseedores, con objeto de continuar con los tramites de escrituración y llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, en virtud que el decreto número 34 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 17 de abril de 2015, en el que se autorizó esta operación con anterioridad, quedo sin vigencia.

**I.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justiciarelativo a la iniciativa Popular con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Daniel Héctor Saldívar Olvera.

**J.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justiciarelativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual plantea una reforma a los artículos 42 y 43 a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, planteada por el C. Ingeniero Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**K.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justiciarelativo a la iniciativa Popular con proyecto de decreto mediante la cual crea el Capitulo Segundo Bis. Denominado "LESIONES CONTRA LA MUJER POR RAZÓN DE GÉNERO", del Título Primero denominado "Delitos Contra la Vida", al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**L.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justiciarelativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante el cual se crea el Capítulo Tercero Ter. “DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO”, del Título Sexto de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Ingeniero Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**M.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma al párrafo segundo del artículo 86 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**N.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa ciudadana mediante el cual se propone que en los 38 ayuntamientos del Estado se les proporcione un perro adiestrado a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, suscrita por el C. Félix Gerardo Cabello Dueñas.

**Ñ.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa popular mediante el cual se propone que se apruebe el uso de gas pimienta e inmovilizador electrónico para defensa del personal a todas las mujeres de los 38 ayuntamientos del Estado y se modifique el artículo 280 sección quinta, estableciendo un control de gramos y voltios respectivamente, suscrita por el C. Félix Gerardo Cabello Dueñas.

**O.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la iniciativa popular mediante la cual se reforman el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar y la Ley Federal de Protección al Consumidor, planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**P.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la iniciativa popular mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en materia Político- Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Electoral de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Omar Delgado Chávez.

**Q.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la iniciativa ciudadana mediante el cual se propone que se analice y se hagan debates, foros, mesas de trabajo, tesis en relación con el consumo de alcohol y la violencia contra la mujer en las familias, para todas las mujeres de los 38 Ayuntamientos de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Félix Gerardo Cabello Dueñas.

**Dictamen** de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, del Código Municipal para el Estado y de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 18 del mes de marzo de 2020, se acordó turnar a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 23 de marzo del mismo año, se turnó a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, del Código Municipal para el Estado y de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en los artículos 84, 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, del Código Municipal para el Estado y de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“Erradicar el trabajo infantil es uno de los mayores compromisos asumidos por los gobiernos de todo el mundo, enfocando nuestro país gran parte de sus esfuerzos en desterrar esta práctica que constituye una violación de los derechos humanos fundamentales al desarrollo de los niños y que, potencialmente, les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida.*

*Como parte de estas acciones, el 17 de junio del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional al artículo 123, por el cual se elevó de 14 a 15 años la edad mínima para emplear a menores de edad. En consonancia, un año después, el 12 de junio de 2015, se publicaron las reformas a la Ley Federal del Trabajo y que amplió la garantía de protección a los menores, a fin de salvaguardar su integridad física y mental de cualquier condición laboral que resulte insegura o insalubre, limitando a su vez sus funciones a la jornada diurna, pero salvaguardando todos sus derechos y acciones legales que por su calidad de trabajador les corresponde.*

*Estas reformas fueron congruentes con los criterios sustentados por la Organización Internacional del Trabajo, que considera al trabajo infantil como toda actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 de edad, sin importar el estatus ocupacional (trabajo, asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado, etcétera), que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. De la misma forma, da cumplimiento a los acuerdos signados por nuestro país ante esta organización, como lo son el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, ratificado por México el 30 de junio de 2000, así como el Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, ratificado el 10 de junio de 2015.*

*Sin duda esto fue un avance considerable en favor de la protección de los menores. Pese a ello, México es el segundo país de América Latina y el Caribe, sólo por debajo de Brasil y arriba de Perú, con mayor prevalencia de trabajo infantil. Un total de 2 millones 217 mil 648 niños, niñas y adolescentes trabajan, lo que equivale a un 7.5% de la población infantil del país, según lo informó la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (Cepal) a través de su*[*Informe de avance sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.*](https://www.cepal.org/es/publicaciones/44551-informe-avance-cuatrienal-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo)

*En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que en el país existen 2.3 millones de niñas y niños de 5 a 17 años de edad que se encuentran ocupados en actividades económicas, de los cuales 2.1 millones laboran en trabajos no permitidos. De igual forma, de los niños ocupados que no cumplen la edad mínima para trabajar, el 17.9% no asisten a la escuela.*

*Bajo ese contexto, el espíritu de la reforma fue el prevenir y erradicar el grave problema social que implica la explotación infantil, garantizando que, en caso de que se tenga que trabajar a temprana edad, esta actividad sea realizada con dignidad, respetando los derechos esenciales de las niñas, los niños y de los adolescentes.*

*En Coahuila se han dado importantes acciones para proteger y garantizar los derechos de los menores en el ámbito laboral, como lo es la formación de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en edad permitida en el Estado de Coahuila de Zaragoza, un órgano colegiado integrado por dependencias de la administración pública estatal y federal, con el fin de erradicar el Trabajo Infantil y brindar seguridad jurídica a los menores trabajadores en edad permitida.*

*Estos esfuerzos han generado un gran impacto en el bienestar infantil, ocupando Coahuila el lugar número 26 en cuanto a índice de trabajo infantil de acuerdo a las cifras más recientes del INEGI, presentando una tasa de ocupación laboral infantil de 7.8 por cada 100 niños, lo que corresponden a 38 mil pequeños que realizan alguna actividad económica en el Estado. Ahora bien, respecto a la ocupación no permitida, Coahuila se ubicó entre las entidades con los porcentajes inferiores con el 4.3 por ciento por debajo de los estados de Chihuahua y Quintana Roo donde el índice es del .5 por ciento y el 5 por ciento respectivamente.[[1]](#footnote-1)*

*En ese sentido, una vez analizadas las leyes que en el Estado rigen la actividad laboral de los entes de gobierno local con sus trabajadores, como lo son el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, es clara la necesidad de homologar ambos ordenamientos con la edad mínima laboral establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, misma que es de aplicación supletoria.*

*Lo anterior contribuirá a dar cabal cumplimiento al mandato constitucional, así como generar acciones contundentes en nuestro Estado para prevenir y erradicar el trabajo infantil, garantizando el interés superior de los menores en todos los casos en los que, por sus circunstancias personales, tengan que iniciar actividades económicas de forma temprana. “*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, del Código Municipal para el Estado y de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila.

Como bien se señala en la exposición de motivos, *la erradicación del trabajo infantil es uno de los mayores compromisos asumidos por los gobiernos de todo el mundo*, y es en esta materia, que en nuestro país, se han venido emprendiendo acciones que han permitido reducir la tasa de ocupación infantil no permitida en los últimos años”.

Al respecto, podemos mencionar lo siguiente:

En las **fracciones II, III y XI, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, se prohíbe el trabajo por debajo de los 15 años, así como en labores insalubres o peligrosas, trabajos nocturnos, tiempo extraordinario; además establece una jornada máxima de 6 horas diarias para los mayores de 15 años y menores de 16 años de edad.

***“Artículo 123.*** *Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.*

*II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas.* ***Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años****;*

*III.* ***Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años****. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como* ***jornada máxima la de seis horas****.*

*XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales.* ***En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos****.”*

Por su parte, los artículos **175 y 176 de la Ley Federal de Trabajo**, establecen las labores consideradas peligrosas e insalubres, además determina las restricciones en sectores económicos específicos en horario y duración de la jornada laboral.

***Artículo 175.*** *Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años:*

***I.*** *En establecimientos no industriales después de las diez de la noche;*

***II.*** *En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas y centros de vicio;*

***III.*** *En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres; y*

***IV.*** *En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores, en términos de lo previsto en el artículo 176 de esta Ley.*

*En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de dieciocho años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.*

*Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores, a los menores de dieciocho**años les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley.*

***Artículo 175 Bis.*** *Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas:*

***a)*** *La relación establecida con el solicitante deberá constar por escrito y contendrá el consentimiento expreso que en nombre del menor manifiesten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, así como la incorporación del compromiso que asuma el solicitante de respetar a favor del mismo menor los derechos que la Constitución, los convenios internacionales y las leyes federales y locales reconozcan a favor de la niñez;*

***b)*** *Las actividades que realice el menor no podrán interferir con su educación, esparcimiento y recreación en los términos que establezca el derecho aplicable, tampoco implicarán riesgo para su integridad o salud y en todo caso, incentivarán el desarrollo de sus habilidades y talentos; y*

***c)*** *Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que realice nunca serán menores a las que por concepto de salario recibiría un mayor de quince**y menor de dieciocho**años.*

***Artículo 176.-*** *Para los efectos del trabajo de los menores, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán, como labores peligrosas o insalubres, las que impliquen:*

***I.*** *Exposición a:*

***1.*** *Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes infrarrojas o ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales.*

***2.*** *Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral.*

***3.*** *Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infecto contagiosas.*

***4.*** *Fauna peligrosa o flora nociva.*

***II.*** *Labores:*

***1.*** *Nocturnas industriales o el trabajo después de las veintidós horas.*

***2.*** *De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros.*

***3.*** *En altura o espacios confinados.*

***4.*** *En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores.*

***5.*** *De soldadura y corte.*

***6.*** *En condiciones climáticas extremas en campo abierto, que los expongan a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelación.*

***7.*** *En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías primarias).*

***8.*** *Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca.*

***9.*** *Productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del hierro y el acero, petrolera y nuclear.*

***10.*** *Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera.*

***11.*** *Productivas de la industria tabacalera.*

***12.*** *Relacionadas con la generación, transmisión y distribución de electricidad y el mantenimiento de instalaciones eléctricas.*

***13.*** *En obras de construcción.*

***14.*** *Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o la custodia de bienes y valores.*

***15.*** *Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta responsabilidad, o que requieren de concentración y atención sostenidas.*

***16.*** *Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas.*

***17.*** *En buques.*

***18.*** *En minas.*

***19.*** *Submarinas y subterráneas.*

***20.*** *Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo.*

***III.*** *Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete kilogramos; posturas forzadas, o con movimientos repetitivos por períodos prolongados, que alteren su sistema musculo-esquelético.*

***IV.*** *Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas.*

***V.*** *Manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas mecánicas, eléctricas, neumáticas o motorizadas, que puedan generar amputaciones, fracturas o lesiones graves.*

***VI.*** *Manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico.*

***VII.*** *Uso de herramientas manuales punzo cortantes.*

*Las actividades previstas en este artículo, para los menores de dieciocho años y mayores de dieciséis años de edad, se sujetarán a los términos y condiciones consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.*

En el año 2011, en nuestro país, se publicaron dos reformas constitucionales trascendentes para los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pudiendo mencionar la reforma al artículo 4º. que adicionó el principio del interés superior de la niñez:

*“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.*

*Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.*

*El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”*

Otra reforma importante en este tema, fue la hecha al artículo 73, mediante la cual se facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

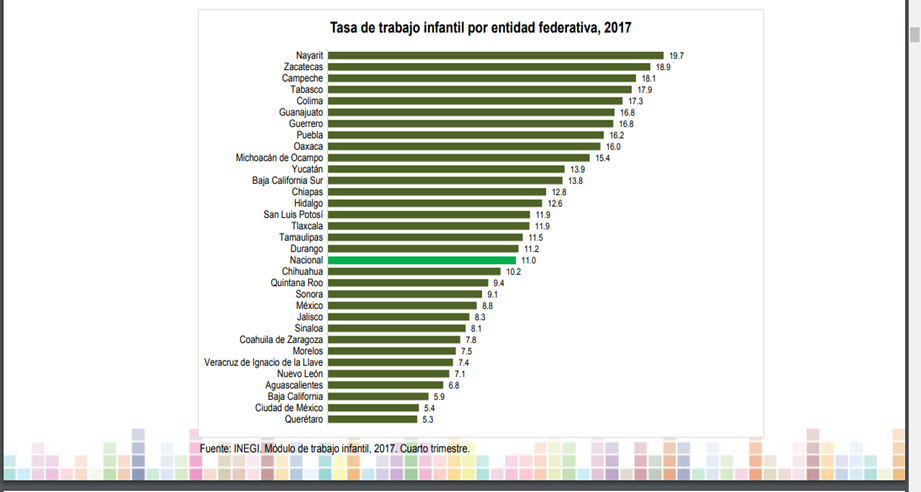
*“****Expedir leyes*** *que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,* ***en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte****.”*

Podemos asegurar que dichas reformas permitieron que en nuestro Estado Mexicano iniciara hacia un avance significativo de la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, y permitió en el año 2014, la creación de una ley general trascendentes en esta materia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley que representó un prototipo en materia de la niñez y la adolescencia.

El trabajo infantil comprende el trabajo en actividades económicas no permitidas y en actividades domésticas en condiciones no adecuadas. En 2017, de acuerdo con los datos del Módulo de Trabajo Infantil del INEGI, la población infantil de 5 a 17 años ascendió a 29.3 millones de personas, de las cuales 3.2 millones realizaron trabajo infantil, cifra equivalente al 11% de la población de 5 a 17 años. Del 11% de trabajo infantil, 0.7% está tanto en ocupación no permitida como en trabajo doméstico en condiciones no adecuadas.

En el periodo 2015 a 2017 la tasa de trabajo infantil disminuyó de 12.4% a 11%. El comportamiento según sexo, reportó una disminución en el trabajo infantil en niños, al pasar de 15% a 13.6%, lo mismo que el trabajo infantil en niñas, de 9.6% a 8.4 por ciento.

La tasa de trabajo infantil por entidad federativa reportó que en 2017, el estado de Nayarit tuvo la mayor tasa con 19.7%, mientras que la tasa más baja se observó en Querétaro con 5.3 por ciento.



De acuerdo con el tipo de localidad, la tasa de trabajo infantil en las áreas más urbanizadas (localidades de 100 mil y más habitantes), en 2017 fue del 7.6%, mientras que en las menos urbanizadas (localidades menores de 100 mil habitantes) ascendió a 13.6%.

El MTI estima que 2.1 millones (89.5%) de personas están involucradas en ocupación no permitida, de los 2.3 millones de personas ocupadas de 5 a 17 años en el cuarto trimestre de 2017.

En el periodo 2007-2017 la ocupación no permitida de 5 a 17 años muestra un descenso, de 3.5 millones en 2007 a 2.1 millones en 2017.

La tasa de ocupación no permitida de 5 a 17 años en el periodo 2007-2017 muestra una baja, de 11.5% en 2007 a 7.1% en 2017. Del 7.1%, 6.4% solo laboran en ocupaciones no permitidas y 0.7% las combinan con el trabajo doméstico en su propio hogar en condiciones no adecuadas.

En nuestro Estado de Coahuila, se ha respondido oportunamente en la lucha por llevar a cabo acciones trascendentales para la protección de los derechos de las niñas y los niños en el ámbito laboral, coadyuvando a garantizar el bienestar infantil en general, lo que mantiene al Estado en el lugar 26 en cuanto a índice de trabajo infantil de acuerdo a las del INEGI anteriormente referidas.

Para los integrantes de esta dictaminadora, es importante que en nuestro Estado se continúe trabajado por una sociedad que impulse constantemente herramientas y acciones enfocadas a maximizar la protección social para la prevención y erradicación del empleo de menores.

Es por ello, que coincidimos con el promovente, en la necesidad de homologar las leyes que en el Estado rigen la actividad laboral, a fin de responder al mandato constitucional, *contribuyendo así a que se satisfaga de manera más efectiva el interés superior de la*

*Niñez.*

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se reforma el artículo 10, el primer párrafo del artículo 34, el segundo párrafo del artículo 37,el primer párrafo del artículo 39, las fracciones III y VII del artículo 56, y la fracción II del artículo 164 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, para quedar como sigue:

**ARTICULO 10.** Trabajador es toda persona física mayor de **15** años de edad que presta un servicio físico, intelectual o de ambos géneros a los Poderes del Estado, en virtud de nombramiento expedido legalmente o por figurar en las nóminas de trabajadores temporales.

**ARTICULO 34.-** Queda prohibido el empleo de personas menores de **15** años en el Gobierno del Estado.

…

**ARTÍCULO 37.-** …

Queda prohibido emplear **a personas menores de dieciocho años** en labores peligrosas o insalubres. Tampoco trabajarán en la jornada nocturna, salvo el caso de que se trate de labores especializadas que deban realizarse durante esa jornada y que se hayan tomado las medidas para cumplir con los propósitos del artículo 35. No podrán, por ningún motivo trabajar tiempo extraordinario ni en los días de descanso señalados por la ley.

**ARTÍCULO 39.-** Las personas mayores de **15** años y menores de 16 para trabajar requieren:

1. …
2. …
3. …

**ARTÍCULO 56.-** …

I.-…

II.-…

III.- Las labores peligrosas **o** insalubres para personas menores de dieciocho años;

IV.-…

V.-…

VI.-…

VII.- Las que estipulen trabajo para personas menores de **quince** años.

**ARTÍCULO 164.-** …

I.-…

II.- Contra las personas menores de 18 y mayores de **15** años que no teniendo quien ejerza la patria potestad, no se les haya discernido la tutela;

III.-…

IV.-…

V.-…

VI.-…

VII.-…

…

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se reforma el artículo 264, las fracciones II y IV del artículo 265, así como las fracciones I, III y VII del artículo 310 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 264.** Las personas menores que tengan más de **quince** años, tendrán capacidad legal para prestar servicios, percibir el sueldo correspondiente y ejercitar las acciones derivadas de este título.

**Las personas mayores de quince años y menores de dieciséis para trabajar requieren:**

1. **Que hayan cumplido con la educación obligatoria a que se refiere el Artículo 118 de la Constitución Política del Estado;**
2. **Certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo; y**
3. **La autorización de los padres o del tutor en su caso.**

**ARTÍCULO 265.** …

1. …
2. Las labores peligrosas o insalubres para las mujeres y para las personas menores de **dieciocho** años.
3. …
4. Trabajo para las personas menores de **quince** años.
5. …
6. …
7. ….

…

**ARTÍCULO 310.** …

1. Una jornada mayor de la permitida por este código, excepto cuando ocurrieren situaciones de emergencia o desastre que pusieren en riesgo a la población en cuyo caso se deberán prestar los servicios necesarios determinados por la entidad pública municipal. **Las personas mayores de quince y menores de dieciocho años no podrán utilizarse para dichos trabajos, y no sufrirán por ello perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.**
2. …
3. Las labores peligrosas e insalubres para personas menores de **dieciocho** años.
4. …
5. …
6. …
7. Las que estipulen trabajo para personas menores de **quince** años.
8. …

**ARTÍCULO TERCERO.-** Se reforma la fracción XVII del artículo 4 y la fracción V del artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 4.-** …

**I.** a **XVI**. …

**XVII.** A la no utilización de trabajo de personas menores de **quince** años de edad;

**XVIII.** a **XXI.** …

…

**Artículo 5.-** …

**I.** a **IV.** …

**V.** Protección para que el trabajo de adolescentes mayores de **quince** años y menores de dieciséis se realice bajo el principio de respeto a sus derechos humanos y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo;

**VI.** a **XI.** …

…

**TRANSITORIO**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y la Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, Dip. Blanca Eppen Canales (Secretaria), Diana Patricia González Soto, María Esperanza Chapa García, Fernando Izaguirre Valdés, Elisa Catalina Villalobos Hernández. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN ESPECIAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. BLANCA EPPEN CANALES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa de Decreto que Expide la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, planteada por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, y al oficio del Lic. Eduardo Dávila Aguirre, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Saltillo, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 18 del mes de marzo del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en misma fecha, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa de Decreto que Expide la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, planteada por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**TERCERO.-** Que el día 21 de febrero del año en curso, la Oficialía Mayor de este H. Congreso recibió el oficio del Lic. Eduardo Dávila Aguirre, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Saltillo, turnándose para su estudio a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa de Decreto que Expide la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, planteada por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*La Mejora Regulatoria es la política pública que busca la generación de normas claras y la realización de trámites y servicios simplificados. Esta política pública tiene como finalidad brindar certeza jurídica a la población, reducir tiempos y costos de cumplimiento de las cargas administrativas que la regulación le impone, así como eliminar la discrecionalidad y la opacidad en la actuación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal en la resolución de sus actos administrativos. Además, la implementación integral y homogénea de esta política pública favorecerá la competitividad, el desarrollo económico sostenible y la generación de empleo en la entidad.*

*El 5 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se adiciona un último párrafo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, implementen políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites y servicios. Es así, que la mejora regulatoria se convirtió en una obligación constitucional dirigida a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, dicha obligación constriñe a las autoridades a implementar en sus ámbitos de competencia esta política pública.*

*A su vez, el 18 de mayo de 2018, se emitió como soporte de esa obligación constitucional la Ley General de Mejora Regulatoria cuyo objeto es “establecer los principios y bases a los que deberán sujetarse todos los órdenes de gobierno en materia de mejora regulatoria”. El artículo quinto transitorio de la norma que se comenta, impone a las entidades federativas, la obligación de adecuar la legislación en la materia. Es así, que resulta indispensable actualizar nuestro marco normativo a fin de establecer la obligatoriedad para las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal, de implementar la mejora regulatoria para avanzar hacia una moderna y eficiente política pública que conlleve acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surjan de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas específicos.*

*Nuestro Estado requiere que el sector productivo genere mejores empleos, más productivos y competitivos como lo exigen los estándares internacionales, por lo que es necesario contar con condiciones regulatorias y de gestión gubernamentales que aseguren la calidad en la prestación de servicios públicos. Por lo que esta iniciativa no solo tiene como finalidad generar un ambiente económico que propicie la competitividad estatal, sino que considera la plena satisfacción de los principios de transparencia, responsabilidad pública, rendición de cuentas, y eficiencia de la acción gubernamental.*

*Se colige que esta Iniciativa tiene los siguientes alcances:*

* *Desplegar una política pública de mejora regulatoria;*
* *Propiciar un desarrollo económico que favorezca la competitividad; y*
* *La instrumentación de un modelo de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación de trámites y servicios, así como medidas para facilitar la creación de empresas.*

*En ese sentido, a efecto de que la mejora regulatoria consolide un marco jurídico que posibilite su aplicación, es menester que cuente con una ley especial y de avanzada que contemple las mejores prácticas en la materia. En tal sentido, uno de los propósitos de la presente iniciativa es armonizar el marco normativo estatal de esta política pública con el actual en el ámbito federal.*

*Nuestra entidad cuenta con una Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, publicada en el Periódico Oficial el 10 de mayo de 2013, sin embargo, sus disposiciones deben ser actualizadas al tenor de las disposiciones federales en la materia.*

*Expedir una nueva Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es una necesidad, para que contemple las mejores prácticas nacionales e internacionales y que promueva el uso de las tecnologías para el logro de sus objetivos. Además, de introducir conceptos y figuras que implicarían un cambio sustantivo en la concepción de la mejora regulatoria y la forma en la que se ha venido implementando. Por ello, resulta conveniente, conformar y proponer una norma integral y completa que regule el ámbito estatal y el municipal.*

*Los nuevos conceptos y figuras a los que se hace referencia son los siguientes:*

*En el ámbito de aplicación, la mejora regulatoria se convertirá en obligación que implicaría extender su ámbito de aplicación, esto significa que el alcance de esta política pública circunscribe los órdenes de gobierno estatal y municipal. Anteriormente, su implementación estaba supeditaba a la voluntad de las autoridades y su aplicación dependía de la firma de convenios con el Poder Ejecutivo; actualmente la política pública de mejora regulatoria deberá formar parte de las agendas de gobierno del estado y de los 38 municipios, sin necesidad de arreglos institucionales.*

*Los principios y objetivos de la mejora regulatoria, conllevaría a promover que las regulaciones, los trámites y servicios que se expidan generen mayores beneficios que costos para la sociedad, a simplificar, mejora y no duplicar la emisión de regulaciones, trámites y servicios, y por último, permitir la accesibilidad y el uso de las tecnologías de información y comunicación.*

*El Sistema Estatal de Mejora Regulatoria no es en sí mismo una entidad sino un conjunto de bases, líneas de acción y sujetos que tiene como propósito la coordinación en la implementación de esta política pública. El Sistema Estatal será parte del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, instancia que coordinará a las autoridades de todos los órdenes de gobierno en materia de mejora regulatoria. De esta manera, la política pública de mejora regulatoria cuenta con organismos y herramientas definidas para su implementación:*

*El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria entendido como el órgano colegiado de análisis y consulta del Ejecutivo Estatal, en cuya integración se contempla al sector público estatal, municipal, empresarial y al Gobierno Federal.*

*Las Autoridades de Mejora Regulatoria, que tendrá a su cargo conducir y coordinar la implementación de esta política pública, y que en el estado esta figura recae en el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, en las Comisiones Municipales para la Mejora Regulatoria, así como en la Secretaria de Economía y Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas.*

*Los Sujetos Obligados, serán todas las autoridades que, dentro de sus facultades, emiten regulaciones u ofrecer trámites o servicios a la población.*

*Se propone la creación del Catálogo Estatal, como herramienta tecnológica que compila las Regulaciones, Trámites y Servicios con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información.*

*Se introduce un Catálogo Estatal que estará integrado por el**Registro Estatal y Municipal de Regulaciones, que es una compilación ordenada de las normas del Estado, de acceso público cuya actualización corresponde a los Sujetos Obligados.*

*El**Registro de Trámites y Servicios, es la herramienta tecnológica que permitirá a los interesados conservar los documentos personales en un sitio electrónico protegido y de acceso restringido, disponible solo para sujetos obligados ante los cuales se realice un trámite o solicite un servicio. Este expediente impide que al interesado le sean solicitados nuevamente los documentos personales que ya existen digitalizados en dicho expediente o aquellos que se encuentren en posesión de alguno de los sujetos obligados de esta Ley.*

*El Registro Estatal de Visitas Domiciliarias, es la base de datos que contendrá la información de los servidores públicos facultados para llevar a cabo inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, así como los datos de contacto del órgano interno de control de la dependencia a la que pertenezcan, para que la población pueda cerciorase de la legalidad de la visita domiciliaria y de que quien la ejecuta tiene facultades para ello.*

*La**Protesta Ciudadana, es**un sitio electrónico para que la población presente inconformidades cuando lo servidores públicos se nieguen sin causa justificada a gestionar un trámite o servicios, o bien sobre la manera en que debe ofrecerse el trámite o servicio. También se ofrecerá la posibilidad de que la protesta ciudadana se presente en medio físico.*

*La presente iniciativa subraya la responsabilidad de los sujetos obligados, de no publicar ninguna regulación que no vaya acompañada del dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio, herramienta que tiene por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que estas representen la mejor alternativa para atender una problemática específica.*

*En aras de colaborar en la implementación de estrategias que faciliten las funciones que realiza y los servicios que presta la administración pública estatal, la nueva ley otorgará la siguientes ventajas y beneficios como son: crear una cultura de la competitividad; fomentar e impulsar una cultura de mejora regulatoria y gestión gubernamental en las dependencias; contar con una administración pública moderna; mayor productividad y eficiencia; menores costos de operación; mayor coordinación de acciones interna y externamente; simplificación administrativa; fomentar ciudades competitivas; legitimidad en sus acciones normativas; autoridad promotora y no controladora; regulaciones que salvaguardan el bienestar general; incentivar la apertura de las empresas y la generación de empleos; óptimas condiciones para apertura de empresas o negocios; ahorro de tiempos, esfuerzos y costos; más tiempo para la atención de los negocios; tecnologías informáticas para realizar trámites y servicios con el gobierno; administración pública más productiva y eficiente; servicios ágiles, de mayor calidad y totalmente transparentes y mayor certidumbre jurídica, con lo cual se atienden las inquietudes y demandas de la ciudadanía en menor tiempo.*

*Al aprobarse la iniciativa, esta política pública alcanzará el status de política de Estado cuyos beneficios serían, en otros, la armonización y congruencia del marco normativo estatal con el federal; el fortalecimiento de la política pública desde el punto de vista jurídico; fijación de los entes y herramientas involucrados en la implementación de la mejora regulatoria; la delimitación de las atribuciones y obligaciones de las autoridades de mejora regulatoria y los sujetos obligados; trámites y servicios simplificados; y el establecimiento de las medidas de coordinación en la materia entre el Estado, los municipios y los demás sujetos obligados.*

*En este sentido, la iniciativa procurará mayores beneficios para la sociedad con los menores costos, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano.*

**TERCERO.-** Quienes integramos la presente comisión dictaminadora, efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, así como las consideraciones que la motivan. De lo anterior se observa que el promovente justifica la medida legislativa en argumentos como los siguientes:

* *“El 5 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se adiciona un último párrafo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, implementen políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites y servicios (…) [convirtiéndose] la mejora regulatoria (…) en una obligación constitucional (…) [que] constriñe a las autoridades a implementar en sus ámbitos de competencia esta política pública”.*
* *“A su vez, el 18 de mayo de 2018, se emitió (…) la Ley General de Mejora Regulatoria cuyo objeto es “establecer los principios y bases a los que deberán sujetarse todos los órdenes de gobierno en materia de mejora regulatoria”. [Norma que establece en su] (…)artículo quinto transitorio (…) la obligación[de las entidades federativas] de adecuar la legislación en la materia (…) [haciendo] (…) indispensable actualizar nuestro marco normativo a fin de establecer la obligatoriedad para las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal, de implementar la mejora regulatoria para avanzar hacia una moderna y eficiente política pública” (…).*

Así, del estudio del proyecto normativo quienes dictaminamos observamos que el mismo tiene los alcances y contenido que a continuación se enuncian:

Contenido: La ley se conforma de 89 artículos distribuidos en cuatro Títulos, de los cuales se hace una breve reseña a continuación:

**TÍTULO PRIMERO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Capítulo I**

**Objeto de la Ley**

Define el objeto de la Ley mismo que consiste enestablecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, organismos gubernamentales descentralizados o desconcentrados estatales y municipales, así como los órganos autónomos de dichos órdenes de gobierno en el ámbito de sus atribuciones y respectivas competencias en materia de mejora regulatoria.

Los poderes legislativo y judicial y los organismos con jurisdicción contenciosa, que no formen parte de los poderes judiciales, serán sujetos obligados para efectos de lo previsto en esta Ley, solo respecto a las obligaciones contenidas en el Registro Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios.

Asimismo se establece una excepción a dicha aplicación disponiéndose que este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquellas responsabilidades de los servidores públicos; tampoco lo será para el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales.

Se refiere que la aplicación de la ley estará a cargo de la Secretaría de Economía, del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y de las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria, así como de los Comités, Unidades Administrativas o Áreas Responsables dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

El título también fija los objetivos de la ley entre los cuales destacan los de:

Establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales, de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios;

Armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria del Estado con las disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria;

Establecer la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria;

Fijar los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de mejora regulatoria;

Regular la operación de los sujetos obligados dentro del Catálogo Estatal y Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios;

Establecer los principios, bases, procedimientos e instrumentos para que las Regulaciones garanticen beneficios superiores a sus costos y el máximo bienestar para la sociedad; y

Promover la eficacia y eficiencia gubernamental, fomentando el desarrollo socioeconómico e inversión en la entidad.

Dentro de las disposiciones generales se contiene un amplio glosario en el que se definen términos como Agenda Regulatoria; Análisis de Impacto Regulatorio; Catálogo; Expediente para Trámites y Servicios; Propuesta Regulatoria; Programa de Mejora Regulatoria; Regulación o Regulaciones; Servicio; Protesta Ciudadana y Trámite, entre otros.

En este título también se define como habrán de contarse los plazos fijados en el ordenamiento y se establece un plazo común para aquellos casos en los que la norma no disponga plazos específicos, determinándose que cuando los plazos sean en días, éstos se entenderán como días hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles.

Cuando no se especifique el plazo, se entenderán cinco días hábiles para cualquier actuación.

Por último este capítulo promueve el que laAdministración Pública Estatal, y las Municipales, impulsen el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones para facilitar la interacción con los ciudadanos a efecto de que éstos puedan dirigir sus solicitudes, opiniones, comentarios, a través de los sistemas electrónicos de comunicación, así como obtener la atención o resolución de aquellas.

**Capítulo II**

**De los Principios, Bases y Objetivos de la Mejora Regulatoria**

El capítulo inicia con una previsión que tiene por propósito el establecer que las autoridadesen la expedición de las Regulaciones, Trámites y Servicios deberán respetar los principios de legalidad, reserva de ley, jerarquía normativa, principio de máximo beneficio, control regulatorio, competitividad, máxima publicidad, participación ciudadana y todos aquellos principios que tiendan al cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

En cuanto a los principios orientadores de la política de mejora regulatoria se establecen entre otros los de:Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social;Seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones; Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos;Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio nacional;Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, Trámites y Servicios;Accesibilidad tecnológica;Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos; Fomento a la competitividad y el empleo; Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del funcionamiento eficiente de los mercados, y reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio.

Éste segundo capítulo también prevé los objetivos de la política de mejora regulatoria, destacando para quienes dictaminamos los de: Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios sociales y económicos superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar para la sociedad; Promover la eficacia y eficiencia de la Regulación, Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados; Revisar que las Regulaciones no impongan barreras al comercio, a la libre concurrencia y la competencia económica; Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios; Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión gubernamental; Facilitar y mejorar el ambiente para hacer negocios; Promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la mejora regulatoria; Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, a través del desarrollo de la referida política pública; y diferenciar los requisitos, trámites y servicios para facilitar el establecimiento y funcionamiento de las empresas según su nivel de riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en zonas de atención prioritaria, así como otras características relevantes para el estado.

**TÍTULO SEGUNDO**

**DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA**

**Capítulo I**

**De la Integración**

El capítulo dispone queel Sistema Estatal tiene por objeto coordinar a las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal, a través de normas, principios, objetivos, planes, directrices, órganos, instancias y procedimientos para la implementación de la Estrategia Nacional y la formulación, desarrollo e implementación de la Estrategia Estatal y la política en materia de mejora regulatoria y está integrado por:El Consejo Estatal;La Estrategia Estatal;La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza,los Sistemas de Mejora Regulatoria de los municipios, las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria, y las autoridades a que se refiere el artículo 1 de la ley.

Asimismo se establecen las herramientas de este Sistema, fijándose como tales el catálogo; la Agenda Regulatoria Estatal y las Municipales; el Análisis de Impacto Regulatorio; y los Programas de Mejora Regulatoria.

**Capítulo II**

**Del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria**

El capítulo segundo del Título Segundo, norma lo referente al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y lo define como el órgano responsable de coordinar la política estatal en materia de mejora regulatoria fijando como facultades del mismo las de establecer las bases, principios y mecanismos para la efectiva coordinación en el ámbito estatal, para promover el uso de metodologías, instrumentos, programas y las buenas prácticas nacionales e internacionales en la materia; asimismo fungirá como órgano de vinculación con   
los sujetos obligados y con diversos sectores de la sociedad.

En el mismo orden de ideas, se dispone que el referido Consejo estará integrado por: el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, quien lo presidirá; el Titular de la Secretaría de Economía, como Secretario Ejecutivo; el Director General de Mejora Regulatoria y Competitividad, como Coordinador General; y los siguientes vocales:

A. Del Sector Público Estatal:

1. El Titular de la Secretaría de Gobierno;
2. El Titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas;
3. El Titular de la Secretaría de Finanzas;
4. El Titular de la Secretaría de Medio Ambiente; y
5. El Titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

B. Del Sector Público Federal:

1. El Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria.

C. Del Poder Legislativo:

1. El Coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo de la Legislatura Local.

D. Del Sector Empresarial:

1. Un representante del sector empresarial por cada región de la entidad.

También se prevé queserán invitados permanentes del Consejo Estatal y podrán participar con voz, pero sin voto: El Comisionado Presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; El Presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, y un Representante del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria y como invitados especiales se enuncian: Un representante de los Municipios; Representantes de confederaciones, cámaras y asociaciones empresariales, colegios, barras y asociaciones de profesionistas; Representantes de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, así como organizaciones de consumidores, y académicos especialistas en materias afines.

Por lo que hace a las atribuciones del consejo el proyecto de ley establece, entre otras las de: Conocer e implementar en el ámbito de sus competencias la Estrategia Nacional de mejora regulatoria aprobada previamente por el Consejo Nacional y la formulación, desarrollo e implementación de la Estrategia Estatal y la política en materia de mejora regulatoria estableciendo para tal efecto directrices, bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos; Aprobar la Agenda Estatal de Mejora Regulatoria que presente la Secretaría para tal efecto; Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, información estadística y evaluación en materia de Mejora Regulatoria; Aprobar, a propuesta de la Secretaría, los indicadores que las Autoridades de Mejora Regulatoria y los Sujetos Obligados, deberán observar para la evaluación y medición de los resultados de la política estatal de mejora regulatoria incluyendo la simplificación de Trámites y Servicios del ámbito estatal; Promover el uso de principios, objetivos, metodologías, instrumentos, programas, criterios y herramientas acordes con las buenas prácticas estatales, nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria; Conocer problemáticas, obstáculos y fallos regulatorios que impidan el cumplimiento del objeto de la presente Ley y proponer alternativas de solución y emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados, para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; Así como aprobar, a propuesta de la Secretaría, el Reglamento Interior del Consejo Estatal.

En cuanto al funcionamiento del Consejo el proyecto dispone que el mismo sesionará de forma ordinaria cuando menos dos veces al año y de forma extraordinaria cuando, por la naturaleza de los temas a tratar, sea necesario a juicio del Presidente del Consejo Estatal.

La convocatoria se hará llegar a los miembros del Consejo Estatal, por conducto del Secretario Ejecutivo, con una anticipación de por lo menos diez días en el caso de las ordinarias y de por lo menos tres días en el caso de las extraordinarias.

Para sesionar se requerirá la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los integrantes del Consejo Estatal, sus acuerdos deberán tomarse preferentemente por consenso, pero tendrán validez cuando sean aprobados por mayoría de votos de los presentes, y quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

Los integrantes e invitados del Consejo Estatal participarán en el mismo de manera honorífica.

**Capítulo III**

**De la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria**

Este Capítulo norma lo referente a la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria, definiéndola como el instrumento programático que tiene como propósito articular la política de mejora regulatoria de los Sujetos Obligados a efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de esta Ley. La Estrategia Estatal se ajustará a lo dispuesto por la Estrategia Nacional, que para tal efecto se emita.

En este orden de ideas se establece que la estrategia comprenderá, al menos, lo siguiente: Un diagnóstico por parte de la Secretaría de la situación que guarda la política de mejora regulatoria en el Estado; buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria; Los objetivos de corto, mediano y largo plazo en materia de mejora regulatoria; Las acciones, medidas y programas de mejora regulatoria que permitan impactar favorablemente en el mejoramiento de la calidad regulatoria del Estado y que incidan en el desarrollo y el crecimiento económico estatal, así como el bienestar social; Las metodologías para la aplicación de las herramientas de la mejora regulatoria; Las políticas y acciones específicas para atender la problemática regulatoria de materias, sectores o regiones del estado; Las directrices, mecanismos y lineamientos técnicos para integrar, actualizar y operar el Catálogo Estatal; Los lineamientos generales de aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio; Las medidas para reducir y simplificar, y en su caso automatizar, Trámites y Servicios; Los estándares mínimos para asegurar la correcta implementación de las herramientas de la mejora regulatoria incluyendo entre otros, la consulta pública, transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de diseño e implementación de la Regulación; Los mecanismos de coordinación para garantizar la congruencia de la Regulación que expidan los Sujetos Obligados en términos de esta Ley; Los mecanismos que regulen el procedimiento a que se sujete la Protesta Ciudadana; etc.

**Capítulo IV**

**De la Secretaría**

El Capítulo Cuarto establece que la Secretaria de Economía como autoridad estatal en materia de mejora regulatoria tiene como objetivo promover la mejora de las Regulaciones y la simplificación de Trámites y Servicios, así como la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que éstos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, para lo cual contará entre otras con atribuciones como: Desempeñar las funciones de coordinación, supervisión y ejecución que establece esta Ley, promoviendo la mejora regulatoria y competitividad en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Con base en la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, proponer al Consejo Estatal la Estrategia para el ámbito local y desarrollar, monitorear, evaluar y dar publicidad a la misma; Proponer al Consejo Estatal la emisión de directrices, instrumentos, lineamientos, mecanismos y buenas prácticas para el cumplimiento del objeto de esta Ley; Proponer al Consejo Estatal las metodologías para la organización y sistematización de la información administrativa y estadística, así como los indicadores que deberán adoptar los Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia de mejora regulatoria; Administrar el Catálogo Estatal; Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria que requieran los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal; Revisar el marco regulatorio estatal, diagnosticar su aplicación y, en su caso, brindar asesoría a las autoridades competentes para mejorar la Regulación en actividades o sectores económicos específicos; Proponer a los Sujetos Obligados acciones, medidas o programas que permitan impactar favorablemente en el mejoramiento del marco regulatorio estatal y que incidan en el desarrollo y crecimiento económico del Estado, y coadyuvar en su promoción e implementación, lo anterior siguiendo los lineamientos planteados por la CONAMER; Dictaminar las Propuestas Regulatorias y sus Análisis de Impacto Regulatorio que se reciban de los Sujetos Obligados del ámbito estatal y, en su caso, municipal, lo anterior respetando los lineamientos que para tal efecto emita la CONAMER; Elaborar y presentar al Congreso del Estado un informe anual sobre los resultados, avances y retos de la política estatal de mejora regulatoria; Crear, desarrollar, proponer y promover Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria y en su caso seguir los planteados por la CONAMER destinados a los sujetos obligados; Promover la evaluación de Regulaciones vigentes a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, tomando en consideración los lineamientos establecidos por la CONAMER; Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar los Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal; Crear, desarrollar, proponer y promover programas específicos de simplificación y mejora regulatoria en el ámbito estatal; Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la política pública de mejora regulatoria; Promover la integración del Catálogo Estatal y los municipales al Catálogo Nacional, y ejecutar los acuerdos, directrices y demás resoluciones adoptados por el Consejo Estatal, en el ámbito de su competencia.

**Capítulo V**

**Del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria**

Este capítulo establece que elSistema Estatal de Mejora Regulatoria tiene como función coordinarse con el Sistema Nacional y los municipales, para implementar la política de mejora regulatoria conforme a la Estrategia Nacional y Estatal planteada, de acuerdo con el objeto de esta Ley, y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

**Capítulo VI**

**De la Implementación de la Política de Mejora Regulatoria por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales**

En este capítulo la ley dispone quelos Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, del orden local y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales, atendiendo a su presupuesto, deberán designar, dentro de su estructura orgánica, una instancia responsable encargada de aplicar lo establecido en la Ley en relación con el Catálogo, o bien, coordinarse con la Autoridad de Mejora Regulatoria estatal.

Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable para procesos jurisdiccionales.

**Capítulo VII**

**Del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria**

El capítulo define queel Observatorio es una instancia de participación ciudadana de interés público, cuya finalidad es coadyuvar, en términos de la Ley General de Mejora Regulatoria, al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional, que servirá de guía para el desarrollo de las políticas de mejora regulatoria para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para estos efectos la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria proporcionará el apoyo que resulte necesario para la realización de evaluación que conduzca el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, conforme a lo previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria.

**Capítulo VIII**

**De los Municipios**

Para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, los municipios integrarán Consejos Municipales de Mejora Regulatoria y deberán expedir su normatividad en la materia de conformidad con las disposiciones jurídicas de mejora regulatoria.

Del mismo modo, la o el Presidente Municipal deberá nombrar un Comisionado Municipal de Mejora Regulatoria, con nivel de titular de área o equivalente en la estructura orgánica municipal, quien estará a cargo de la coordinación y comunicación entre el Sujeto Obligado municipal y la Secretaría como autoridad de Mejora Regulatoria Estatal.

Este comisionado tendrá a su cargo el revisar el marco regulatorio municipal y coadyuvar en la elaboración y actualización de los anteproyectos de reglamentos, bandos, acuerdos y demás regulaciones o reformas a éstas, y realizar los diagnósticos de procesos para mejorar la regulación de actividades económicas específicas; Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y la Agenda Regulatoria conteniendo las propuestas de creación de regulaciones o de reforma específica; Integrar, actualizar y administrar el Catálogo Municipal; Implementar con asesoría de la Autoridad Estatal y la CONAMER la Estrategia en el municipio; Fungir como secretario ejecutivo del Consejo Municipal; Dar seguimiento, controlar y en su caso ejecutar los acuerdos del Consejo Municipal; Proponer al Consejo Municipal la emisión de instrumentos, lineamientos, mecanismos y buenas prácticas para el cumplimiento del objeto de esta Ley; Recibir de los Sujetos Obligados las Propuestas Regulatorias y el Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente y, en su caso, elaborar el dictamen respectivo. De ser necesario enviar el Análisis de Impacto Regulatorio a la Secretaría, para los efectos de que ésta emita su opinión, etc.

El referido capítulo también establece las atribuciones en materia de reforma regulatoria de los municipios, destacando las siguientes: Coordinar por medio del Comisionado Municipal a las dependencias o servidores públicos municipales con los sujetos obligados, entidades públicas, organismos estatales y federales, en los programas y acciones que lleven a cabo para lograr el cumplimiento de la Ley; Elaborar la Agenda Regulatoria, los Programas y acciones para lograr una mejora regulatoria integral, bajo los principios de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia, y establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo, y conforme a las disposiciones secundarias que al afecto se emitan.

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel   
jerárquico inmediato inferior, quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha comunicación con el Comisionado Municipal de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley.

El capítulo prevé la integración de los consejos municipales, en la forma que en seguida se describe: El Presidente Municipal, quien lo presidirá; el Síndico Municipal; el número de regidores que estime cada Ayuntamiento y que serán los encargados de las comisiones que correspondan al objeto de la Ley; el titular del área jurídica; un Secretario Técnico, que será el Comisionado Municipal de Mejora Regulatoria; Representantes empresariales de organizaciones legalmente constituidas, que determine el Presidente Municipal con acuerdo de Cabildo; y los titulares de las Dependencias que determine el Presidente Municipal.

Al igual que en el caso del consejo estatal, se contempla que serán invitados especiales de los Consejos Municipales y podrán participar con voz, pero sin voto: los representantes de confederaciones, cámaras y asociaciones empresariales, colegios, barras y asociaciones de profesionistas; los representantes de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, así como organizaciones de consumidores; y las y los académicos especialistas en materias afines además al Consejo Municipal podrán concurrir como invitados las personas u organizaciones que considere pertinente su Presidente, cuando deban discutirse asuntos determinados, los que tendrán derecho a voz pero no a voto.

Estos consejos de acuerdo con lo previsto en el proyectosesionarán de forma ordinaria cuando menos dos veces al año, dentro de las tres semanas posteriores al inicio del semestre respectivo, y de forma extraordinaria cuando, por la naturaleza de los temas a tratar, sea necesario a juicio del Presidente del Consejo.

Para la correcta consecución de su objeto la ley otorga a los Consejos las facultades y responsabilidades siguientes: Establecer acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regirá la política de mejora regulatoria municipal de conformidad con la Ley y la Ley General; Aprobar el Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal y la Agenda   
Regulatoria; Recibir, analizar y observar el informe anual del avance programático de   
Mejora Regulatoria y la evaluación de los resultados, y proponer las acciones necesarias para optimizar el proceso de mejora regulatoria en las dependencias municipales.

Por lo que hace a las dependencias municipales este capítulo define una serie de obligaciones en materia de mejora regulatoria, como es el caso de las que a continuación se aluden: Elaborar su Programa Anual de Mejora Regulatoria y la Agenda Regulatoria con las propuestas de creación de regulaciones o de reforma específica; y sus Análisis de Impacto Regulatorio, en los términos y dentro de los plazos previstos por la Ley; Elaborar un informe anual del avance programático de mejora regulatoria, que deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo al Secretario Técnico para los efectos legales correspondientes; Mantener actualizada la información de su competencia en el Catálogo,   
incluyendo, entre otros componentes, el Registro Municipal de regulaciones, el de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y monto de los derechos o aprovechamientos aplicables y notificar al Consejero Municipal los cambios que realice, y enviar al Consejero Municipal las Propuestas Regulatorias y el correspondiente Análisis de Impacto Regulatorio.

**TÍTULO TERCERO**

**DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA   
REGULATORIA**

**Capítulo I**

**Del Catálogo de Regulaciones, Trámites y Servicios**

El capítulo empieza por definir el Catálogo Estatal como la herramienta tecnológica que compila las Regulaciones, los Trámites y los Servicios de los Sujetos Obligados de los órdenes de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información. Tendrá carácter público y la información que contenga será vinculante para los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus competencias.

La inscripción y actualización del Catálogo Nacional es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus competencias, por lo que deberán informar periódicamente a la autoridad de mejora regulatoria correspondiente cualquier modificación a la información inscrita en los Catálogos, lo anterior conforme a lo establecido por la Ley General de Mejora Regulatoria.

Dicho catálogo está integrado por los Registros Estatal y Municipales de Regulaciones; los Registros Estatal y Municipales de Trámites y Servicios; el Expediente para Trámites y Servicios; el Registro Estatal de Visitas Domiciliarias, y la Protesta Ciudadana.

**Capítulo II**

**Del Registro Estatal y Municipales de Regulaciones**

De acuerdo a este capítulo estos registros son herramientas tecnológicas que compilan las regulaciones de los Sujetos Obligados del Estado. Tendrá carácter público y contendrá la misma información que estará inscrita en el Registro Nacional de Regulaciones previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria, su administración e integración corresponde a la Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Secretaría.

Los Sujetos Obligados serán los responsables de inscribir y actualizar permanentemente la información que les corresponde en el Registro Estatal de Regulaciones. Cuando exista una Regulación cuya aplicación no se atribuya a algún Sujeto Obligado específico, corresponderá a la Secretaría de Gobierno su registro y actualización.

Así la ley prevé que el Registro Estatal y los Municipales de Regulaciones deberán contemplar para cada Regulación una ficha que contenga al menos la siguiente información:

1. Nombre de la Regulación;
2. Fecha de expedición y, en su caso, de su vigencia;
3. Autoridad o autoridades que la emiten;
4. Autoridad o autoridades que la aplican;
5. Fechas en que ha sido actualizada;
6. Tipo de ordenamiento jurídico;
7. Ámbito de aplicación;
8. Índice de la Regulación;
9. Objeto de la Regulación;
10. Materias, sectores y sujetos regulados;
11. Trámites y Servicios relacionados con la Regulación;
12. Identificación de fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias; y
13. La demás información que se prevea en la Estrategia.

En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores u omisiones en la información inscrita, efectuará un apercibimiento al Sujeto Obligado para que éste subsane la información en un plazo que no deberá exceder de diez días.

En el supuesto de que algún municipio no tenga los recursos para contar con una plataforma electrónica, mediante convenio podrán acordar con el Estado el uso de su plataforma.

**Capítulo III**

**Del Registro Estatal y los Municipales de Trámites y Servicios**

Este capítulo regula lo concerniente a los registros de Trámites y Servicios definiéndolos como herramientas tecnológicas que compilan los Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información. Tendrán carácter público y la información que contengan será vinculante para los Sujetos Obligados, en este sentido se dispone que la inscripción y actualización de los registros de Trámites y Servicios es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados.

La Secretaría de Fiscalización en coordinación con la Secretaría será la responsable de administrar la información que los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal inscriban en el Registro Estatal de Trámites y Servicios y los Sujetos Obligados serán los responsables de ingresar y actualizar la información a los registros de sus Trámites y Servicios. La legalidad y el contenido de la información que inscriban los Sujetos Obligados en los registros de Trámites y Servicios son de su estricta responsabilidad.

En el caso de que la Secretaría de Fiscalización y la Secretaría identifiquen errores u omisiones en la información proporcionada, tendrá un plazo de cinco días para comunicar sus observaciones al Sujeto Obligado. Dichas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos Obligados, quienes a su vez contarán con un plazo de cinco días para solventar las observaciones. Una vez agotado el procedimiento anterior y habiéndose solventado las observaciones, el Sujeto Obligado publicará dentro del término de cinco días la información en el registro de Trámites y Servicios.

La omisión o la falsedad de la información que los Sujetos Obligados inscriban en el registro de Trámites y Servicios serán sancionadas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En este contexto, en el Capítulo también se establece el listado de la información que deberán inscribir los sujetos obligados, la cual consiste en: Nombre y descripción del Trámite o Servicio; Modalidad; Fundamento jurídico de la existencia del Trámite o Servicio; Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que debe o puede realizarse el Trámite o Servicio, y los pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización; Enumerar y detallar los requisitos; Especificar si el Trámite o Servicio debe presentarse mediante formato, escrito libre, ambos o puede solicitarse por otros medios; El formato correspondiente y la última fecha de publicación en el Medio de Difusión; En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la misma; Datos de contacto oficial del Sujeto Obligado responsable del Trámite o Servicio; Plazo que tiene el Sujeto Obligado para resolver el Trámite o Servicio y, en su caso, si aplica la afirmativa o la negativa ficta; El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado para prevenir al solicitante y el plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención; Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho monto, así como las alternativas para realizar el pago; Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan; Criterios de resolución del Trámite o Servicio, en su caso; Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el Trámite o solicitar el Servicio, incluyendo su domicilio; Horarios de atención al público; Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así como el domicilio y demás datos relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas, y la información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del Trámite o Servicio.

Los Sujetos Obligados deberán inscribir en el Registro la información a que se refiere el párrafo anterior y la Secretaría de Fiscalización, dentro de los cinco días hábiles siguientes, deberá efectuar la publicación sin cambio alguno, siempre que la disposición que dé fundamento a la actualización de la información contenida en el Catálogo se encuentre vigente. En caso contrario, la Secretaría de Fiscalización no podrá efectuar la publicación correspondiente sino hasta la entrada en vigor de la disposición que fundamente la modificación del Catálogo.

Los Sujetos Obligados deberán inscribir o modificar la información en el Catálogo dentro de los diez días siguientes a que se publique en el Medio de difusión estatal.

Los Sujetos Obligados que ofrezcan Trámites y Servicios deberán tener a disposición del público la información que al respecto esté inscrita en el Catálogo.

En el mismo sentido se dispone que losSujetos Obligados no podrán aplicar Trámites o Servicios adicionales a los establecidos en el Catálogo, ni podrán exigir requisitos adicionales en forma distinta a como se inscriban en el mismo, a menos que la existencia del Trámite o Servicio sea por única ocasión y no exceda los sesenta días; o respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con interés jurídico.

En los supuestos aludidos, los Sujetos Obligados deberán dar aviso previo a la Autoridad de Mejora Regulatoria.

**Capítulo IV**

**Del Expediente para Trámites y Servicios**

Este capítulo dispone que elExpediente para Trámites y Servicios operará conforme a los lineamientos que aprueben el Consejo Nacional y el Consejo Estatal, y el mismo deberá considerar mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia.

Los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en sus programas de Mejora Regulatoria las acciones para facilitar a otros Sujetos Obligados, a través del Expediente para Trámites y Servicios, el acceso, consulta y transferencia de manera segura de las actuaciones electrónicas que se generen con motivo de un Trámite o Servicio.

En similar sentido se prevé quelos documentos electrónicos que integren los Sujetos Obligados al Expediente de Trámites y Servicios conforme a lo dispuesto por esta Ley, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos.

En este sentido, se establece que los Sujetos Obligados integrarán al Expediente para Trámites y Servicios, los documentos firmados autógrafamente cuando se encuentre en su poder el documento original y se cumpla con lo siguiente: Que la migración a una forma digital haya sido realizada o supervisada por un servidor público que cuente con facultades de certificación de documentos en términos de las disposiciones aplicables; Que la información contenida en el documento electrónico se mantenga íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta; Que el documento electrónico permita conservar el formato del documento impreso y reproducirlo con exactitud, y que cuente con la Firma Electrónica Avanzada del servidor público competente.

**Capítulo V**

**Del Registro Estatal de Visitas Domiciliarias**

Este capítulo regula lo referente al Registro Estatal de Visitas Domiciliarias, disponiendo en primer término que dicho registro se conforma por: El Registro Estatal de Visitas Domiciliarias; el padrón de inspectores, verificadores y visitadores en el ámbito administrativo; el listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que puedan realizar los Sujetos Obligados; los números telefónicos de los órganos internos de control del Sujeto Obligado al que pertenezcan los inspectores, verificadores y visitadores respectivos para realizar denuncias; los números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias. Ello con la finalidad de que las personas a las cuales se realizan las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias puedan cerciorarse de la veracidad de las mismas.

En este sentido, se dispone que los Sujetos Obligados serán los encargados de ingresar la información directamente en el Padrón y de mantenerla debidamente actualizada.

Se exceptúan de esto las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias requeridas para atender situaciones de emergencia, de las cuales se deberá informar dentro de un plazo de cinco días hábiles a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente las razones para habilitar a nuevos inspectores o verificadores requeridos para atender la situación de emergencia.

La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Fiscalización será responsable de administrar y publicar la información del Padrón. Las Autoridades de Mejora Regulatoria serán las responsables de supervisar y coordinar el Padrón en el ámbito de sus competencias.

En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores u omisiones en la información proporcionada, lo comunicará al Sujeto Obligado en un plazo de cinco días hábiles.

Estas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos Obligados, quienes contarán con un plazo de cinco días hábiles para solventar las observaciones o expresar la justificación por la cual no son atendibles dichas observaciones. Una vez agotado el procedimiento anterior y habiéndose solventado las observaciones, la Autoridad de Mejora Regulatoria publicará dentro del término de cinco días hábiles la información en el Padrón.

**Capítulo VI**

**De la Protesta Ciudadana**

La iniciativa establece en este capítulo la figura de la protesta ciudadana, refiriéndose que el solicitante de algún trámite o serviciopodrá presentar una Protesta Ciudadana cuando estime que con acciones u omisiones el servidor público encargado del Trámite o Servicio niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con lo previsto en la Ley.

La Protesta Ciudadana será revisada por la Autoridad de Mejora Regulatoria quien emitirá su opinión en un plazo de cinco días hábiles, dando contestación al ciudadano que la presentó; dará vista de la misma al Sujeto Obligado y, en su caso, al órgano competente en materia de responsabilidades.

El procedimiento de la Protesta Ciudadana se regulará conforme a los lineamientos que emita el Consejo Nacional.

**Capítulo VII**

**Agenda Regulatoria**

Se dispone que losSujetos Obligados deberán presentar su Agenda Regulatoria ante la Autoridad de Mejora Regulatoria en los primeros cinco días de los meses de mayo y noviembre de cada año, misma que podrá ser aplicada en los periodos subsecuentes de junio a noviembre y de diciembre a mayo respectivamente. La Agenda Regulatoria de cada Sujeto Obligado deberá informar al público la Regulación que pretenden expedir en dichos periodos.

Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados, la Secretaría como Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria la sujetará a una consulta pública por un plazo mínimo de veinte días hábiles. La Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria deberá remitir a los Sujetos Obligados las opiniones vertidas en la consulta pública mismas que no tendrán carácter vinculante.

Dicha agendadeberá incluir al menos el nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria; la materia sobre la que versará la Regulación; la problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria; la justificación para emitir la Propuesta Regulatoria; y la fecha tentativa de presentación.

**Capítulo VIII**

**Del Análisis de Impacto Regulatorio**

De acuerdo a este capítuloel Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los beneficios de las Regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para atender una problemática específica.

El Consejo Estatal aprobará los lineamientos generales para la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio, mismos que deberán aplicar las Autoridades Estatales y/o Municipales de Mejora Regulatoria en la expedición de sus manuales correspondientes, lo anterior se llevará a cabo tomando en consideración lo establecido por las disposiciones generales que contenga la Estrategia Nacional.

El Análisis de Impacto Regulatorio deberá incluir, por lo menos los siguientes rubros:

* Exposición sucinta de las razones que generan la necesidad de crear nuevas regulaciones, o bien, reformarlas;
* Alternativas regulatorias y no regulatorias que se tomaron en cuenta para arribar a la propuesta de crear o reformar las regulaciones de que se trate justificando porque la propuesta es la mejor alternativa;
* Problemas que la actual regulación genera y cómo el proyecto de nueva regulación o su forma plantea resolverlos;
* Posibles riesgos que se correrían de no emitir las regulaciones propuestas;
* Fundamento jurídico que da sustento al proyecto y la congruencia de la regulación propuestas con el ordenamiento jurídico vigente;
* Beneficios y costos cuantificables que generaría la regulación propuesta y aquellos que resulten aplicables para los particulares;
* Identificación y descripción de los trámites eliminados, reformados y/o generados con la regulación propuesta;
* Recursos para asegurar el cumplimiento de la regulación, así como los mecanismos, metodologías e indicadores que serán de utilidad para la evaluación de la implementación, verificación e inspección de la propuesta regulatoria;
* La descripción de los esfuerzos de consulta pública previa, llevados a cabo para generar la regulación o propuesta regulatoria, las opiniones de los particulares que hayan sido recabadas en el ejercicio de la Agenda Regulatoria, así como aquellos comentarios que se hayan recibidos durante el proceso de mejora regulatoria, y los demás que apruebe el Consejo.

La iniciativa establece quepara asegurar la consecución de los objetivos de esta Ley, los Sujetos Obligados adoptarán esquemas de revisión, mediante la utilización del Análisis de Impacto Regulatorio de Propuestas Regulatorias y de Regulaciones existentes, a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, conforme a las mejores prácticas internacionales.

Para este último caso podrá realizarse un examen ex post, a través del cual se evalúe la aplicación, efectos y observancia de la Regulación vigente, misma que será sometida a consulta pública por un plazo de treinta días con la finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los interesados. Asimismo, la Autoridad de Mejora Regulatoria podrá efectuar recomendaciones con el objeto de contribuir a cumplir con los objetivos relacionados con la Regulación, incluyendo propuestas de modificación al marco regulatorio aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán manifestar por escrito su consideración respecto a las opiniones, comentarios y recomendaciones que se deriven de la consulta pública y del análisis que efectúe la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria correspondiente.

Por lo que hace a la elaboración de las propuestas regulatorias, la ley establece que éstas deberán presentarse a laAutoridad de Mejora Regulatoria correspondiente, junto con un Análisis de Impacto Regulatorio que contenga los elementos que la propia ley determina, cuando menos treinta días antes de la fecha en que pretendan publicarse en el Medio de Difusión Oficial o someterse a la consideración del Titular del Ejecutivo Estatal.

En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria reciba un Análisis de Impacto Regulatorio que a su juicio no sea satisfactorio, podrá solicitar a los Sujetos Obligados, dentro de los diez días hábiles siguientes a que reciba dicho Análisis de Impacto Regulatorio, que realice las ampliaciones o correcciones a que haya lugar.

Cuando, a criterio de la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria, el Análisis de Impacto Regulatorio siga sin ser satisfactorio y la Propuesta Regulatoria de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto sustancial sobre un sector específico, podrá solicitar al Sujeto Obligado que con cargo a su presupuesto efectúe la designación de un experto, quien deberá ser aprobado por la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria. El experto deberá revisar el Análisis de Impacto Regulatorio y entregar comentarios a la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria y al propio Sujeto Obligado dentro de los cuarenta días siguientes a su contratación.

El proyecto también dispone quela Autoridad de Mejora Regulatoria hará públicos, desde que las reciba, las Propuestas Regulatorias junto con el Análisis de Impacto Regulatorio, los dictámenes que se emitan, las respuestas a éstos, las autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capítulo, así como las opiniones y comentarios de los interesados que se recaben durante la consulta pública.

Asimismo, deberá establecer plazos mínimos de consulta pública que no podrán ser menores a veinte días, de conformidad con los instrumentos jurídicos que la Autoridad de Mejora Regulatoria establezca en el ámbito de su competencia. La determinación de dichos plazos mínimos deberá tomar en consideración el impacto potencial de las Propuestas Regulatorias, su naturaleza jurídica y ámbito de aplicación, entre otros elementos que se consideren pertinentes y que deberán establecerse mediante el Manual de Funcionamiento del Análisis de Impacto Regulatorio.

Los Sujetos Obligados podrán solicitar a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente la aplicación de plazos mínimos de consulta pública menores a los previstos en esta Ley, conforme a los lineamientos que para tal efecto emitan.

Continuando con el procedimiento, la ley prevé quela Autoridad de Mejora Regulatoria deberá emitir y entregar al Sujeto Obligado un dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio y de la Propuesta Regulatoria respectiva, dentro de los treinta días siguientes a la recepción del Análisis de Impacto Regulatorio, de las ampliaciones o correcciones al mismo.

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior será preliminar cuando existan comentarios derivados de la consulta pública o de la propia Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria que requieran ser evaluados por el Sujeto Obligado que ha promovido la Propuesta Regulatoria.

Así, el dictamen preliminar deberá considerar las opiniones que en su caso reciba la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria de los interesados y comprenderá, entre otros aspectos, una valoración sobre si se justifican las acciones contenidas en la Propuesta Regulatoria, así como el cumplimiento de los principios y objetivos de la política de mejora regulatoria establecidos en esta Ley.

En el caso de que el Sujeto Obligado manifieste conformidad hacia las recomendaciones contenidas en el dictamen preliminar, deberá ajustar la Propuesta Regulatoria en consecuencia. En caso contrario, deberá comunicar por escrito las razones respectivas a la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, a fin de que ésta emita un dictamen final dentro de los cinco días siguientes.

Así, la ley determina que el dictamen podrá ser final únicamente cuando no existan comentarios derivados de la consulta pública o de la propia Autoridad de Mejora Regulatoria. En caso de discrepancia entre el Sujeto Obligado y la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria, ésta última resolverá, en definitiva.

También se fija, queel encargado de la Publicación del Periódico Oficial o Gaceta Municipal, únicamente publicará en el Medio de Difusión las Regulaciones que expidan los Sujetos Obligados cuando éstos acrediten contar con una resolución definitiva de la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria respectiva. La versión que publiquen los Sujetos Obligados deberá coincidir íntegramente con la contenida en la resolución antes señalada, salvo en el caso de las disposiciones que emite el Titular del Ejecutivo Estatal, siendo la Consejería Jurídica o algún homólogo quienes resolverán el contenido definitivo.

El encargado de la publicación del Boletín Oficial u homólogo, publicará en el Medio de Difusión que corresponda, dentro de los siete primeros días de cada mes, la lista que le proporcione la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria de los títulos de las Regulaciones y los documentos a que se refiere el artículo 70 de esta Ley.

Por último el capítulo prevé que los Sujetos Obligados deberán someter las Regulaciones que generen costos de cumplimiento a una revisión cada cinco años ante la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria correspondiente, utilizando para tal efecto el Análisis de Impacto Regulatorio ex post. Lo anterior, con el propósito de evaluar los efectos de su aplicación y permitir que los Sujetos Obligados determinen la pertinencia de su abrogación, modificación o permanencia, para alcanzar sus objetivos originales y atender a la problemática vigente.

Para el logro del mayor beneficio social de la Regulación sujeta a revisión, la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente podrá proponer modificaciones al marco regulatorio vigente o acciones a los Sujetos Obligados correspondientes.

**Capítulo IX**

**De los Programas de Mejora Regulatoria**

Los Programas de Mejora Regulatoria son una herramienta que tiene por objeto mejorar la Regulación vigente e implementar acciones de simplificación de Trámites y Servicios. Así, los Sujetos Obligados someterán a la Autoridad de Mejora Regulatoria que les corresponda un Programa de Mejora Regulatoria, con una vigencia anual, en relación con la Regulación, Trámites y Servicios que aplican, así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes.

La Autoridad de Mejora Regulatoria, podrá emitir opinión a los Sujetos Obligados con propuestas específicas para mejorar sus Regulaciones y simplificar sus Trámites y Servicios, estas propuestas deberán ser valoradas y en su caso incorporadas a sus programas de mejora regulatoria o, en su defecto, manifestar por escrito las razones por las que no considera factible su incorporación en un plazo no mayor a diez días. La opinión de la Autoridad de Mejora Regulatoria y la contestación del Sujeto Obligado serán publicadas en el portal de la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria.

Laleydisponequepara el caso de Trámites y Servicios los Programas de Mejora Regulatoria inscritos serán vinculantes para los Sujetos Obligados y no podrán darse de baja, salvo que las modificaciones al programa original reduzcan al menos los costos de cumplimiento de los Trámites y Servicios comprometidos originalmente.

Para el caso de las Regulaciones, los Sujetos Obligados únicamente podrán solicitar ajustes a los Programas de Mejora Regulatoria, siempre y cuando justifiquen dicha solicitud.

Para finalizar este capítulo contempla, que los Trámites y Servicios previstos en leyes y reglamentos podrán ser simplificados, mediante acuerdos generales que publiquen los titulares de los Sujetos Obligados, en los siguientes rubros:

* Habilitar el uso de herramientas electrónicas para la presentación de Trámites y Servicios;
* Establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos;
* Extender la vigencia de las resoluciones otorgadas por los Sujetos Obligados; y
* No exigir la presentación de datos y documentos.

**Capítulo X**

**De los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria**

Los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria son herramientas para promover que las Regulaciones, Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados cumplan con el objeto de esta Ley, a través de certificaciones otorgadas por la Autoridad Nacional y/o Estatal de Mejora Regulatoria, así como fomentar la aplicación de buenas prácticas nacionales e internacionales en la materia.

Las certificaciones se otorgarán a petición de los Sujetos Obligados, previo cumplimiento de los requisitos que al efecto se establezcan en los lineamientos que expida la Autoridad Nacional y/o Estatal de Mejora Regulatoria. Dichos lineamientos deberán precisar al menos lo siguiente:

* Definición de los estándares mínimos de mejora regulatoria que deberán ser aplicados por el Sujeto Obligado;
* El formato de solicitud que deberán presentar los Sujetos Obligados;
* Procedimiento a que se sujetará la solicitud, evaluación y otorgamiento de la certificación, especificando los plazos aplicables;
* Los criterios, indicadores y métricas para el otorgamiento de la certificación;
* Vigencia de la certificación;
* Supuestos para la revocación y renovación del certificado; y
* Mecanismos de monitoreo y seguimiento.

En este mismo orden de ideas, los interesados en solicitar la certificación deberán cumplir con lo siguiente:

* Proporcionar la información que resulte necesaria para determinar la procedencia, o no, de la certificación solicitada;
* Brindar apoyo para la coordinación de agendas de trabajo, reuniones y entrevistas que resulten necesarias;
* Proporcionar información para el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los estándares mínimos de mejora regulatoria, misma que deberá estar debidamente respaldada y documentada, y
* Dar cumplimiento a los plazos para la solicitud, evaluación y otorgamiento de la certificación.

El incumplimiento de cualquiera de los supuestos previstos será motivo suficiente para desechar la solicitud del Sujeto Obligado.

**Capítulo XI**

**De las Encuestas, Información Estadística y Evaluación en Materia de Mejora Regulatoria**

Se establecen facultades a la autoridad de mejora regulatoria para apoyar la implementación de las encuestas en los términos de la Ley General de Mejora Regulatoria.

**TÍTULO CUARTO**

**DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA**

**Capítulo Único**

**De las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos**

El último Título establece que el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley, por parte de los servidores públicos de los órdenes de gobierno será sancionado en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**El régimen transitorio del proyecto legislativo refiere lo siguiente:**

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria deberá estar instalado en un plazo que no exceda los noventa días naturales a la entrada en vigor de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria.

**ARTÍCULO TERCERO.** Las Autoridades de Mejora Regulatoria y los Sujetos Obligados darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente Ley con cargo a sus respectivos presupuestos.

**ARTÍCULO CUARTO.** A partir de la entrada en vigor de la esta Ley, los Municipios contarán con un plazo de un año para adecuar sus Reglamentos al contenido de dicha Ley. Los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria deberán instalarse formalmente dentro de un plazo de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de las adecuaciones correspondientes en su legislación local.

**ARTÍCULO QUINTO**. Los procedimientos que se encuentren en trámite una vez que entre en vigor la presente Ley, serán concluidos de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio, en términos de las disposiciones aplicables.

**ARTÍCULO SEXTO.** La Secretaría publicará los lineamientos dentro del plazo que no exceda a un año contado, a partir de la entrada en vigor de dicha Ley, de al menos las siguientes herramientas:

1. Análisis de Impacto regulatorio.
2. Programa Estatal de mejora regulatoria

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** Se abroga la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 38 de fecha 10 de mayo de 2013.

Una vez agotado el estudio y análisis de la iniciativa quienes conformamos la presente dictaminadora coincidimos en la importancia de emitir una ley de estas características a fin de fortalecer la competitividad en nuestro Estado a través de la creación de instituciones y la implementación de políticas y herramientas que permitan la simplificación de trámites gubernamentales estimulando con ello la eficiencia y la productividad.

En este mismo sentido, quienes dictaminamos observamos que la iniciativa tiene los alcances de:

* Desplegar una política pública de mejora regulatoria;
* Propiciar un desarrollo económico que favorezca la competitividad; e
* Instrumentar un modelo de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación de trámites y servicios, así como medidas para facilitar la creación de empresas.

Así, estamos convencidos que con la expedición de este nuevo ordenamiento, que hay que decir responde al nuevo marco constitucional y general en la materia, y que además guarda gran parecido con la Ley Modelo elaborada por la CONAMER, se obtendrán múltiples beneficios como lo son la eficiencia administrativa, la respuesta más pronta a las necesidades ciudadanas, el fortalecimiento de la transparencia y la certeza jurídica, el crecimiento económico y la generación de empleos, por mencionar algunos.

Antes de finalizar con estas consideraciones, es de suma importancia para esta comisión dictaminadora aludir, que en fecha 21 de febrero del año en curso, se nos turnó un oficio suscrito por el C. Eduardo Dávila Aguirre, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Saltillo, dirigido al Dip. Jaime Bueno Zertuche, en su calidad de coordinador de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

A través de dicho documento, se hace constar entre otras cosas lo siguiente:

*Estando enterados de que la “Iniciativa de Decreto que expide la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, fue turnada a esa Comisión, para los efectos legales del proceso legislativo, y en cumplimiento de uno de los principales objetivos de esta Cámara Empresarial y en virtud del convenio de colaboración suscrito con la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste, cuyo objeto es colaborar para mejorar las leyes de la entidad, proponemos la introducción de una modificación a la antes referida iniciativa, en los términos siguientes:*

*El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la Ley General en la materia.*

*El 18 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo”. Dicha ley tiene como objeto establecer los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria;*

*El artículo 21 de la Ley General de Mejora Regulatoria establece la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria como un instrumento programático para articular la política de mejora regulatoria de los sujetos obligados y asegurar el cumplimiento de la misma.*

*Por lo anteriormente expuesto y fundado proponemos la adición siguiente:*

|  |  |
| --- | --- |
| *DICE* | *DEBE DECIR* |
| *Capítulo VIII*  *Del Análisis de Impacto Regulatorio*  *Artículo 67. …*  *….* | *Capítulo VIII*  *Del Análisis de Impacto Regulatorio*  *Artículo 67. …*  *….*  *VII. Que de conformidad con la Estrategia Nacional de mejora regulatoria, los sujetos obligados de las diversas dependencias, al momento de emitir por cada una de las nuevas regulaciones, deberán abrogar o derogar tres obligaciones regulatorias o tres actos que se refieran a la misma materia o sector económico regulado.*  *…* |

*Consideramos que con la adición antes referida contribuiremos a que los trámites de los gobiernos sean más expeditos y la carga regulatoria menos excesiva.*

*Adicionalmente nuestra propuesta no impacta de forma presupuestal en la implementación de la ley en comento, por el contrario facilitará la apertura de nuevas empresas y la creación de fuentes de empleo formal.*

Una vez agotado el estudio del contenido de esta comunicación, los integrantes de la presente comisión legislativa observamos que la propuesta es conducente con la finalidad que persigue la norma y que además es congruente con las bases contenidas en la Ley General de la materia, por lo que se incluye en el proyecto de decreto contenido en este dictamen.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

**D E C R E T O**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se expide la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, para quedar como sigue:

**LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y SUS MUNICIPIOS**

**TÍTULO PRIMERO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Capítulo I**

**Objeto de la Ley**

**Artículo 1.** La presente ley es de orden público y de observancia general para el Estado de Coahuila de Zaragoza y tiene por objeto establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse las dependencias y entidades, organismos públicos descentralizados y desconcentrados de la administración pública estatal y municipal, así como los organismos públicos autónomos en el ámbito de sus atribuciones y respectivas competencias en materia de mejora regulatoria.

Los poderes legislativo, judicial y los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial del Estado, serán sujetos obligados para efectos de lo previsto en esta Ley, solo respecto a las obligaciones contenidas en el Registro Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios.

Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquellas, de responsabilidades de los servidores públicos; tampoco lo será para el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales.

La aplicación de la presente ley corresponde a la Secretaría de Economía, al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y a las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria, Comités, Unidades Administrativas o Áreas Responsables dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

**Artículo 2.** Son objetivos de esta Ley:

1. Establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios, buscando en todo momento la mejora integral, continua y permanente de las regulaciones tanto estatales como municipales;
2. Armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria del Estado con las disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria;
3. Establecer la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria;
4. Establecer los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de mejora regulatoria;
5. Regular la operación de los sujetos obligados dentro del Catálogo Estatal y Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios;
6. Establecer las obligaciones de los Sujetos Obligados para facilitar los trámites y la obtención de servicios, incluyendo el uso de tecnologías de la información;
7. Establecer los principios, bases, procedimientos e instrumentos para que las Regulaciones garanticen beneficios superiores a sus costos y el máximo bienestar para la sociedad; y
8. Promover la eficacia y eficiencia gubernamental, fomentando el desarrollo socioeconómico e inversión en la entidad.

**Artículo 3.** En la aplicación de esta Ley, se entenderá por:

1. Agenda Regulatoria: La propuesta de las Regulaciones que los Sujetos Obligados pretenden expedir;
2. APE: La Administración Pública Estatal integrada por el conjunto de los   
   órganos del Estado que llevan a cabo la procuración de la satisfacción de los intereses o necesidades de la colectividad, cuya conformación se establece en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza;
3. Análisis de Impacto Regulatorio: Herramienta mediante la cual los sujetos obligados justifican, ante la Autoridad de Mejora Regulatoria, la creación de nuevas disposiciones de carácter general, reformas, modificación o en su caso, derogación o abrogación de los instrumentos normativos, con base en los principios de la política de mejora regulatoria;
4. Autoridad de Mejora Regulatoria: La Secretaría de Economía, el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, las comisiones de mejora regulatoria municipales, los comités, las unidades administrativas o áreas responsables de conducir la política de mejora regulatoria en sus respectivos ámbitos de competencia;
5. Catálogo: El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios;
6. Catálogo Estatal: El Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios;
7. Catálogo Municipal: El Catálogo Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios;
8. CONAMER: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;
9. Comisionados Municipales: Los Comisionados Municipales de Mejora Regulatoria;
10. Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Coahuila de Zaragoza;
11. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Mejora Regulatoria;
12. Enlace de Mejora Regulatoria: Servidor público designado como responsable de mejora regulatoria al interior de cada instancia gubernamental;
13. Estrategia: La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, que servirá de guía e impondrá las directrices para la formulación de la correspondiente Estrategia Estatal;
14. Estrategia Estatal: La Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria;
15. Expediente para Trámites y Servicios: El conjunto de documentos electrónicos emitidos por los Sujetos Obligados asociados a personas físicas o morales, que pueden ser utilizados por cualquier autoridad competente, para resolver trámites y servicios;
16. Ley: La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Coahuila de Zaragoza y sus municipios;
17. Ley General: Ley General de Mejora Regulatoria;
18. Medio de Difusión: La publicación oficial impresa o electrónica por medio de la cual los Sujetos Obligados dan a conocer las Regulaciones que expiden;
19. Observatorio: El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria;
20. Padrón: El Padrón Estatal de servidores públicos con nombramiento de inspector, verificador, visitador o supervisor o cuyas competencias sean las de vigilar el cumplimiento de alguna Regulación;
21. Propuesta Regulatoria: Los anteproyectos de iniciativas de leyes o regulaciones o disposiciones de carácter general que pretendan expedir los Sujetos Obligados, en el ámbito de su competencia y que se presenten a la consideración de las Autoridades de Mejora Regulatoria en los términos de esta Ley;
22. Programa de Mejora Regulatoria: Programa Estatal de Mejora Regulatoria.
23. Portal oficial: Al espacio de una red informática administrada por el gobierno del estado o municipal que ofrece de una manera sencilla e integrada, acceso al interesado en gestionar trámites y servicios que ofrecen los sujetos obligados.
24. Regulación o Regulaciones: Cualquier normativa de carácter general cuya denominación puede ser Acuerdo, Circular, Código, Criterio, Decreto, Directiva, Disposición de carácter general, Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo, Ley, Lineamiento, Manual, Metodología, Regla, Reglamento, o cualquier otra denominación de naturaleza análoga que expida cualquier Sujeto Obligado;
25. Reglamento: El Reglamento de esta Ley que expida el Titular del Ejecutivo Estatal, en el ámbito de su competencia;
26. Reglamento Interior: Al Reglamento Interior del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Coahuila de Zaragoza;
27. Registro Estatal: Al Registro Estatal de Trámites y Servicios;
28. Registro Municipal: Al Registro Municipal de Trámites y Servicios del municipio que corresponda;
29. Secretaría: Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza;
30. Secretaría de Fiscalización: Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza;
31. Servicio: Cualquier beneficio o actividad que los Sujetos Obligados, en el ámbito de su competencia, brinden a particulares, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos aplicables;
32. Simplificación: Al procedimiento por medio del cual se propicia la   
    transparencia y la capacidad de síntesis en la elaboración de las regulaciones y procesos administrativos, así como la reducción de plazos y requisitos o la digitalización o abrogación de los trámites que emanan de tales disposiciones de carácter general, que buscan eliminar cargas al ciudadano;
33. Protesta Ciudadana: Al mecanismo mediante el cual se da seguimiento a   
    peticiones y/o inconformidades ciudadanas por presuntas negativas y/o falta de respuesta de trámites y/o servicios previstos en la normatividad aplicable, sin aparente razón justificada por parte de la autoridad emisora;
34. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Mejora Regulatoria;
35. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Mejora Regulatoria;
36. Sistema Municipal: El Sistema Municipal de Mejora Regulatoria;
37. Sujetos Obligados: La Administración Pública Estatal y sus respectivos homólogos de los municipios y sus dependencias y entidades;
38. Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado realicen ante la autoridad competente en el ámbito estatal o municipal, ya sea para cumplir una obligación o, en general, a fin de que se emita una resolución.

**Artículo 4.** Cuando los plazos fijados por esta Ley y su Reglamento sean en días, estos se entenderán como días hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles.

Cuando no se especifique el plazo, se entenderán cinco días hábiles para cualquier actuación.

**Artículo 5.** La Administración Pública Estatal, y las Municipales, impulsarán el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones para facilitar la interacción con los ciudadanos a efecto de que estos puedan dirigir sus solicitudes, opiniones, comentarios, a través de los sistemas electrónicos de comunicación, así como obtener la atención o resolución de aquellas por los mismos canales.

Lo anterior en medida de los recursos con los que cuente cada uno de los sujetos obligados.

**Capítulo II**

**De los Principios, Bases y Objetivos de la Mejora Regulatoria**

**Artículo 6.** Los Sujetos Obligados, en la expedición de las Regulaciones, Trámites y Servicios deberán respetar los principios de legalidad, reserva de ley, jerarquía normativa, principio de máximo beneficio, control regulatorio, competitividad, máxima publicidad, participación ciudadana y todos aquellos principios que tiendan al cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

**Artículo 7.** La política de mejora regulatoria se orientará por los principios que a continuación se enuncian:

1. Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social;
2. Seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones;
3. Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos;
4. Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio nacional;
5. Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, Trámites y Servicios;
6. Accesibilidad tecnológica;
7. Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos;
8. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas;
9. Fomento a la competitividad y el empleo;
10. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del funcionamiento eficiente de los mercados, y
11. Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio.

Los Sujetos Obligados deberán ponderar los valores jurídicos tutelados a que se refiere este precepto y explicitar los criterios de decisión que subyacen a la política de mejora regulatoria atendiendo a los objetivos establecidos en esta Ley.

**Artículo 8.** Son objetivos de la política de mejora regulatoria, los siguientes:

1. Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios sociales y económicos superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar para la sociedad;
2. Promover la eficacia y eficiencia de la Regulación, Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados;
3. Garantizar que las Regulaciones no impongan barreras al comercio, a la libre concurrencia y la competencia económica;
4. Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las Regulaciones, Trámites y Servicios;
5. Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios; Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión gubernamental;
6. Facilitar y mejorar el ambiente para hacer negocios;
7. Facilitar, a través del Sistema Estatal, los mecanismos de coordinación y participación entre las Autoridades de mejora regulatoria y los Sujetos Obligados del ámbito estatal y municipal, para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
8. Atender al cumplimiento de los objetivos de esta Ley considerando las condiciones de desarrollo institucional y las capacidades técnicas, financieras y humanas;
9. Promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la mejora regulatoria;
10. Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, a través del desarrollo de la referida política pública;
11. Armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria en el estado atendiendo los principios de esta Ley;
12. Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parte de la sociedad, de la Regulación, mediante la accesibilidad y el uso de lenguaje claro;
13. Coadyuvar en las acciones para reducir el costo social y económico derivado de los requerimientos de Trámites y Servicios establecidos por parte de los Sujetos Obligados; y
14. Diferenciar los requisitos, Trámites y Servicios para facilitar el establecimiento y funcionamiento de las empresas según su nivel de riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en zonas de atención prioritaria, así como otras características relevantes para el estado.

**Artículo 9.** Para efectos de la presente ley, se aplicará de manera supletoria la Ley General de Mejora Regulatoria.

**Artículo 10.** Los gastos que los Sujetos Obligados requieran para implementar acciones en materia de mejora regulatoria deberán ser considerados e incluidos en sus presupuestos y programas respectivos.

**TÍTULO SEGUNDO**

**DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA**

**Capítulo I**

**De la Integración**

**Artículo 11.** El Sistema Estatal tiene por objeto coordinar a las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal, en su respectiva competencia, a través de normas, principios, objetivos, planes, directrices, órganos, instancias y procedimientos para la implementación de la Estrategia Nacional y la formulación, desarrollo e implementación de la Estrategia Estatal y la política en materia de mejora regulatoria.

**Artículo 12.** El Sistema Estatal estará integrado por:

1. El Consejo Estatal;
2. La Estrategia Estatal;
3. La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza,
4. Los Sistemas de Mejora Regulatoria de los municipios y las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria.
5. Los Sujetos Obligados.

**Artículo 13.** Son herramientas del Sistema Estatal:

1. El Catálogo;
2. La Agenda Regulatoria Estatal y las Municipales;
3. El Análisis de Impacto Regulatorio; y
4. Los Programas de Mejora Regulatoria.

**Artículo 14.** Los titulares de los Sujetos Obligados designarán a un servidor público con nivel de titular de área como responsable oficial de mejoraregulatoria para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la política de mejora regulatoria y la Estrategia Estatal al interior de cada Sujeto Obligado conforme a lo dispuesto en la Ley General de Mejora Regulatoria, en la Estrategia Nacional, en esta Ley y en las disposiciones que de ellas deriven.

En caso de que el Sujeto Obligado no cuente con servidores públicos de dicho nivel, deberá ser un servidor público que tenga un nivel jerárquico inmediato inferior al del titular. En el caso del poder legislativo y judicial, estos decidirán lo conducente de conformidad con sus disposiciones orgánicas.

La coordinación y comunicación entre el Sujeto Obligado y la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente se llevará a cabo a través del responsable oficial de mejora regulatoria.

**Capítulo II**

**Del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria**

**Artículo 15.** El Consejo Estatal es el órgano responsable de coordinar la política estatal en materia de mejora regulatoria y tendrá facultades para establecer las bases, principios y mecanismos para la efectiva coordinación en el ámbito estatal de la misma, para promover el uso de metodologías, instrumentos, programas y las buenas prácticas nacionales e internacionales en la materia; asimismo fungirá como órgano de vinculación con   
los sujetos obligados y con diversos sectores de la sociedad. Dicho Consejo estará integrado por:

1. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, quien lo presidirá;
2. El Titular de la Secretaría de Economía, como Secretario Ejecutivo;
3. El Director General de Mejora Regulatoria y Competitividad, como Coordinador General;
4. Los siguientes vocales:

A.- Del Sector Público Estatal:

1. El Titular de la Secretaría de Gobierno;

2. El Titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas;

3. El Titular de la Secretaría de Finanzas

4. El Titular de la Secretaría de Medio Ambiente; y

5. .El Titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad;

B. Del Sector Público Federal:

6. El Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria.

C. Del Poder Legislativo:

7. El Coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo de la Legislatura Local.

D. Del Sector Empresarial:

8. Un representante del sector empresarial por cada región de la entidad.

**Artículo 16.** Serán invitados permanentes del Consejo Estatal y podrán participar con voz, pero sin voto:

1. El Comisionado Presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública;
2. El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y
3. Un Representante del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, y
4. Un representante de los Municipios.

**Artículo 17.** Serán invitados especiales del Consejo Estatal y podrán participar con voz, pero sin voto:

1. Representantes de confederaciones, cámaras y asociaciones empresariales, colegios, barras y asociaciones de profesionistas;
2. Representantes de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, así como organizaciones de consumidores, y
3. Académicos especialistas en materias afines.

**Artículo 18.** El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:

1. Conocer e implementar en el ámbito de sus competencias la Estrategia Nacional de mejora regulatoria aprobada previamente por el Consejo Nacional y la formulación, desarrollo e implementación de la Estrategia Estatal y la política en materia de mejora regulatoria estableciendo para tal efecto directrices, bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos.
2. Aprobar la Agenda Estatal de Mejora Regulatoria que presente la Secretaría para tal efecto;
3. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre esta materia generen los Sujetos Obligados y las Autoridades de Mejora Regulatoria;
4. Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, información estadística y evaluación en materia de Mejora Regulatoria;
5. Aprobar, a propuesta de la Secretaría, los indicadores que las Autoridades de Mejora Regulatoria y los Sujetos Obligados, deberán observar para la evaluación y medición de los resultados de la política estatal de mejora regulatoria incluyendo la simplificación de Trámites y Servicios del ámbito estatal;
6. Conocer y opinar sobre la evaluación de resultados a la que se refiere la fracción anterior, que presente la Secretaría;
7. Promover el uso de principios, objetivos, metodologías, instrumentos, programas, criterios y herramientas acordes con las buenas prácticas estatales, nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria;
8. Conocer problemáticas, obstáculos y fallos regulatorios que impidan el cumplimiento del objeto de la presente Ley y proponer alternativas de solución;
9. Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados, para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta Ley;
10. Conocer, analizar y emitir recomendaciones derivadas de las propuestas que emita el Observatorio;
11. Aprobar, a propuesta de la Secretaría, el Reglamento Interior del Consejo Estatal, y
12. Las demás que establezcan esta Ley u otras disposiciones aplicables.

**Artículo 19.** Los integrantes señalados en el artículo 15 de la presente ley podrán nombrar a un suplente con derecho a voz y voto. Tratándose de l las fracciones I, II, III, incisos A y B de la fracción IV, deberá ser de nivel jerárquico inmediato inferior, y tendrá derecho a voz y voto.

**Artículo 20.** El Consejo Estatal sesionará de forma ordinaria cuando menos dos veces al año y de forma extraordinaria cuando, por la naturaleza de los temas a tratar, sea necesario a juicio del Presidente del Consejo Estatal. La convocatoria se hará llegar a los miembros del Consejo Estatal, por conducto del Secretario Ejecutivo, con una anticipación de por lo menos diez días en el caso de las ordinarias y de por lo menos tres días en el caso de las extraordinarias.

Para sesionar se requerirá la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los integrantes del Consejo Estatal, sus acuerdos deberán tomarse preferentemente por consenso, pero tendrán validez cuando sean aprobados por mayoría de votos de los presentes, y quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

Los integrantes e invitados del Consejo Estatal participarán en el mismo de manera honorífica.

**Artículo 21.** Corresponde al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal:

1. Elaborar y distribuir, en acuerdo con el Presidente del Consejo Estatal, la convocatoria y orden del día de las sesiones;
2. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Estatal, llevar el archivo de estos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;
3. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Estatal;
4. Publicar en el Periódico Oficial del Estado los instrumentos a los que se refieren las fracciones I, II y XI del artículo 18 de esta Ley, y
5. Las demás que le señale esta Ley, el Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

**Capítulo III**

**De la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria**

**Artículo 22.** La Estrategia es el instrumento programático que tiene como propósito articular la política de mejora regulatoria de los Sujetos Obligados a efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de esta Ley. La Estrategia Estatal se ajustará a lo dispuesto por la Estrategia Nacional, que para tal efecto se emita.

**Artículo 23**. La Estrategia Estatal comprenderá, al menos, lo siguiente:

1. Un diagnóstico por parte de la Secretaría de la situación que guarda la política de mejora regulatoria en el Estado, alineado con la Estrategia Nacional;
2. Las buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria;
3. Los objetivos de corto, mediano y largo plazo en materia de mejora regulatoria;
4. Los elementos para la instrumentación de la mejora regulatoria;
5. Las acciones, medidas y programas de mejora regulatoria que permitan impactar favorablemente en el mejoramiento de la calidad regulatoria del Estado y que incidan en el desarrollo y el crecimiento económico estatal, así como el bienestar social;
6. Las herramientas de la mejora regulatoria y su uso sistemático;

Las metodologías para la aplicación de las herramientas de la mejora regulatoria;

1. Las metodologías para el diagnóstico periódico del acervo regulatorio;
2. Las políticas y acciones específicas para atender la problemática regulatoria de materias, sectores o regiones del estado;
3. Las directrices, mecanismos y lineamientos técnicos para integrar, actualizar y operar el Catálogo Estatal, incluyendo procedimientos, formatos y plazos para que los Sujetos Obligados ingresen la información correspondiente;
4. Los lineamientos generales de aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio;
5. Los criterios para revisar, actualizar y mejorar el acervo regulatorio estatal;
6. Los mecanismos para fortalecer las capacidades jurídicas e institucionales en materia de mejora regulatoria;
7. Las medidas para reducir y simplificar, y en su caso automatizar, Trámites y Servicios;
8. Los mecanismos de observación y cumplimiento de indicadores que permitan conocer el avance de los objetivos, programas y acciones derivados de la política de mejora regulatoria;
9. Los estándares mínimos para asegurar la correcta implementación de las herramientas de la mejora regulatoria a que hace referencia el Título Tercero de esta Ley, incluyendo entre otros, la consulta pública, transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de diseño e implementación de la Regulación;
10. Los mecanismos de coordinación para garantizar la congruencia de la Regulación que expidan los Sujetos Obligados en términos de esta Ley;
11. Los mecanismos que regulen el procedimiento a que se sujete la Protesta Ciudadana;
12. Las directrices necesarias para la integración del Catálogo Estatal y municipales al Catálogo Nacional; y
13. Las demás que se deriven de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 24.** El Consejo Estatal aprobará la Estrategia, misma que será publicada en el Periódico Oficial del Estado y será vinculante para los sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Capítulo IV**

**De la Secretaría**

**Artículo 25.** La Secretaría como autoridad estatal en materia de mejora regulatoria tiene como objetivo promover la mejora de las Regulaciones y la simplificación de Trámites y Servicios, así como la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que estos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad.

**Artículo 26.** La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

1. Desempeñar las funciones de coordinación, supervisión y ejecución que establece esta Ley, promoviendo la mejora regulatoria y competitividad en el Estado de Coahuila de Zaragoza;
2. Con base en la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, proponer al Consejo Estatal la Estrategia para el ámbito local; desarrollar, monitorear, evaluar y dar publicidad a la misma;
3. Proponer al Consejo Estatal la emisión de directrices, instrumentos, lineamientos, mecanismos y buenas prácticas para el cumplimiento del objeto de esta Ley;
4. Proponer al Consejo Estatal las metodologías para la organización y   
   sistematización de la información administrativa y estadística, así como los indicadores que deberán adoptar los Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia de mejora regulatoria;
5. Administrar el Catálogo Estatal;
6. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria que requieran los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal;
7. Revisar el marco regulatorio estatal, diagnosticar su aplicación y, en su caso, brindar asesoría a las autoridades competentes para mejorar la Regulación en actividades o sectores económicos específicos, así como comunicar a la Comisión Nacional las áreas de oportunidad que se detecten para mejorar las regulaciones del ámbito federal y nacional;
8. Proponer a los Sujetos Obligados acciones, medidas o programas que permitan impactar favorablemente en el mejoramiento del marco regulatorio estatal y que incidan en el desarrollo y crecimiento económico del Estado, y coadyuvar en su promoción e implementación, lo anterior siguiendo los lineamientos planteados por la CONAMER;
9. Dictaminar las Propuestas Regulatorias y sus Análisis de Impacto Regulatorio que se reciban de los Sujetos Obligados del ámbito estatal y, en su caso, municipal, lo anterior respetando los lineamientos que para tal efecto emita la CONAMER;
10. Elaborar y presentar al Congreso del Estado un informe anual sobre los resultados, avances y retos de la política estatal de mejora regulatoria;
11. Elaborar y promover programas académicos directamente o en colaboración con otras instituciones para la formación de capacidades en materia de mejora regulatoria;
12. Crear, desarrollar, proponer y promover Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria y en su caso seguir los planteados por la CONAMER destinados a los sujetos obligados;
13. Procurar que las acciones y Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados se rijan por los mismos estándares de operación;
14. Vigilar el funcionamiento del Sistema de Protesta Ciudadana e informar al órgano de control interno que corresponda, en los casos en que proceda;
15. Celebrar convenios en materia de mejora regulatoria con la CONAMER, con sus homólogos de las demás Entidades Federativas, dependencias de la Administración Pública Estatal centralizada y desconcentrada, organismos autónomos, con los Municipios del Estado, asociaciones y organizaciones civiles, sociales, empresariales y académicas, organismos nacionales e internacionales a efecto de cumplir con los objetivos de la presente ley;
16. Promover la evaluación de Regulaciones vigentes a través del Análisis de   
    Impacto Regulatorio ex post, tomando en consideración los lineamientos establecidos por la CONAMER;
17. Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar los Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal, así como emitir los lineamientos para su operación mismos que serán vinculantes para la Administración Pública Estatal;
18. Crear, desarrollar, proponer y promover programas específicos de simplificación y mejora regulatoria en el ámbito estatal;
19. Establecer acuerdos y convenios de colaboración, concertación y coordinación que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos;
20. Calcular en coordinación con la Secretaría de Fiscalización el costo económico de los Trámites y Servicios con la información proporcionada por los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal con la asesoría técnica de la CONAMER;
21. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se lleven a cabo con autoridades nacionales y extranjeras, así como con organismos y organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito de su competencia de conformidad con lo establecido en esta Ley;
22. Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la política pública de mejora regulatoria;
23. Promover la integración del Catálogo Estatal y municipales al Catálogo   
    Nacional;
24. Supervisar que los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal tengan actualizada la parte que les corresponde del Catálogo, así como mantener actualizado el segmento de las Regulaciones estatales;
25. Recibir e integrar la Agenda Estatal de Mejora Regulatoria;
26. Interpretar lo previsto en esta Ley para efectos administrativos dentro del ámbito de la Administración Pública Estatal;
27. Ejecutar los acuerdos, directrices y demás resoluciones adoptados por el Consejo Estatal, en el ámbito de su competencia;
28. Publicar en el Periódico Oficial del Estado los lineamientos necesarios para el funcionamiento de la Estrategia Estatal; y
29. Las demás facultades que establezcan esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Capítulo V**

**Del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria**

**Artículo 27.** El Sistema Estatal de Mejora Regulatoria tienen como función coordinarse con el Sistema Nacional y los municipales, para implementar la política de mejora regulatoria conforme a la Estrategia Nacional y Estatal planteada, de acuerdo con el objeto de esta Ley, y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

**Artículo 28**. El Sistema Estatal de Mejora Regulatoria estará integrado como lo dispone el artículo 12 de esta Ley y para el cumplimiento de los objetivos de la misma y garantizar el funcionamiento eficaz del Sistema Estatal, el Consejo Estatal definirá los mecanismos de coordinación entre este y el Consejo Nacional, así como los correspondientes con los consejos de los municipios o alcaldías.

**Capítulo VI**

**De la Implementación de la Política de Mejora Regulatoria por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales**

**Artículo 29.** Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, del orden local y los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial del Estado, atendiendo a su presupuesto, deberán designar, dentro de su estructura orgánica, una instancia responsable encargada de aplicar lo establecido en el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley en relación con el Catálogo, o bien, coordinarse con la Autoridad de Mejora Regulatoria estatal.

Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable para procesos jurisdiccionales.

**Capítulo VII**

**Del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria**

**Artículo 30.** El Observatorio es una instancia de participación ciudadana de interés público, cuya finalidad es coadyuvar, en términos de la Ley General de Mejora Regulatoria, al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional, que servirá de guía para el desarrollo de las políticas de mejora regulatoria para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 31.** La Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria proporcionará el apoyo que resulte necesario para la realización de evaluación que conduzca el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, conforme a lo previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria.

**Capítulo VIII**

**De los Municipios**

**Artículo 32.** Para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, los municipios integrarán Consejos Municipales de Mejora Regulatoria y deberán expedir su normatividad en la materia de conformidad con las disposiciones jurídicas de mejora regulatoria.

La o el Presidente Municipal deberá nombrar un Comisionado Municipal de Mejora Regulatoria, con nivel de titular de área o equivalente en la estructura orgánica municipal.

**Artículo 33.** La coordinación y comunicación entre el Sujeto Obligado municipal y la Secretaría como autoridad de Mejora Regulatoria Estatal, se llevará a cabo a través del Comisionado Municipal de Mejora Regulatoria, para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas de la materia.

**Artículo 34.** Compete a los municipios en materia de mejora regulatoria, lo siguiente:

1. Coordinar por medio del Comisionado Municipal a las dependencias o servidores públicos municipales con los sujetos obligados, entidades públicas, organismos estatales y federales, en los programas y acciones que lleven a cabo para lograr el cumplimiento de la Ley;
2. Elaborar la Agenda Regulatoria, los Programas y acciones para lograr una   
   mejora regulatoria integral, bajo los principios de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia;
3. Establecer Comités Internos en cada dependencia municipal, en el ámbito de su competencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo, y conforme a las disposiciones secundarias que al afecto se emitan; y
4. Las demás que le atribuyan otras disposiciones jurídicas para el cumplimiento de la mejora regulatoria.

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel   
jerárquico inmediato inferior, quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha comunicación con el Comisionado Municipal de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley.

**Artículo 35.** Los Consejos Municipales se integrarán por:

1. El Presidente Municipal, quien lo presidirá;
2. El Síndico Municipal;
3. El número de regidores que estime cada Ayuntamiento y que serán los encargados de las comisiones que correspondan al objeto de la Ley;
4. El titular del área jurídica;
5. Un Secretario Técnico, que será el Comisionado Municipal de Mejora Regulatoria;
6. Representantes empresariales de organizaciones legalmente constituidas, que determine el Presidente Municipal con acuerdo de Cabildo; y
7. Los titulares de las Dependencias que determine el Presidente Municipal.

**Artículo 36.** Serán invitados especiales de los Consejos Municipales y podrán participar con voz, pero sin voto:

1. Representantes de confederaciones, cámaras y asociaciones empresariales, colegios, barras y asociaciones de profesionistas;
2. Representantes de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, así como organizaciones de consumidores; y
3. Académicos especialistas en materias afines.

Al Consejo Municipal podrán concurrir como invitados las personas u organizaciones que considere pertinente su Presidente, cuando deban discutirse asuntos determinados, los que tendrán derecho a voz pero no a voto.

**Artículo 37.** LosConsejos Municipales sesionarán de forma ordinaria cuando menos dos veces al año, dentro de las tres semanas posteriores al inicio del semestre respectivo, y de forma extraordinaria cuando, por la naturaleza de los temas a tratar, sea necesario a juicio del Presidente del Consejo. La convocatoria se hará llegar a los miembros del Consejo Municipal, por conducto del Secretario Técnico con una anticipación de diez días en el caso de las ordinarias y de tres días en el caso de las extraordinarias.

**Artículo 38.** Los Consejos Municipales tendrán, en su ámbito de competencia, las facultades y responsabilidades siguientes:

1. Establecer acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regirá la política de mejora regulatoria municipal de conformidad con la Ley y la Ley General;
2. Aprobar el Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal y la Agenda   
   Regulatoria conteniendo las propuestas de creación de regulaciones o de reforma específica;
3. Recibir, analizar y observar el informe anual del avance programático de   
   Mejora Regulatoria y la evaluación de los resultados, que le presente el Secretario Técnico e informar sobre el particular a la Secretaría para los efectos legales correspondientes;
4. Aprobar la suscripción de convenios interinstitucionales de coordinación y   
   cooperación en la materia con dependencias federales y/o estatales, y con otros municipios;
5. Proponer las acciones necesarias para optimizar el proceso de mejora regulatoria en las dependencias municipales;
6. Aprobar la creación de Mesas Temáticas de Mejora Regulatoria para tratar y solucionar aspectos específicos para la implementación de la política pública de su responsabilidad;
7. Aprobar el Reglamento de Mejora Regulatoria Municipal, en el que se incluirá un Título estableciendo los términos para la operación del Consejo y en caso de ser necesario canalizarlo al H. Ayuntamiento para su aprobación; y
8. Las demás que le confiera esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 39.** El Comisionado Municipal tendrá, en su ámbito de competencia, las siguientes facultades y responsabilidades:

1. Revisar el marco regulatorio municipal y coadyuvar en la elaboración y actualización de los anteproyectos de reglamentos, bandos, acuerdos y demás regulaciones o reformas a estas, y realizar los diagnósticos de procesos para mejorar la regulación de actividades económicas específicas;
2. Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y la Agenda Regulatoria conteniendo las propuestas de creación de regulaciones o de reforma específica;
3. Integrar, actualizar y administrar el Catálogo Municipal;
4. Informar al Cabildo y al Consejo Municipal del avance programático de mejora regulatoria y de la evaluación de los resultados, con los informes y evaluaciones remitidos por las dependencias municipales;
5. Proponer el proyecto del Reglamento Interior del Consejo Municipal;
6. Implementar con asesoría de la Autoridad Estatal y la CONAMER la Estrategia en el municipio;
7. Fungir como secretario ejecutivo del Consejo Municipal;
8. Elaborar, en acuerdo con el Presidente, el Orden del Día de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal;
9. Programar y convocar, en acuerdo con el Presidente del Consejo Municipal, a las sesiones ordinarias del Consejo Municipal y a las sesiones extraordinarias cuando así lo instruya el Presidente del mismo;
10. Elaborar las actas de las sesiones y llevar el libro respectivo;
11. Dar seguimiento, controlar y en su caso ejecutar los acuerdos del Consejo Municipal;
12. Brindar los apoyos técnicos y de logística que requiera el Consejo Municipal;
13. Proponer al Consejo Municipal la emisión de instrumentos, lineamientos, mecanismos y buenas prácticas para el cumplimiento del objeto de esta Ley;
14. Recibir de los Sujetos Obligados las Propuestas Regulatorias y el Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente y, en su caso, elaborar el dictamen respectivo. De ser necesario enviar el Análisis de Impacto Regulatorio a la Secretaría, para los efectos de que esta emita su opinión;
15. Promover la integración de la información del Catálogo Municipal al Catálogo Nacional; y
16. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 40.** Para cumplir con el objeto de la ley y con los objetivos de Mejora Regulatoria que apruebe el Consejo Municipal, las dependencias municipales tendrán, en su ámbito de competencia, las responsabilidades siguientes:

1. Elaborar su Programa Anual de Mejora Regulatoria y la Agenda Regulatoria con las propuestas de creación de regulaciones o de reforma específica; y sus Análisis de Impacto Regulatorio, en los términos y dentro de los plazos previstos por esta Ley;
2. Elaborar su informe anual del avance programático de mejora regulatoria, que deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo al Secretario Técnico para los efectos legales correspondientes;
3. Mantener actualizada la información de su competencia en el Catálogo,   
   incluyendo, entre otros componentes, el Registro Municipal de regulaciones, así como el de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y monto de los derechos o aprovechamientos aplicables y notificar al Consejero Municipal los cambios que realice;
4. Enviar al Consejero Municipal las Propuestas Regulatorias y el correspondiente Análisis de Impacto Regulatorio; y
5. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

Las dependencias municipales remitirán al Consejero Municipal los documentos a que se refiere el presente artículo, para los efectos legales correspondientes.

**TÍTULO TERCERO**

**DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA   
REGULATORIA**

**Capítulo I**

**Del Catálogo de Regulaciones, Trámites y Servicios**

**Artículo 41.** El Catálogo Estatal es la herramienta tecnológica que compila las Regulaciones, los Trámites y los Servicios de los Sujetos Obligados de los órdenes de gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información. Tendrá carácter público y la información que contenga será vinculante para los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus competencias.

La inscripción y actualización del Catálogo Nacional es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus competencias, por lo que deberán informar periódicamente a la autoridad de mejora regulatoria correspondiente cualquier modificación a la información inscrita en los Catálogos, lo anterior conforme a lo establecido por la Ley General de Mejora Regulatoria.

**Artículo 42.** El Catálogo Estatal estará integrado por:

1. El Registro Estatal y Municipales de Regulaciones;
2. Los Registros Estatal y Municipales de Trámites y Servicios;
3. El Expediente para Trámites y Servicios;
4. El Registro Estatal de Visitas Domiciliarias; y
5. La Protesta Ciudadana.

**Capítulo II**

**Del Registro Estatal y de los Registros Municipales de Regulaciones**

**Artículo 43.** El Registro Estatal y ~~los~~ Registros Municipales de Regulaciones son herramientas tecnológicas que compilan las Regulaciones de los Sujetos Obligados del estado. Tendrá carácter público y contendrá la misma información que estará inscrita en el Registro Nacional de Regulaciones previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria.

Corresponde a la Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Secretaría, la integración y administración del Registro Estatal de Regulaciones.

Los Sujetos Obligados serán los responsables de inscribir y actualizar   
permanentemente la información que les corresponde en el Registro Estatal de Regulaciones. Cuando exista una Regulación cuya aplicación no se atribuya a algún Sujeto Obligado específico, corresponderá a la Secretaría de Gobierno su registro y actualización.

**Artículo 44.** El Registro Estatal y los Municipales de Regulaciones deberán   
contemplar para cada Regulación una ficha que contenga al menos la siguiente información:

1. Nombre de la Regulación;
2. Fecha de expedición y, en su caso, de su vigencia;
3. Autoridad o autoridades que la emiten;
4. Autoridad o autoridades que la aplican;
5. Fecha en que ha sido actualizada;
6. Tipo de ordenamiento jurídico;
7. Ámbito de aplicación;
8. Índice de la Regulación;
9. Objeto de la Regulación;
10. Materias, sectores y sujetos regulados;
11. Trámites y Servicios relacionados con la Regulación;
12. Identificación de fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias; y
13. La demás información que se prevea en la Estrategia.

En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores u omisiones en la información inscrita, efectuará un apercibimiento al Sujeto Obligado para que este subsane la información en un plazo que no deberá exceder de diez días.

En el supuesto de que algún municipio no cuente con los recursos para contar con una plataforma electrónica, mediante convenio podrán acordar con el estado el uso de su plataforma.

**Capítulo III**

**Del Registro Estatal y los Municipales de Trámites y Servicios**

**Artículo 45.** Los registros de Trámites y Servicios son herramientas tecnológicas que compilan los Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información. Tendrán carácter público y la información que contengan será vinculante para los Sujetos Obligados.

La inscripción y actualización de los registros de Trámites y Servicios es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados.

La Secretaría de Fiscalización en coordinación con la Secretaría será la responsable de administrar la información que los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal inscriban en el Registro Estatal de Trámites y Servicios.

Los Sujetos Obligados serán los responsables de ingresar y actualizar la información a los registros de sus Trámites y Servicios. La legalidad y el contenido de la información que inscriban los Sujetos Obligados en los registros de Trámites y Servicios son de su estricta responsabilidad.

A partir del momento en que la Secretaría de Fiscalización y la Secretaría identifiquen errores u omisiones en la información proporcionada, tendrá un plazo de cinco días para comunicar sus observaciones al Sujeto Obligado. Dichas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos Obligados, quienes a su vez contarán con un plazo de cinco días para solventar las observaciones. Una vez agotado el procedimiento anterior y habiéndose solventado las observaciones, el Sujeto Obligado publicará dentro del término de cinco días la información en el registro de Trámites y Servicios.

La omisión o la falsedad de la información que los Sujetos Obligados inscriban en el registro de Trámites y Servicios serán sancionadas en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

**Artículo 46.** Los registros de Trámites y Servicios son:

1. El Registro Federal de Trámites y Servicios;
2. El Registro Estatal de Trámites y Servicios;
3. El Registro Municipal de Trámites y Servicios;
4. De los Poderes Legislativos y Judiciales del Estado;
5. De los Órganos Constitucionales Autónomos;
6. De los Órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial del Estado; y
7. Los registros de los demás Sujetos Obligados, en caso de que no se encuentren comprendidos en alguna de las fracciones anteriores.

**Artículo 47.** La legislación o normatividad de los registros de Trámites y Servicios se ajustará a lo previsto en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.

**Artículo 48.** Los Sujetos Obligados deberán inscribir y mantener actualizada al menos la siguiente información y documentación de sus Trámites y Servicios dentro de la sección correspondiente:

1. Nombre y descripción del Trámite o Servicio;
2. Modalidad;
3. Fundamento jurídico de la existencia del Trámite o Servicio;
4. Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que debe o puede realizarse el Trámite o Servicio, y los pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización;
5. Enumerar y detallar los requisitos. En caso que existan requisitos que necesiten alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero, se deberá señalar la persona o empresa que lo emita. En caso de que el Trámite o Servicio que se esté inscribiendo incluya como requisitos la realización de Trámites o Servicios adicionales, deberá de identificar plenamente los mismos, señalando además el Sujeto Obligado ante quien se realiza;
6. Especificar si el Trámite o Servicio debe presentarse mediante formato, escrito libre, ambos o puede solicitarse por otros medios;
7. El formato correspondiente y la última fecha de publicación en el Medio de   
   Difusión;
8. En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la misma;
9. Datos de contacto oficial del Sujeto Obligado responsable del Trámite o Servicio;
10. Plazo que tiene el Sujeto Obligado para resolver el Trámite o Servicio y, en su caso, si aplica la afirmativa o la negativa ficta;
11. El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado para prevenir al solicitante y el plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención;
12. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho monto, así como las alternativas para realizar el pago;
13. Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan;
14. Criterios de resolución del Trámite o Servicio, en su caso;
15. Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el Trámite o solicitar el Servicio, incluyendo su domicilio;
16. Horarios de atención al público;
17. Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así como el domicilio y demás datos relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas;
18. La información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del Trámite o Servicio; y
19. La demás información que se prevea en la Estrategia.

Para que puedan ser aplicables los Trámites y Servicios es indispensable que estos contengan toda la información prevista en el presente artículo y se encuentren debidamente inscritos en el Catálogo.

Para la información a que se refieren las fracciones V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y XVIII, los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación inscrita en el Registro Nacional y Estatal de Regulaciones.

**Artículo 49.** Los Sujetos Obligados deberán inscribir en el Registro la información a que se refiere el artículo anterior y la Secretaría de Fiscalización, dentro de los cinco días hábiles siguientes, deberá efectuar la publicación sin cambio alguno, siempre que la disposición que dé fundamento a la actualización de la información contenida en el Catálogo se encuentre vigente. En caso contrario, la Secretaría de Fiscalización no podrá efectuar la publicación correspondiente sino hasta la entrada en vigor de la disposición que fundamente la modificación del Catálogo.

Los Sujetos Obligados deberán inscribir o modificar la información en el Catálogo dentro de los diez días siguientes a que se publique en el Medio de difusión estatal.

Los Sujetos Obligados que apliquen Trámites y Servicios deberán tener a disposición del público la información que al respecto esté inscrita en el Catálogo.

**Artículo 50.** Los Sujetos Obligados no podrán aplicar Trámites o Servicios adicionales a los establecidos en el Catálogo, ni podrán exigir requisitos adicionales en forma distinta a como se inscriban en el mismo, a menos que:

1. La existencia del Trámite o Servicio sea por única ocasión y no exceda los sesenta días; o
2. Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con interés jurídico.

En los supuestos a los que se refieren las fracciones I y II del presente artículo, los Sujetos Obligados deberán dar aviso previo a la Autoridad de Mejora Regulatoria.

En caso de incumplimiento del primer párrafo del presente artículo, la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente dará vista a las autoridades competentes en la investigación, de responsabilidades administrativas y, en su caso, de hechos de corrupción.

**Artículo 51**. En el caso de los municipios que no cuenten con los recursos para tener una plataforma electrónica que contenga su Registro de Trámites y Servicios, mediante convenio podrán acordar con el Estado el uso de su plataforma.

**Capítulo IV**

**Del Expediente para Trámites y Servicios**

**Artículo 52.** El Expediente para Trámites y Servicios operará conforme a los lineamientos que aprueben el Consejo Nacional y el Consejo Estatal, deberá considerar mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia.

Los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en sus programas de Mejora Regulatoria las acciones para facilitar a otros Sujetos Obligados, a través del Expediente para Trámites y Servicios, el acceso, consulta y transferencia de manera segura de las actuaciones electrónicas que se generen con motivo de un Trámite o Servicio.

**Artículo 53.** Los Sujetos Obligados no podrán solicitar información que ya conste en el Expediente de Trámites y Servicios, ni podrán requerir documentación que tengan en su poder. Solo podrán solicitar aquella información y documentación particular o adicional, que esté prevista en el Catálogo.

**Artículo 54.** Los documentos electrónicos que integren los Sujetos Obligados al   
Expediente de Trámites y Servicios conforme a lo dispuesto por esta Ley, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a estos.

**Artículo 55.** Los Sujetos Obligados integrarán al Expediente para Trámites y Servicios, los documentos firmados autógrafamente cuando se encuentre en su poder el documento original y se cumpla con lo siguiente:

1. Que la migración a una forma digital haya sido realizada o supervisada por un servidor público que cuente con facultades de certificación de documentos en términos de las disposiciones aplicables;
2. Que la información contenida en el documento electrónico se mantenga íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta;
3. Que el documento electrónico permita conservar el formato del documento impreso y reproducirlo con exactitud; y
4. Que cuente con la Firma Electrónica Avanzada del servidor público al que se refiere la fracción I de este artículo.

**Artículo 56.** Para efectos de esta Ley, tratándose de procedimientos administrativos relacionados con la apertura y operación de las empresas, el Expediente Electrónico Empresarial hará las veces del Expediente para Trámites y Servicios.

**Capítulo V**

**Del Registro Estatal de Visitas Domiciliarias**

**Artículo 57.** El Registro Estatal de Visitas Domiciliarias se conforma por:

1. El padrón de inspectores, verificadores y visitadores en el ámbito administrativo;
2. El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que puedan realizar los Sujetos Obligados;
3. Los números telefónicos de los órganos internos de control del Sujeto Obligado al que pertenezcan los inspectores, verificadores y visitadores respectivos para realizar denuncias;
4. Los números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias. Lo anterior, con la finalidad de que las personas a las cuales se realizan las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias puedan cerciorarse de la veracidad de las mismas; y
5. La información que se determine en los lineamientos que al efecto expidan el Consejo Nacional y el Consejo Estatal.

**Artículo 58.** Los Sujetos Obligados serán los encargados de ingresar la información directamente en el Padrón y de mantenerla debidamente actualizada, respecto a los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que apliquen.

Los Sujetos Obligados serán los encargados de inscribir en el Padrón, a los servidores públicos a que se refiere el presente artículo.

**Artículo 59.** Lo dispuesto en este capítulo no será aplicable a aquellas inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias requeridas para atender situaciones de emergencia.

Para tales efectos, dentro de un plazo de cinco días hábiles posteriores a la habilitación, el Sujeto Obligado deberá informar y justificar a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente las razones para habilitar a nuevos inspectores o verificadores requeridos para atender la situación de emergencia.

**Artículo 60.** La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Fiscalización será responsable de administrar y publicar la información del Padrón. Las Autoridades de Mejora Regulatoria serán las responsables de supervisar y coordinar el Padrón en el ámbito de sus competencias.

En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores u omisiones en la información proporcionada, lo comunicará al Sujeto Obligado en un plazo de cinco días hábiles.

Estas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos Obligados, quienes contarán con un plazo de cinco días hábiles para solventar las observaciones o expresar la justificación por la cual no son atendibles dichas observaciones. Una vez agotado el procedimiento anterior y habiéndose solventado las observaciones, la Autoridad de Mejora Regulatoria publicará dentro del término de cinco días hábiles la información en el Padrón.

**Capítulo VI**

**De la Protesta Ciudadana**

**Artículo 61.** El solicitante podrá presentar una Protesta Ciudadana cuando con acciones u omisiones, el servidor público encargado del Trámite o Servicio niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con las fracciones V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 48 de esta Ley.

**Artículo 62.** La Secretaría y Comisiones municipales dispondrán lo necesario para que las personas puedan presentar la Protesta Ciudadana tanto de manera presencial como electrónica.

La Protesta Ciudadana será revisada por la Autoridad de Mejora Regulatoria quien emitirá su opinión en un plazo de cinco días hábiles, dando contestación al ciudadano que la presentó; dará vista de la misma al Sujeto Obligado y, en su caso, al órgano competente en materia de responsabilidades.

El procedimiento de la Protesta Ciudadana se regulará conforme a los lineamientos que emita el Consejo Nacional.

**Capítulo VII**

**Agenda Regulatoria**

**Artículo 63.** Los Sujetos Obligados deberán presentar su Agenda Regulatoria ante la Autoridad de Mejora Regulatoria en los primeros cinco días de los meses de mayo y noviembre de cada año, misma que podrá ser aplicada en los periodos subsecuentes de junio a noviembre y de diciembre a mayo respectivamente. La Agenda Regulatoria de cada Sujeto Obligado deberá informar al público la Regulación que pretenden expedir en dichos periodos.

Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados, la Secretaría como Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria la sujetará a una consulta pública por un plazo mínimo de veinte días hábiles. La Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria deberá remitir a los Sujetos Obligados las opiniones vertidas en la consulta pública mismas que no tendrán carácter vinculante.

**Artículo 64.** La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados deberá incluir al menos:

1. Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria;
2. Materia sobre la que versará la Regulación;
3. Problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria;
4. Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria; y
5. Fecha tentativa de presentación.

**Artículo 65.** Lo dispuesto en el artículo precedente no será aplicable en los siguientes supuestos:

1. La Propuesta Regulatoria pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia no prevista, fortuita e inminente;
2. La publicidad de la Propuesta Regulatoria o la materia que contiene pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con su expedición;
3. Los Sujetos Obligados demuestren a la Autoridad de Mejora Regulatoria que la expedición de la Propuesta Regulatoria no generará costos de cumplimiento;
4. Los Sujetos Obligados demuestren a la Autoridad de Mejora Regulatoria que la expedición de la Propuesta Regulatoria representará una mejora sustancial que reduzca los costos de cumplimiento previstos por la Regulación vigente, simplifique Trámites o Servicios, o ambas; y
5. Las Propuestas Regulatorias que sean emitidas directamente por el titular del poder ejecutivo en los órdenes de gobierno estatal y municipal.

**Capítulo VIII**

**Del Análisis de Impacto Regulatorio**

**Artículo 66.** El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los beneficios de las Regulaciones sean superiores a sus costos y que estas representen la mejor alternativa para atender una problemática específica.

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las Regulaciones salvaguarden el interés general, considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones institucionales de los Sujetos Obligados.

El Consejo Estatal aprobará los lineamientos generales para la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio, mismos que deberán aplicar las Autoridades Estatales y/o Municipales de Mejora Regulatoria en la expedición de sus manuales correspondientes, lo anterior se llevará a cabo tomando en consideración lo establecido por las disposiciones generales que contenga la Estrategia Nacional.

**Artículo 67.** Los procesos de revisión y diseño de las Regulaciones y Propuestas   
Regulatorias, así como los Análisis de Impacto Regulatorio correspondientes, deberán enfocarse prioritariamente en contar con Regulaciones que cumplan con los siguientes propósitos:

1. Que generen el máximo beneficio para la sociedad con el menor costo posible;
2. Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca resolver y para los sujetos regulados a los que se aplican;
3. Que promuevan la coherencia de políticas públicas;
4. Que mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de gobierno;
5. Que fortalezcan las condiciones sobre los consumidores y sus derechos, las micro, pequeñas y medianas empresas, la libre concurrencia y la competencia económica, el comercio exterior y los derechos humanos, entre otros; y
6. Que impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante herramientas proporcionales a su impacto esperado.
7. *Que de conformidad con la Estrategia Nacional de mejora regulatoria, los sujetos obligados de las diversas dependencias, al momento de emitir por cada una de las nuevas regulaciones, deberán abrogar o derogar tres obligaciones regulatorias o tres actos que se refieran a la misma materia o sector económico regulado.*

Las Propuestas Regulatorias indicarán necesariamente la o las Regulaciones que pretenden abrogar, derogar o modificar. Lo anterior deberá quedar asentado en el Análisis de Impacto Regulatorio.

**Artículo 68.** El Análisis de Impacto Regulatorio deberá incluir, por lo menos los siguientes rubros:

1. Exposición sucinta de las razones que generan la necesidad de crear nuevas regulaciones, o bien, reformarlas;
2. Alternativas regulatorias y no regulatorias que se tomaron en cuenta para arribar a la propuesta de crear o reformar las regulaciones de que se trate justificando porque la propuesta actual es la mejor alternativa;
3. Problemas que la actual regulación genera y cómo el proyecto de nueva regulación o su forma plantea resolverlos;
4. Posibles riesgos que se correrían de no emitir las regulaciones propuestas;
5. Fundamento jurídico que da sustento al proyecto y la congruencia de la regulación propuestas con el ordenamiento jurídico vigente;
6. Beneficios y costos cuantificables que generaría la regulación propuesta y aquellos que resulten aplicables para los particulares;
7. Identificación y descripción de los trámites eliminados, reformados y/o generados con la regulación propuesta;
8. Recursos para asegurar el cumplimiento de la regulación, así como los mecanismos, metodologías e indicadores que serán de utilidad para la evaluación de la implementación, verificación e inspección de la propuesta regulatoria;
9. La descripción de los esfuerzos de consulta pública previa, llevados a cabo para generar la regulación o propuesta regulatoria, así como las opiniones de los particulares que hayan sido recabadas en el ejercicio de la Agenda Regulatoria, así como aquellos comentarios que se hayan recibidos durante el proceso de mejora regulatoria; y
10. Los demás que apruebe el Consejo.

**Artículo 69**. Para asegurar la consecución de los objetivos de esta Ley, los Sujetos Obligados adoptarán esquemas de revisión, mediante la utilización del Análisis de Impacto Regulatorio de:

1. Propuestas Regulatorias; y
2. Regulaciones existentes, a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, conforme a las mejores prácticas internacionales.

Para el caso de las Regulaciones a que se refiere la fracción II del presente artículo, la Autoridad de Mejora Regulatoria, en su respectivo ámbito de competencia, y de conformidad con las buenas prácticas internacionales en la materia, podrán solicitar a los Sujetos Obligados la realización de un Análisis de Impacto Regulatorio ex post, a través del cual se evalúe la aplicación, efectos y observancia de la Regulación vigente, misma que será sometida a consulta pública por un plazo de treinta días con la finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los interesados.

Asimismo, la Autoridad de Mejora Regulatoria podrá efectuar recomendaciones con el objeto de contribuir a cumplir con los objetivos relacionados con la Regulación, incluyendo propuestas de modificación al marco regulatorio aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán manifestar por escrito su consideración respecto a las opiniones, comentarios y recomendaciones que se deriven de la consulta pública y del análisis que efectúe la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria correspondiente.

El Consejo Estatal aprobará, con base en las disposiciones generales que contenga la Estrategia Nacional, los lineamientos para la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, mismos que la Autoridad Estatal y Municipal de Mejora Regulatoria desarrollará para su implementación.

**Artículo 70.** Cuando los Sujetos Obligados elaboren Propuestas Regulatorias, las   
presentarán a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente, junto con un Análisis de Impacto Regulatorio que contenga los elementos que esta determine, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 65 de esta Ley, cuando menos treinta días antes de la fecha en que pretendan publicarse en el Medio de Difusión Oficial o someterse a la consideración del Titular del Ejecutivo Estatal.

**Artículo 71.** Cuando la Autoridad de Mejora Regulatoria reciba un Análisis de Impacto Regulatorio que a su juicio no sea satisfactorio, podrá solicitar a los Sujetos Obligados, dentro de los diez días hábiles siguientes a que reciba dicho Análisis de Impacto Regulatorio, que realice las ampliaciones o correcciones a que haya lugar.

Cuando, a criterio de la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria, el Análisis de Impacto Regulatorio siga sin ser satisfactorio y la Propuesta Regulatoria de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto sustancial sobre un sector específico, podrá solicitar al Sujeto Obligado que con cargo a su presupuesto efectúe la designación de un experto, quien deberá ser aprobado por la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria. El experto deberá revisar el Análisis de Impacto Regulatorio y entregar comentarios a la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria y al propio Sujeto Obligado dentro de los cuarenta días siguientes a su contratación.

**Artículo 72.** La Autoridad de Mejora Regulatoria hará públicos, desde que las reciba, las Propuestas Regulatorias junto con el Análisis de Impacto Regulatorio, los dictámenes que se emitan, las respuestas a estos, las autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capítulo, así como las opiniones y comentarios de los interesados que se recaben durante la consulta pública.

Para tal efecto, deberá establecer plazos mínimos de consulta pública que no podrán ser menores a veinte días, de conformidad con los instrumentos jurídicos que la Autoridad de Mejora Regulatoria establezca en el ámbito de su competencia. La determinación de dichos plazos mínimos deberá tomar en consideración el impacto potencial de las Propuestas Regulatorias, su naturaleza jurídica y ámbito de aplicación, entre otros elementos que se consideren pertinentes y que deberán establecerse mediante el Manual de Funcionamiento del Análisis de Impacto Regulatorio.

Los Sujetos Obligados podrán solicitar a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente la aplicación de plazos mínimos de consulta pública menores a los previstos en esta Ley, conforme a los lineamientos que para tal efecto emitan.

**Artículo 73.** Cuando a solicitud de un Sujeto Obligado, la Autoridad de Mejora   
Regulatoria determine que la publicidad a que se refiere el artículo anterior pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr con la Propuesta de Regulación, esta no consultará a otras autoridades, ni hará pública la información respectiva sino hasta el momento en que se publique la Regulación en el Medio de Difusión.

También se aplicará esta regla cuando, previa opinión de aquellas, se pretendan someter a la consideración del Titular del Ejecutivo Estatal, respecto de las propuestas regulatorias.

Lo anterior se aplicará sin perjuicio de los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

Cuando la Autoridad de Mejora Regulatoria determine que la publicidad de la   
Propuesta Regulatoria no se ubica en alguno de los supuestos de excepción del párrafo anterior, se remitirá a lo dispuesto en el manual que a su efecto emita la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria.

La responsabilidad de considerar que la publicación pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr con la Regulación, recae exclusivamente en el Sujeto Obligado que solicite dicho tratamiento, y su justificación será pública a partir del momento en que la Regulación se publique en el Medio de Difusión del Estado o en su caso del Municipio.

**Artículo 74**. La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá emitir y entregar al Sujeto Obligado un dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio y de la Propuesta Regulatoria respectiva, dentro de los treinta días siguientes a la recepción del Análisis de Impacto Regulatorio, de las ampliaciones o correcciones al mismo.

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior será preliminar cuando existan comentarios derivados de la consulta pública o de la propia Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria que requieran ser evaluados por el Sujeto Obligado que ha promovido la Propuesta Regulatoria.

El dictamen preliminar deberá considerar las opiniones que en su caso reciba la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria de los interesados y comprenderá, entre otros aspectos, una valoración sobre si se justifican las acciones contenidas en la Propuesta Regulatoria, así como el cumplimiento de los principios y objetivos de la política de mejora regulatoria establecidos en esta Ley.

Cuando el Sujeto Obligado manifieste conformidad hacia las recomendaciones contenidas en el dictamen preliminar, deberá ajustar la Propuesta Regulatoria en consecuencia. En caso contrario, deberá comunicar por escrito las razones respectivas a la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, a fin de que esta emita un dictamen final dentro de los cinco días siguientes.

El dictamen a que se refiere el primer párrafo del presente artículo podrá ser final únicamente cuando no existan comentarios derivados de la consulta pública o de la propia Autoridad de Mejora Regulatoria o, en su caso, dichos comentarios hayan sido en los términos a que se refiere este artículo.

En caso de discrepancia entre el Sujeto Obligado y la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria, esta última resolverá, en definitiva dentro de los cinco días hábiles siguientes.

**Artículo 75.** El encargado de la Publicación del Periódico Oficial o Gaceta Municipal, únicamente publicará en el Medio de Difusión las Regulaciones que expidan los Sujetos Obligados cuando estos acrediten contar con una resolución definitiva de la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria respectiva. La versión que publiquen los Sujetos Obligados deberá coincidir íntegramente con la contenida en la resolución antes señalada, salvo en el caso de las disposiciones que emite el Titular del Ejecutivo Estatal, en cuyo caso la Consejería Jurídica u homólogos resolverán el contenido definitivo.

El encargado de la Publicación del Boletín Oficial u homólogo, publicará en el Medio de Difusión que corresponda, dentro de los siete primeros días de cada mes, la lista que le proporcione la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria de los títulos de las Regulaciones y los documentos a que se refiere el artículo 70 de esta Ley.

**Artículo 76.** Los Sujetos Obligados deberán someter las Regulaciones que generen costos de cumplimiento, identificadas en el procedimiento a la que se refiere el artículo 68 de esta Ley, a una revisión cada cinco años ante la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria correspondiente, utilizando para tal efecto el Análisis de Impacto Regulatorio ex post. Lo anterior, con el propósito de evaluar los efectos de su aplicación y permitir que los Sujetos Obligados determinen la pertinencia de su abrogación, modificación o permanencia, para alcanzar sus objetivos originales y atender a la problemática vigente.

Para el logro del mayor beneficio social de la Regulación sujeta a revisión, la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente podrá proponer modificaciones al marco regulatorio vigente o acciones a los Sujetos Obligados correspondientes.

El proceso de revisión al que hace referencia este artículo se realizará conforme a las disposiciones que al efecto emita la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente.

**Capítulo IX**

**De los Programas de Mejora Regulatoria**

**Artículo 77.** Los Programas de Mejora Regulatoria son una herramienta que tiene por objeto mejorar la Regulación vigente e implementar acciones de simplificación de Trámites y Servicios. De acuerdo con el calendario que establezcan, los Sujetos Obligados someterán a la Autoridad de Mejora Regulatoria que les corresponda un Programa de Mejora Regulatoria, con una vigencia anual, en relación con la Regulación, Trámites y Servicios que aplican, así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes.

La Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria emitirá, considerando los lineamientos generales contenidos en la Estrategia Nacional, los lineamientos para establecer los calendarios, mecanismos, formularios e indicadores para la implementación de los Programas de Mejora Regulatoria.

**Artículo 78.** La Autoridad de Mejora Regulatoria, en el ámbito de sus respectivas   
competencias, podrá emitir opinión a los Sujetos Obligados con propuestas específicas para mejorar sus Regulaciones y simplificar sus Trámites y Servicios.

Los Sujetos Obligados deberán valorar dichas propuestas para incorporarlas a sus programas de mejora regulatoria o, en su defecto, manifestar por escrito las razones por las que no considera factible su incorporación en un plazo no mayor a diez días. La opinión de la Autoridad de Mejora Regulatoria y la contestación del Sujeto Obligado serán publicadas en el portal de la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria.

**Artículo 79.** La Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria difundirá los programas de mejora regulatoria para su consulta pública durante al menos treinta días hábiles a fin de recabar comentarios y propuestas de los interesados. Los Sujetos Obligados deberán valorar comentarios y propuestas para incorporarlas a sus Programas de Mejora Regulatoria o, en su defecto, manifestar las razones por las que no se considera factible su incorporación.

**Artículo 80.** Para el caso de Trámites y Servicios los Programas de Mejora Regulatoria inscritos serán vinculantes para los Sujetos Obligados y no podrán darse de baja, salvo que las modificaciones al programa original reduzcan al menos los costos de cumplimiento de los Trámites y Servicios comprometidos originalmente.

Para el caso de Regulaciones los Sujetos Obligados únicamente podrán solicitar   
ajustes a los Programas de Mejora Regulatoria, siempre y cuando justifiquen dicha solicitud.

Lo dispuesto en el presente artículo deberá sujetarse a la autorización previa de la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria, de conformidad con el objeto de esta Ley.

Los órganos internos de control o equivalentes de cada Sujeto Obligado deberán, de conformidad con sus atribuciones, dar seguimiento al cumplimiento de los Programas de Mejora Regulatoria.

**Artículo 81.** Los Trámites y Servicios previstos en leyes, reglamentos o cualquier otra disposición que haya sido emitida por titulares del poder ejecutivo de los distintos órdenes de gobierno podrán ser simplificados, mediante acuerdos generales que publiquen los titulares de los Sujetos Obligados, en su respectivo ámbito de competencia en el Medio de Difusión correspondiente, en los siguientes rubros:

1. Habilitar el uso de herramientas electrónicas para la presentación de Trámites y Servicios;
2. Establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos;
3. Extender la vigencia de las resoluciones otorgadas por los Sujetos Obligados; y
4. No exigir la presentación de datos y documentos.

**Capítulo X**

**De los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria**

**Artículo 82.** Los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria son herramientas para promover que las Regulaciones, Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados cumplan con el objeto de esta Ley, a través de certificaciones otorgadas por la Autoridad Nacional y/o Estatal de Mejora Regulatoria, así como fomentar la aplicación de buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria.

En la creación y diseño de los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria, la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria tomará en cuenta la opinión de las autoridades competentes en la materia.

**Artículo 83.** Las certificaciones a que se refiere el artículo anterior se otorgarán a petición de los Sujetos Obligados, previo cumplimiento de los requisitos que al efecto se establezcan en los lineamientos que expida la Autoridad Nacional y/o Estatal de Mejora Regulatoria. Dichos lineamientos deberán precisar al menos lo siguiente:

1. Definición de los estándares mínimos de mejora regulatoria que deberán ser aplicados por el Sujeto Obligado;
2. El formato de solicitud que deberán presentar los Sujetos Obligados;
3. Procedimiento a que se sujetará la solicitud, evaluación y otorgamiento de la certificación, especificando los plazos aplicables;
4. Los criterios, indicadores y métricas para el otorgamiento de la certificación;
5. Vigencia de la certificación;
6. Supuestos para la revocación y renovación del certificado; y
7. Mecanismos de monitoreo y seguimiento.

**Artículo 84.** Los Sujetos Obligados interesados en solicitar la certificación deberán cumplir con lo siguiente:

1. Proporcionar la información que resulte necesaria para determinar la procedencia, o no, de la certificación solicitada;
2. Brindar apoyo para la coordinación de agendas de trabajo, reuniones y entrevistas que resulten necesarias;
3. Brindar en todo momento facilidades para la ejecución de las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que, en su caso, tengan lugar;
4. Proporcionar información para el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los estándares mínimos de mejora regulatoria, misma que deberá estar debidamente respaldada y documentada;
5. Dar cumplimiento a los plazos para la solicitud, evaluación y otorgamiento de la certificación; y
6. Las demás que al efecto establezcan los lineamientos correspondientes.

El incumplimiento de cualquiera de las fracciones previstas en este artículo será motivo suficiente para desechar la solicitud del Sujeto Obligado.

**Artículo 85.** La Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria publicará en su portal   
electrónico un listado que contendrá las certificaciones vigentes y deberán notificar a la Comisión Nacional sobre la creación, modificación o extinción de sus Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria. La Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria cuando detecte el incumplimiento de los principios y objetivos señalados en esta Ley, revocará el certificado correspondiente.

La Secretaría expedirá los lineamientos aplicables a los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria y los publicará en el Periódico Oficial del Estado, siempre y cuando verse sobre Programas de mejora regulatoria creados por la autoridad estatal, cuando se trate de Programas creados por la CONAMER, la publicación de los lineamientos se llevará a cabo en el Diario Oficial de la Federación.

**Capítulo XI**

**De las Encuestas, Información Estadística y Evaluación en Materia de Mejora Regulatoria**

**Artículo 86.** La autoridad de Mejora Regulatoria en el ámbito de su competencia, apoyará la implementación de las encuestas a las que se refiere el artículo 89 de la Ley General de Mejora Regulatoria, en coordinación con la CONAMER.

**Artículo 87.** La Secretaría compartirá la información relativa a los registros administrativos, censos y encuestas que, por su naturaleza estadística, sean requeridos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el desarrollo adecuado de sus propios censos y encuestas nacionales en materia de mejora regulatoria y en su caso aquellos organismos nacionales que persigan el mismo objetivo.

**TÍTULO CUARTO**

**DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA**

**Capítulo Único**

**De las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos**

**Artículo 88.** El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley, por parte de los servidores públicos de los órdenes de gobierno será sancionado en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**Artículo 89.** La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá informar a las autoridades que resulten competentes en la investigación de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, de los incumplimientos que tenga conocimiento.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria deberá estar instalado en un plazo que no exceda los noventa días naturales a la entrada en vigor de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria.

**ARTÍCULO TERCERO.** Las Autoridades de Mejora Regulatoria y los Sujetos Obligados darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente Ley con cargo a sus respectivos presupuestos.

**ARTÍCULO CUARTO.** A partir de la entrada en vigor de la esta Ley, los Municipios contarán con un plazo de un año para adecuar sus Reglamentos al contenido de dicha Ley. Los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria deberán instalarse formalmente dentro de un plazo de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de las adecuaciones correspondientes en su legislación local.

**ARTÍCULO QUINTO**. Los procedimientos que se encuentren en trámite una vez que entre en vigor la presente Ley, serán concluidos de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio, en términos de las disposiciones aplicables.

**ARTÍCULO SEXTO.** La Secretaría publicará los lineamientos dentro del plazo que no exceda a un año contado, a partir de la entrada en vigor de dicha Ley, de al menos las siguientes herramientas:

I. Análisis de Impacto regulatorio.

II. Programa Estatal de mejora regulatoria

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** Se abroga la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 38 de fecha 10 de mayo de 2013.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el párrafo tercero del artículo 154 de la Ley del Seguro Social, planteada por el Diputado Jesús Berino Granados, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 11 del mes de marzo de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 13 de marzo del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el párrafo tercero del artículo 154 de la Ley del Seguro Social, planteada por el Diputado Jesús Berino Granados, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el párrafo tercero del artículo 154 de la Ley del Seguro Social, planteada por el Diputado Jesús Berino Granados, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“Conforme al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte.*

*Dentro de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna, se encuentra el derecho a la seguridad social, dentro de las prerrogativas de los trabajadores, comprendidas en el artículo 123 constitucional.*

*El derecho a la seguridad social, también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como parte de los derechos a los que todo ser humano puede aspirar de manera individual. (Artículo 22)*

*Uno de los sistemas de seguridad social, que cuenta nuestro país para proveer este beneficio, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las bases que determina la propia ley.*

*Es así que la Ley del Seguro Social, establece en el artículo 2, que la finalidad de la seguridad social es garantizar no solo el derecho a la salud y a la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, sino también el otorgamiento de una pensión.*

*Conforme al artículo 6 de dicho ordenamiento legal, el seguro social comprende dos regímenes, el obligatorio y el voluntario. El primero es el que pagan los patrones a sus trabajadores y el voluntario, es aquél régimen en el que la persona asegurada dejó de cotizar al IMSS por alguna situación y decide seguir pagando por su propia cuenta de manera voluntaria y mensual, hasta lograr las semanas y reunir los requisitos para obtener su pensión.*

*El Instituto Mexicano del Seguro Social, señala que las semanas cotizadas son contabilizadas como los periodos comprendidos entre las fechas de alta y baja del asegurado ante el Instituto con uno o varios patrones. Así mismo señala que el reporte de semanas cotizadas establece el salario base de cotización, con el que la empresa en la que se labora tiene dado de alta al trabajador y el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentos, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad prestación que se entregue al trabajador por su ocupación.*

*Durante los últimos años en México la expectativa de vida de los asegurados que ampara la Ley del Seguro Social, se elevó de manera considerable, hasta llegar al promedio de edad de 80 años o más, por lo que fue necesario replantear a través de modificaciones que garanticen la sustentabilidad actual y necesaria del sistema de pensiones, por lo que surgieron varias reformas de la Ley a partir de julio de 1997, de no haber sido así, ocasionaría que el Instituto se viera obligado a pagar pensiones no fondeadas a los trabajadores y sus beneficiarios, generando un gran déficit económico para la institución.*

*La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) llevó a cabo un estudio en el cual el 42 % de los trabajadores con Administradora de Fondos de Retiro (AFORE) perciben 2 salarios mínimos de ingreso, el 19 por ciento solo 3 salarios mínimos, el 11.2 por ciento un solo salario y sólo el 9 por ciento alcanzan los 4 salarios mínimos; llegando a la conclusión que sólo el 18 % de las personas con una cuenta de Afore corresponde a trabajadores con ingresos superiores a los 5 salarios mínimos, lo que refleja el nivel de calidad de pensiones que llegarán a percibir los mexicanos en los próximos años.*

*Así mismo según un diagnóstico de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), la proporción de mexicanos con ingresos superiores a los 5 salarios mínimos va disminuyendo de manera paulatina, por lo que las personas con 5 salarios mínimos equivalen casi el 5 % de la totalidad y aquellos que cuentan con más de 25 salarios o inclusive más de 5 salarios representan apenas solo el 0.5 por ciento de ingresos. LAS PENSIONES DE CESANTÍA-VEJEZ E INVALIDEZ DE LA LEY DEL IMSS, UN ANÁLISIS TEÓRICO PRÁCTICO EN TRABAJADORES DE LAS PYMES edición especial volumen 12, numero 4.*

*Otro estudio realizado al salario promedio de los trabajadores agremiados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que tuvieron al menos una aportación a la subcuenta de retiro en los últimos 36 meses, fue de 3.5 salarios mínimos. Cerca de tres cuartas partes de estos trabajadores perciben un ingreso menor a cuatro salarios mínimos, y el 93.5 por ciento obtiene un ingreso de 8 salarios mínimos o menos y apenas el 1.2 por ciento de los cotizantes al IMSS percibe 18 salarios mínimos o más.*

*Esto nos lleva a una reflexión, el ser un asegurado que tiene 60 años de edad y está privado de trabajos remunerados, recibe una negativa de pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque se perdió la conservación de derechos que tenía, sin cotizar, aunque no lo parezca es un gran problema que se presenta en la actualidad y más a menudo de lo que creemos, ya que el artículo 151 de la Ley del Seguro Social establece que al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones por tiempos de interrupción ya sea, por un tiempo mayor a tres años, por tres años pero no más de seis años o en el supuesto de que sean seis años de interrupción, deberán de reingresar y cumplir con semanas nuevas de cotizaciones según sea el caso en particular.*

*Así mismo el artículo 154 de la citada Ley del Seguro Social, en el ramo de cesantía en edad avanzada, deja sin contemplar el supuesto de haber cumplido con las 1250 semanas cotizadas, en el que se les reconozca la totalidad del tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, sin importar el tiempo de la interrupción de pago de cotizaciones, las cuales ya devengaron a través de su trabajo en años anteriores, pero no contaban con la edad requerida para pensionarse y una vez que tienen la cesantía en edad avanzada, resulta que no les conservaron y reconocieron sus derechos, por lo que tienen que llevar a cabo nuevas cotizaciones para pensionarse, según el texto del artículo vigente.*

*Lo establecido en la Ley de Seguro Social vigente, obliga a cumplir este requisito sin contemplar el estado actual, en razón a la edad de 60 años y con variables situaciones económicas o consideraciones especiales de salud como padecimientos físicos, sin contar con la falta de ingresos suficientes ya que quedaron privados de trabajos remunerados, por lo que el hecho de volver a cotizar hasta cubrir las semanas necesarias para opere una pensión, resulta inoperante y difícil de alcanzar para el asegurado.*

*Es por ello que nuestra propuesta de reforma, hace hincapié a que se reconozca a aquel asegurado que se encuentre en cesantía y quede privado de trabajo remunerado y tenga reconocidas ante el instituto 1250 cotizaciones semanales para que proceda su pensión.*

*Citando un ejemplo, no es de justicia que un trabajador haya cubierto sus 1250 cotizaciones, equivalentes a 24 años de trabajo y que cause baja a una edad de 50 años, la conservación de sus derechos sería una cuarta parte de su tiempo cotizado, motivo por lo que no le permite tener acceso a su pensión por cesantía conforme al texto actual del artículo 154, toda vez que después de esa edad es muy complicado que alguien lo contrate y se le vence la conservación de derechos y llegado a los 60 años tendría que volver a trabajar un año para recuperar sus cotizaciones y como no hay quien lo emplee, pues pierde su derecho a todo.*

*En virtud de lo anterior, la presente propuesta de iniciativa tiene por objeto que ningún trabajador que haya completado sus 1250 cotizaciones pierda su conservación de derechos y que a los 60 años tenga acceso a esa pensión por cesantía.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la propuesta de iniciativa de reforma al párrafo tercero del artículo 154 de la Ley del Seguro Social, y para un mejor análisis, a continuación anexamos un cuadro comparativo de la reforma en comento:

|  |  |
| --- | --- |
| **LEY VIGENTE** | **PROPUESTA DE REFORMA** |
| **Artículo 154.** Para los efectos de esta Ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad.  Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales.  El trabajador cesante que tenga sesenta años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión.  En este caso, si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de setecientas cincuenta semanas tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del capítulo IV de este Título. | **Artículo 154.** ...  ...    El trabajador cesante que tenga sesenta años o más **y reúne las semanas** de cotización señaladas en el párrafo precedente, **se le reconocerá la totalidad del tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, sin importar el tiempo de la interrupción de pago de cotizaciones,** y **si** no reúne esas semanas de cotización, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión.    ... |

Podemos observar, que la propuesta se hace con el objeto de que a los asegurados de cesantía en edad avanzada, que tengan un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales y queden privados de trabajos remunerados, no se les interrumpa la conservación de derechos.

Como bien se señala en la exposición de motivos, la Ley del Seguro Social se reformó en al año de 1995, y esto obedeció primordialmente para reformar el sistema de pensiones de los trabajadores afiliados al instituto, el cual venía operando como un sistema de reparto, por un sistema de contribuciones determinadas y cuentas individuales que serían administradas por empresas de Fondos para el Retiro (AFORES), esto se debió principalmente a la inviabilidad financiera que se vislumbraba con sistema anterior, apostando además a efectos favorables en los niveles de ahorro nacional y en el desarrollo de los mercados financieros.

Es así que La Ley del Seguro social, en el otorgamiento de la pensión, comprende los siguientes dos regímenes:

*El obligatorio*: es el que pagan los patrones a sus trabajadores, y comprende los seguros de:Riesgos de trabajo;Enfermedades y maternidad;Invalidez y vida;Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, yGuarderías y prestaciones sociales.

*El voluntario*: Se establece en el artículo 240 de la Ley del Seguro Social, y refiere que todas las familias en México tienen derecho a un seguro de salud para sus miembros y para ese efecto, podrán celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social convenio para el otorgamiento de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del reglamento respectivo.

Cabe mencionar que el objetivo de los sistemas de pensiones es proteger los ingresos de un trabajador y sus dependientes, y textualmente, en la Ley objeto de la presente reforma se establece lo siguiente:

***“Artículo 2.*** *La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo,* ***así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado****.”*

Asimismo, en relación a la cesantía en edad avanzada se lee:

***Artículo 154.*** *Para los efectos de esta Ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados* ***a partir de los sesenta años de edad****.*

*Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga* ***reconocidas ante el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales****.*

*El trabajador cesante que tenga sesenta años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión.*

*En este caso, si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de setecientas cincuenta semanas tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del capítulo IV de este Título.*

En relación al artículo al que se hizo referencia anteriormente, el promovente de la iniciativa menciona que en virtud de que el “*Instituto Mexicano del Seguro Social, señala que las semanas cotizadas son contabilizadas como los periodos comprendidos entre las fechas de alta y baja del asegurado ante el Instituto con uno o varios patrones,* asimismo*, señala que establece que el reporte de semanas cotizadas constituye el salario base de cotización, con el que la empresa en la que se labora tiene dado de alta al trabajador y el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentos, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad prestación que se entregue al trabajador por su ocupación”*.

En razón de lo anterior, los integrantes de esta dictaminadora, consideramos oportuna la presente propuesta de reforma, a fin de que se reconozca al trabajador asegurado que se encuentre en cesantía y quede privado de trabajo remunerado y tenga reconocidas ante el instituto 1250 cotizaciones semanales para que proceda su pensión, estableciendo de esta mansera en la Ley del Seguro Social, que el trabajador cesante que tenga sesenta años o más **y reúne las semanas** de cotización señaladas *(un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales)*, ***se le reconocerá la totalidad del tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, sin importar el tiempo de la interrupción de pago de cotizaciones*,** y **si** no reúne esas semanas de cotización, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa con proyecto de Decreto por la que se propone reformar el párrafo tercero del artículo 154 de la Ley del Seguro Social; para quedar en la forma siguiente:

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma el párrafo tercero del artículo 154 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

**Artículo 154.** ...

...

El trabajador cesante que tenga sesenta años o más y reúne las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, **se le reconocerá la totalidad del tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, sin importar el tiempo de la interrupción de pago de cotizaciones,** y **si** no reúne esas semanas de cotización, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión.

...

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** Por lo expuesto y fundado, instrúyase a la Oficialía Mayor de este Congreso, para que la presente propuesta de iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los trámites correspondientes.

**SEGUNDO.-** Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez (Secretario), Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la propuesta de iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo, recorriendo el que actualmente ocupa esa posición a la siguiente, haciendo lo propio con el resto de los párrafos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 11 del mes de marzo de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 13 de marzo del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo, recorriendo el que actualmente ocupa esa posición a la siguiente, haciendo lo propio con el resto de los párrafos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la propuesta de iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo, recorriendo el que actualmente ocupa esa posición a la siguiente, haciendo lo propio con el resto de los párrafos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“Vamos a ser lo más precisos y breves que sea posible en este tema que todos conocemos y entendemos muy bien. El aseguramiento de bienes y cuentas bancarias de una persona física o moral, es una medida que utilizan las autoridades de procuración de justicia y fiscales en su lucha para combatir los delitos relacionados con la delincuencia organizada, esto en el primer caso, la extinción de dominio, léase, despojar a los delincuentes de los bienes muebles, inmuebles y dinero mal habido.*

*En el segundo caso, las autoridades fiscales, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, utilizan el bloqueo o aseguramiento provisional de las cuentas bancarias como parte de su estrategia para combatir, especialmente, los delitos con recursos de procedencia ilícita, así como le terrorismo. Todo esto explicado en su forma más simple, sin necesidad de detallar cuestiones técnicas o jurídicas más allá de los que es evidente y comprensible para todos.*

*En nuestro país, de acuerdo a la Constitución General de la Republica y a los tratados suscritos por México, todos gozamos de diversas garantías esenciales relacionadas con el actuar de las autoridades; entre otras: La presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, la garantía de audiencia, y el derecho a no ser molestado en nuestros bienes y propiedades sino es por causa fundada y motivada y con apego a derecho, la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y el derecho de acceso a la justicia.*

*Estas garantías nos permiten a todos los mexicanos gozar de la tranquilidad de poder disfrutar nuestros bienes, dinero y todo lo que sea producto de nuestro trabajo honrado sin restricción alguna. Nos permiten el acceso a una vida mejor por medio de la superación, el esfuerzo, el ahorro, por medio de emprender negocios legítimos y participar en inversiones amparadas por la ley. Todo esto forma parte del derecho a la propiedad privada, del derecho a mejorar las condiciones de vida de nosotros y de nuestros hijos y del derecho a poseer bienes, servicios, productos y toda clase de satisfactores.*

*Definitivamente, es un derecho del Estado y de la sociedad misma que los bienes y dinero mal habido por los delincuentes sea asegurado en una primera instancia, y en su caso, embargado en definitiva por las autoridades, ya que es producto de modos deshonestos de vida, que además, en todos los casos, perjudican gravemente a la sociedad, ya sea por medio de las drogas y sus efectos en la comunidad, la proliferación de las armas y sus consecuencias, la trata de personas, el secuestro, la pornografía, el robo sistemático, el tráfico de especies animales y vegetales, el robo de autos, la extorsión, la tala ilegal y la piratería, solo por citar algunas actividades que enriquecen a sus autores intelectuales y materiales a costa de causar enormes daños a los ciudadanos, a los gobiernos y al entorno.*

Nadie puede estar en desacuerdo en que el Estado realice todas las acciones a su alcance para prevenir, castigar, y despojar de los bienes mal habidos a la delincuencia. Todos apoyamos estas medidas.

Cuatro artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son los que establecen el amplio abanico de derechos a que hemos hecho referencia con anterioridad, y son los siguientes:

*Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.*

*Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho…*

*Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo…*

*Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.*

*El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial…*

*Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.*

*No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia…*

**El aseguramiento fiscal**

*Las autoridades fiscales pueden practicar el aseguramiento de bienes por adeudos fiscales o por la comisión de delitos fiscales, pero, no es bajo procedimientos azarosos o espontáneos. En todos los casos, de acuerdo a los códigos fiscales, el federal y los estatales, se cumple con un procedimiento previo a la ejecución, donde el contribuyente debe ser notificado, apercibido y se le debe conceder la oportunidad de defenderse, de aclarar las cosas, e incluso de pagar para evitar el procedimiento coactivo. Y aun así, el llamado* ***aseguramiento precautorio****, ha sido objeto de amparos ante los tribunales federales y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que es inconstitucional.*

*Para abreviar, luego de una contradicción de tesis entre tribunales respecto del aseguramiento precautorio, Contradicción de Tesis 291/2012 resuelta por el Pleno, se generó la siguiente jurisprudencia:*

*Jurisprudencia P./J. 3/2013.*

*ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Al establecer el citado precepto que la autoridad fiscal podrá aplicar, como medida de apremio, el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente cuando éste, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de sus facultades de comprobación, viola el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha medida no tiene por objeto garantizar un crédito fiscal y se impone sin que existan elementos suficientes que permitan establecer, al menos presuntivamente, que el contribuyente ha incumplido con sus obligaciones fiscales; de ahí que al no precisarse los límites materiales para el ejercicio de esa atribución se da pauta a una actuación arbitraria de la autoridad hacendaria. No obsta a lo anterior que el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente obedezca a un fin constitucionalmente válido, consistente en vencer su resistencia para que la autoridad fiscal ejerza sus facultades de comprobación y logre que cumpla eficazmente con su obligación constitucional de contribuir al gasto público, en razón de que tal medida de apremio, en tanto impide que ejerza sus derechos de propiedad sobre los bienes asegurados, no es proporcional con el fin pretendido por el legislador ni es idónea para ello, ya que puede llegar a obstaculizar el desarrollo normal de sus actividades ordinarias y, con ello, generar que incumpla con las obligaciones derivadas de sus relaciones jurídicas, incluyendo las de naturaleza tributaria, a más de que existen otros medios que restringen en menor medida sus derechos fundamentales, como el auxilio de la fuerza pública y la imposición de sanciones pecuniarias.*

*La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), en el cuadernillo “número VII; Inmovilización de cuentas bancarias a la luz de las recomendaciones de la Prodecon, reconoce que “las autoridades están facultadas por ley para realizar la inmovilización de los depósitos y cuentas financieras de los contribuyentes, manifestando que la autoridad debe ejercer dicha facultad con la mayor reserva, apegada de manera estricta a los casos que la ley prevé para su procedencia, como último recurso permitiendo en todos los casos la operación del giro, así como aplicarla estrictamente en proporción a los objetivos que se persigan, respetando en todo momento los derechos fundamentales de los contribuyentes involucrados. Sin embargo, es evidente que las autoridades fiscales no toman en cuenta estos aspectos, toda vez que, derivado de las quejas que han promovido diversos contribuyentes ante la Prodecon, se observa que las autoridades atentaron contra los derechos fundamentales de los pagadores de impuestos, tales como los de legalidad, audiencia, debido proceso, seguridad y certeza jurídicas, propiedad, acceso a la justicia, seguridad social e incluso al mínimo vital…” Fin de la cita.*

*Asimismo, la presunción de inocencia, es un principio, contrario a la creencia de tradicional de que solo opera en el ámbito penal, es aplicable a otros ámbitos, como el fiscal y el administrativo. Así los resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siguiente criterio:*

*Décima Época Núm. de Registro: 2006505 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: (III Región)4o.37 A (10a.) Página: 2096*

*PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO ACORDE CON ÉL.*

*De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", se advierte que los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consagran los principios del debido proceso legal y acusatorio, los cuales resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, que consiste en que el gobernado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia. Si se parte de esa premisa, la presunción de inocencia es un derecho que surge para disciplinar distintos aspectos del proceso penal, empero, debe trasladarse al ámbito administrativo sancionador, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. De tal suerte que dicho principio es un derecho que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos encaminados a disciplinar distintos aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, en la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres vertientes: 1. Como regla de trato procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar probatorio o regla de juicio, lo que significa que el procedimiento administrativo sancionador se define como disciplinario al desahogarse en diversas fases con el objetivo de obtener una resolución sancionatoria de una conducta antijurídica que genera que se atribuya la carga de la prueba a la parte que acusa. De esa forma, la sanción administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos fines preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el procedimiento administrativo sancionador deriva de la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas desplegadas por el sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo, por ello es dable afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con la penal, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto por el tribunal, como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas las similitudes del procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como el de presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos términos, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método al valorar los elementos de convicción que obran en autos, para verificar que por sus características reúnen las condiciones para considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para desvanecer la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre la que se atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora.*

**El aseguramiento o bloqueo de cuentas bancarias**

*De acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene como finalidad investigar las operaciones financieras que tengan como objetivo financiar el terrorismo, además de detectar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.*

*Existen muchas inquietudes en el país con respecto al funcionamiento de esta Unidad, ya que incluso el propio Fiscal General de la República ha señalado que dicha institución no se apega a los principios de presunción de inocencia y de debido proceso a la hora de proceder al aseguramiento o bloqueo de cuentas bancarias por “sospechas” de que forman parte de actividades ilícitas.*

*En fecha 22 de mayo de 2019, el sitio WEB “La Jornada”, dio a conocer lo siguiente:*

*“…SCJN autoriza a SHCP a congelar cuentas bancarias sin orden judicial*

*La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá “congelar” cuentas bancarias sin solicitar autorización judicial cuando exista la petición de una autoridad extranjera. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los jueces no podrán otorgar suspensiones provisionales a los afectados por estas medidas.*

*Los ministros de la Segunda Sala establecieron que “para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, la UIF de manera válida puede ordenar el bloqueo de una cuenta bancaria, pero solamente cuando ello se efectúe con motivo de una solicitud expresa realizada por una autoridad competente de otro país o por un organismo internacional”.*

*Por unanimidad de votos estableció las reglas que deberán aplicar los jueces federales para analizar la procedencia de la suspensión provisional cuando en un juicio de amparo se reclame un bloqueo de cuentas bancarias que tenga como origen una orden de la UIF, la cual en las últimas semanas ha realizado múltiples aseguramiento de cuentas a personas físicas y morales que presuntamente han incurrido en actos ilícitos.La Corte determinó que “en este tipo de asuntos es posible otorgar la suspensión provisional” pero esa medida “no surtirá efectos cuando el bloqueo se deba a una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera competente o por un organismo internacional, con base en un tratado bilateral o multilateral”.*

*En casos en los que la UIF “considere que existen elementos que puedan constituir un delito (deberá presentar) la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la cual podrá a su vez solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal”.*

*Esta resolución no tiene efectos retroactivos, por lo que, como en escaso del ex jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, el general Eduardo León Trauwitz, —señalado como partícipe de actos que beneficiaron a grupos dedicados a huachicoleo—, quien solicitó el descongelamiento de sus cuentas, ya que en su juicio de amparo ya se le negó la suspensión definitiva…” Fin de la cita.*

*En resumen, si el bloqueo de cuentas corresponde a nacionales, debería observarse el debido proceso y la presunción de inocencia en favor los afectados, de tal suerte que para poder asegurar las cuentas se realice un proceso legal y se obtenga la orden de aseguramiento de un juez.*

*A raíz de los hechos ya señalados, en fecha 06 de noviembre de 2019, y luego de ser aprobada por mayoría en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, para que la UIF pueda congelar cuentas bancarias bajo un procedimiento que, si bien pretende establecer garantías a favor de la persona que sufre el aseguramiento, en los hechos resulta controversial, iniciativa original del senador Ricardo Monreal. El dictamen se aprobó con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones.*

*Los especialistas en la materia, en su inmensa mayoría señalan que es una reforma inconstitucional, porque vulnera los principios ya mencionados: la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y el derecho de acceso a la justicia y la legalidad.*

***El derecho a no sufrir aseguramiento o embargo de bienes arbitrario debe estar en la Ley Suprema***

*Si bien, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los artículos 14, 16, 21 y 22, debe quedar claro para todos que ninguna autoridad puede asegurar los bienes o cuentas bancarias de los ciudadanos con discrecionalidad y sin respeto por las garantías del debido proceso y presunción de inocencia, el actuar de la UIF ha planteado la necesidad de que esto deba precisarse de modo claro en el texto constitucional.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la propuesta de iniciativa que adiciona un tercer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para un mejor análisis, a continuación anexamos un cuadro comparativo de la reforma en comento:

|  |  |
| --- | --- |
| **LEY VIGENTE** | **PROPUESTA DE REFORMA** |
| **Artículo 22.** Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.  No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.  La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.  Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.  A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. | **Artículo 22. …**  **…**  **No podrá realizarse en perjuicio de persona alguna el aseguramiento de sus bienes y cuentas bancarias sin que se observen de manera previa las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.**  **…**  **…**  **…** |

Una vez expuesto lo anterior, los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, podemos observar que la propuesta de iniciativa, busca que al realizarse el aseguramiento de bienes y cuentas bancarias, se observen de manera previa las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.

Para los integrantes de esta comisión dictaminadora, es de gran relevancia el avance que en los últimos años se ha logrado, en materia de combate al narcotráfico mediante la prevención y combate al Lavado de Dinero, y que además ha sido un tema prioritario de a nivel internacional, ya que constituyen riesgos para la paz y la seguridad social, estamos conscientes que en nuestro Estado Mexicano se han tomado acciones importantes, como lo es el Grupo de Acción Financiera, el cual es un organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

Es así, que México ha venido fortaleciendo su régimen de prevención y combate al lavado de dinero, con acciones como la penalización de esos delitos conforme a los más altos estándares internacionales; y la creación y fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de coadyuvar en la prevención a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Financiamiento al Terrorismo (LD/FT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se creó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.

Ahora bien, coincidimos con el promovente en que es necesario que en la aplicación de estas acciones, se respete lo consagrado en la Constitución General, la cual establece en el capítulo relativo De los Derechos Humanos y sus Garantías, lo siguiente:

***Artículo 1o.*** *En los Estados Unidos Mexicanos* ***todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección****, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*

***Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad****. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

*Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.*

*Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.*

En el artículo 14 párrafo segundo, se establece lo siguiente: *Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.*

Asimismo, en el capítulo anteriormente expuesto, se establecen en el apartado B del artículo 20 y en el artículo 21, lo siguiente:

***I.******A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad*** *mediante sentencia emitida por el juez de la causa;*

***II.*** *A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;*

***III.*** *A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.*

*La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;*

***IV.*** *Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;*

***V.*** *Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.*

*En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;*

***VI.*** *Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.*

*El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;*

***VII.*** *Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;*

***VIII.*** *Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y*

***IX.*** *En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.*

*La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.*

*En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.*

***Artículo 21.*** *La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.*

*El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.*

*La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.*

*Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.*

*Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.*

*Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.*

*El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.*

*El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.*

*La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.*

*Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:*

*a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.*

*b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema.*

*c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.*

*d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.*

*e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.*

*La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación.*

*La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.*

*La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.*

Una vez referido lo anterior, no podemos omitir, que hay inquietudes al respecto de la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, en relación a las acciones llevadas a cabo en los aseguramientos, en las cuales considera se vulneran derechos fundamentales, lo que ha generado amparos ante los tribunales federales y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que es inconstitucional, pudiendo mencionar al respecto la *Jurisprudencia P./J. 3/2013. ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.*

Asimismo, podemos mencionar lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el amparo en revisión 1214/2016, en el que se declaróla inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congelar cuentas bancarias de contribuyentes por supuestas acciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, antecedente al desarrollo de un procedimiento administrativo.

Para los integrantes de esta dictaminadora, es de vital importancia que México cuente con un sistema de prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pero que el mismo, sea respetuoso de los derechos humanos de los ciudadanos, ya que consideramos que de esta manera, la medida será más efectiva, evitando así la existencia de algún juicio de amparo.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo, recorriendo el que actualmente ocupa esa posición a la siguiente, haciendo lo propio con el resto de los párrafos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar en la forma siguiente:

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se adiciona un tercer párrafo, recorriendo el que actualmente ocupa esa posición a la siguiente, haciendo lo propio con el resto de los párrafos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar como sigue:

**Artículo 22.** …

…

No podrá realizarse en perjuicio de persona alguna el aseguramiento de sus bienes y cuentas bancarias sin que se observen de manera previa las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.

…

…

…

**T R A N S I T O R I O**

**Único.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** Por lo expuesto y fundado, instrúyase a la Oficialía Mayor de este Congreso, para que la presente propuesta de iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los trámites correspondientes.

**SEGUNDO.-** Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez (Secretario), Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado para que se autorice al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un lote de terreno con una superficie de 28,721.10 m2., identificado como la Manzana 19 del “Nuevo Centro Metropolitano” en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a favor de la Comisión Estatal de Vivienda.

**RESULTANDO**

**ÚNICO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado, el día 13 del mes de mayo del año 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.**  Que estaComisión de Finanzas, con fundamento en los artículos 91, 116, 117 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.** Que la iniciativa se sustentó en la siguiente exposición de motivos.

**TERCERO.**  Uno de los objetivos primordiales de esta Administración es concertar la realización de acciones previstas en el **“PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2023”** y sus Programas, con las diferentes instancias de gobierno sean federal, estatal o municipal, lo que favorecerá el desarrollo social, cultural y económico del Estado.

Que el Gobierno del Estado, ratifica su intención de coadyuvar con las instituciones para abatir el rezago habitacional, proporcionando los medios necesarios para satisfacer la demanda de vivienda que ha sido incrementada por el desarrollo económico en las diferentes Regiones del Estado, en virtud de lo cual, ha resuelto donar un inmueble a favor de la “Comisión Estatal de Vivienda”, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, sectorizado a la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado de Coahuila de Zaragoza, para colaborar en el cumplimiento de los objetivos para la que fue creada.

Que el Gobierno del Estado, es propietario y poseedor, con pleno dominio, de un inmueble con una superficie de 28,721.10 m², identificado como la Manzana N° 19 del “Nuevo Centro Metropolitano” en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, amparando su titularidad con la Escritura Pública N° 35, de fecha 30 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Público del Estado, Oficina en Saltillo, bajo las Partidas 60968 y 5, Libros 610 y 1, Secciones I S.C. y IX S.C., de fechas 02 y 18 de febrero de 1999, respectivamente.

Que respecto del polígono 2 (dos) de la manzana 19 (diecinueve), del fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, ubicado al oriente de esta ciudad; el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, realizó un contrato de donación a título gratuito del derecho de propiedad, a favor de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, mediante la escritura número 115 (ciento quince), de fecha 17 (diecisiete) de abril del año 2009 (dos mil nueve), pasada ante la fe del Licenciado Raúl P. García Elizondo, Notario Público Número 16 (dieciséis) en ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la Partida 229722, Libro 2298, Sección Primera, de fecha 09 de noviembre de 2009, siendo dicha donación llevada a cabo en virtud de Decreto número 484, de fecha 18 (dieciocho) de abril del año 2008 (dos mil ocho), Tomo CXV, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 32 (treinta y dos), donde expresamente se autorizó al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajenara a título gratuito a favor de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, un predio ubicado al oriente de la ciudad con una superficie de 4,485.00 m2 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco metros cuadrados), y siendo el objeto de la mencionada donación a título gratuito, el que en el terreno donado, se llevara a cabo la construcción e instalación del edificio que ocupará las oficinas de la Auditoría Superior del Estado en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. En dicho decreto, en su Artículo Quinto, se señala que si dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que, entre vigor, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, no iniciare la construcción del edificio a que se hace referencia, el inmueble se revertiría de pleno derecho, al patrimonio del Gobierno del Estado, dado que a la fecha no se ha llevado a cabo el objeto de la donación, se actualiza a favor del Estado, la reversión de la propiedad.

Que respecto del polígono 5 (cinco) de la manzana 19 (diecinueve), del fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, ubicado al oriente de esta ciudad; el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, realizó un contrato de donación a título gratuito a favor de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Saltillo, Coahuila, mediante la escritura número 211 (doscientos once), de fecha 1° (primero) de julio del año 2008 (dos mil ocho), pasada ante la fe del Licenciado Armando Javier Prado Delgado, Notario Público Número 11 (once) en ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la Partida 223002, Libro 2231, Sección ISC, de fecha 08 de junio de 2009, siendo dicha donación llevada a cabo en virtud de Decreto número 485, de fecha 18 (dieciocho) de abril del año 2008 (dos mil ocho), Tomo CXV, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 32 (treinta y dos), donde expresamente se autorizó al Gobierno del Estado de Coahuila para que enajenara a título gratuito a favor de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Saltillo, Coahuila, un predio ubicado al oriente de la ciudad con una superficie de 5,035.03 m2 (cinco mil treinta y cinco punto cero tres metros cuadrados), y siendo el objeto de la mencionada donación a título gratuito, el que en el terreno donado, se llevara a cabo la construcción e instalación del edificio que ocupará las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Saltillo, Coahuila. En dicho decreto, en su Artículo Quinto, se señala que si dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que, entre vigor, la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de Saltillo, Coahuila, no iniciare la construcción del edificio a que se hace referencia, el inmueble se revertiría de pleno derecho, al patrimonio del Gobierno del Estado, dado que a la fecha no se ha llevado a cabo el objeto de la donación, se actualiza a favor del Estado, la reversión de la propiedad.

Que respecto del lote de terreno de la manzana 19 (diecinueve), con una superficie de 4,133.00 m2 (cuatro mil ciento treinta y tres metros cuadrados) del fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, ubicado al oriente de esta ciudad; el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, realizó un contrato de donación pura y a título gratuito a favor del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, mediante la escritura número 06 (seis), de fecha 25 (veinticinco) de marzo del año 2008 (dos mil ocho), pasada ante la fe del Licenciado S.C.F. Xavier Diez De Urdanivia Fernández, Notario Público Número 48 (cuarenta y ocho) en ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo la Partida 25, Libro I, Sección IX, de fecha 10 de diciembre de 2008, siendo dicha donación llevada a cabo en virtud de Decreto número 246, de fecha 24 (veinticuatro) de abril del año 2007 (dos mil siete), Tomo CXIV, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 33 (treinta y dos), donde expresamente se autorizó al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajenara a título gratuito a favor del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, un predio ubicado al oriente de la ciudad con una superficie de 4,133.00 m2 (cuatro mil ciento treinta y tres metros cuadrados), y siendo el objeto de la mencionada donación a título gratuito, el que en el terreno donado se llevara a cabo la construcción e instalación del edificio que ocupará las oficinas del Instituto Coahuilense De Acceso a la Información Pública. En dicho decreto, en su Artículo Quinto, se señala que si dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que entre vigor, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, no iniciare la construcción del edificio a que se hace referencia, el inmueble se revertiría de pleno derecho, al patrimonio del Gobierno del Estado, dado que a la fecha no se ha llevado a cabo el objeto de la donación, se actualiza a favor del Estado, la reversión de la propiedad.

Que respecto del lote de terreno de la manzana 19 (diecinueve), con una superficie de 4,000.00 m2 (cuatro mil metros cuadrados) del fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, ubicado al oriente de esta ciudad; el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, realizó un contrato de donación pura y a título gratuito a favor del Instituto Federal Electoral, mediante la escritura número 151 (ciento cincuenta y uno), de fecha 13 (trece) de julio del año 2007 (dos mil siete), pasada ante la fe de la Licenciada María Elena Guadalupe Orozco Aguirre, Notaria Público Número 52 (cincuenta y dos) en ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la Partida 199487, Libro 1995, Sección ISC, de fecha 28 de febrero de 2008, siendo dicha donación llevada a cabo en virtud de Decreto número 225, de fecha 24 (veinticuatro) de abril del año 2007 (dos mil siete), Tomo CXIV, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 33 (treinta y dos), donde expresamente se autorizó al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajenara a título gratuito a favor del Instituto Federal Electoral, un predio ubicado al oriente de la ciudad con una superficie de 4,000.00 m2 (cuatro mil metros cuadrados), y siendo el objeto de la mencionada donación a título gratuito, el que en el terreno donado se llevara a cabo la construcción e instalación del edificio que ocupará las oficinas del Instituto Federal Electoral. En dicho decreto, en su Artículo Quinto, se señala que si dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que, entre vigor, el Instituto Federal Electoral, no iniciare la construcción del edificio a que se hace referencia, el inmueble se revertiría de pleno derecho, al patrimonio del Gobierno del Estado, dado que a la fecha no se ha llevado a cabo el objeto de la donación, se actualiza a favor del Estado, la reversión de la propiedad.

Se elaboró Acta de Protocolo Número 02/2020, de fecha 16 de abril del año 2020, a solicitud del MTRO. Carlos Alberto Estrada Flores, en su calidad de Representante del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, donde hace constar y dar fe de que dentro del polígono (2) dos de la manzana 19, con una superficie de 4,485.00 m2, no se encuentra construcción alguna, suscrita por el Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, Notario Público Número (25) Veinticinco.

Se elaboró Acta de Protocolo Número 03/2020, de fecha 16 de abril del año 2020, a solicitud del MTRO. Carlos Alberto Estrada Flores, en su calidad de Representante del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, donde hace constar y dar fe de que dentro del polígono (5) de la manzana 19, con una superficie de 5,035.03 m2., no se encuentra construcción alguna, suscrita por el Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, Notario Público Número (25) Veinticinco.

Se elaboró Acta de Protocolo Número 04/2020, de fecha 16 de abril del año 2020, a solicitud del MTRO. Carlos Alberto Estrada Flores, en su calidad de Representante del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, donde hace constar y dar fe de que dentro del polígono (6) de la manzana 19, con una superficie de 4,133.00 m2., no se encuentra construcción alguna, suscrita por el Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, Notario Público Número (25) Veinticinco.

Se elaboró Acta de Protocolo Número 05/2020, de fecha 16 de abril del año 2020, a solicitud del MTRO. Carlos Alberto Estrada Flores, en su calidad de Representante del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, donde hace constar y dar fe de que dentro del Polígono (4) de la manzana 19, con una superficie de 4,000.00 m2., no se encuentra construcción alguna, suscrita por el Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, Notario Público Número (25) Veinticinco.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que se han cubierto los requisitos necesarios para la enajenación de la superficie en mención, logrando así la posibilidad de coadyuvar con las instituciones para abatir el rezago habitacional, proporcionando los medios necesarios para satisfacer la demanda de vivienda en este Municipio, el cual se otorgará seguridad y beneficio social.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, las integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE ENAJENE A TÍTULO GRATUITO, A FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, UN LOTE DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE 28,721.10 m², UBICADO EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**ARTÍCULO PRIMERO. -** Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que desincorpore, un lote de terreno con una superficie de **28,721.10 m²,** identificado como la Manzana N° 19 del “Nuevo Centro Metropolitano” de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene a título gratuito, un lote de terreno con una superficie de **28,721.10 m²,** identificado como la Manzana N° 19 del “Nuevo Centro Metropolitano” de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a favor de la “Comisión Estatal de Vivienda”, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, sectorizado a la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado de Coahuila de Zaragoza, para colaborar en el cumplimiento de los objetivos para la que fue creada.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Se faculta al Titular del Ejecutivo del Estado, para que por sí mismo, o por medio del Representante Legal que designe, otorgue a favor de la “Comisión Estatal de Vivienda”, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, sectorizado a la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Escritura Pública de Donación correspondiente a la enajenación gratuita, que con el presente se autoriza.

**ARTÍCULO CUARTO.-** Los gastos que se generen por el proceso de Escrituración y Registro de la operación autorizada en este Decreto, serán cubiertos totalmente por la “Comisión Estatal de Vivienda”, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, sectorizado a la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO QUINTO.-** El presente Decreto deberá insertarse íntegramente en el Título de Propiedad respectivo.

**ARTÍCULO SEXTO.-** En el supuesto de que no se formalice la enajenación a título gratuito que en el presente Decreto se autoriza, dentro de un término de veinticuatro (24) meses, computados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, quedarán sin efecto las disposiciones del mismo, requiriéndose, en su caso, de nueva autorización legislativa para proceder a la enajenación gratuita del inmueble a que se hace referencia en el Artículo Primero de este documento y se revertirá el bien inmueble al Patrimonio del Gobierno del Estado.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 3 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para que se autorice a celebrar un Convenio de Colaboración entre el ayuntamiento de dicho municipio con el Parque España de la Laguna S.A. de C.V., para la custodia y conservación del buen estado del área verde con una superficie de 1,349.79 m2., ubicada en el Fraccionamiento “Quintas San Isidro”, con objeto de llevar a cabo el acondicionamiento de un paseo público general y además conservar en buen estado el área verde, por una vigencia de 30 años.

**R E S U L T A N D O**

**ÚNICO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 29 del mes de abril del año 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O S**

**PRIMERO.** Que esta Comisión es competente para emitir el presente dictamen, conforme a lo dispuesto en los artículos 91, 116 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que conforme a lo dispuesto en los Artículos 59, fracción IV, artículo 67 fracción IX, inciso b y 158-U, fracción I, numeral 2 y 10 de la Constitución Política del Estado, así como en el Artículo 102, fracción I, numeral 2 y 11; del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos están facultados para *“aprobar, con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos, los actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento con arreglo a la ley”.*

**TERCERO. -** Que según lo establecido en el Artículo 302 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila. *“El Congreso del Estado, podrá invalidar las resoluciones de los Ayuntamientos en los casos en que dicten resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, cuando dejen de observar o contravengan las disposiciones aplicables.”*

**CUARTO. -** Que, el día 16 de diciembre de 2019, los miembros de la Comisión Patrimonio Inmobiliario y Tenencia de la Tierra del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, declara ser competente para dictaminar el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 31, 32 inciso a); 51, 75, 82, 83 y 84 del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en virtud de lo anterior, fue aprobada por Unanimidad de los miembros de la Comisión, celebrar un Convenio de Colaboración entre el ayuntamiento de dicho municipio con el Parque España de la Laguna S.A. de C.V., para la custodia y conservación del buen estado del área verde con una superficie de 1,349.79 m2., ubicada en el Fraccionamiento “Quintas San Isidro”, con objeto de llevar a cabo el acondicionamiento de un paseo público general y además conservar en buen estado el área verde ubicada en el Fraccionamiento Quintas San Isidro, por cual fue aprobada por Unanimidad de los miembros de la Comisión.

**QUINTO.** Que, del análisis realizado a la documentación remitida por el Presidente Municipal y el Secretario del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, se adjunta acta de cabildo de fecha 18 de diciembre de 2019, donde se aprobó por Unanimidad del cabildo celebrar un Convenio de Colaboración entre el ayuntamiento de dicho municipio con el Parque España de la Laguna S.A. de C.V., para la custodia y conservación del buen estado del área verde con una superficie de 1,349.79 m2., ubicada en el Fraccionamiento “Quintas San Isidro”, con objeto de llevar a cabo el acondicionamiento de un paseo público general y además conservar en buen estado el área verde, por una vigencia de 30 años.

En la cual se estipula que el mantenimiento correrá a cargo del Parque España de la Laguna S.A. de .C.V, y en caso de incumplimiento la Administración Pública Municipal podrá realizar dichas acciones, mismas que correrán a cargo del solicitante a través del cobro en el impuesto predial.

Una vez que este acuerdo sea declarado válido por el H. Congreso del Estado, se autoriza que se formalice el contrato de enajenación ante Notario Público, disponiéndose que en dicho contrato se incluya íntegramente este acuerdo, y en el capítulo que corresponda se pacte por las partes las causas por las cuales puede revocarse o rescindirse el contrato, independientemente de las causas de caducidad o revocación, para que en esos casos el inmueble se reincorpore al patrimonio municipal sin responsabilidad del Ayuntamiento de pagar ninguna compensación ni indemnización.

**SEXTO.** Que atento a lo dispuesto por el artículo 302 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, ya que el convenio en mención compromete al Municipio por un plazo mayor al periodo de la actual administración municipal y en virtud que ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la celebración del convenio de colaboración, esta Comisión de Finanzas considera que es procedente validar el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, logrando así la posibilidad de llevar a cabo el mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad, con el acondicionamiento de un paseo público general, además de conservar en buen estado el área verde, con el fin de coadyuvar a la adecuada identidad, conservación, mantenimiento y preservación de las áreas verdes por un período de 30 años, el cual otorgará un beneficio social.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a celebrar convenio de colaboración con el Parque España de la Laguna S.A. de C.V., para la custodia y conservación del buen estado del área verde, la cual se identifica como fracción de terreno del área de cesión municipal N°11 de la fracción de la manzana 23 ubicada en el Fraccionamiento “Quintas San Isidro”, con una superficie de 1,349.79 m2., con objeto de llevar a cabo el acondicionamiento de un paseo público general y además conservar en buen estado el área verde por una vigencia de 30 años, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 fracción IX, inciso b de la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza, así como el artículo 102 fracción I, numeral 11, del Código Municipal para el estado de Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Los gastos de mantenimiento, limpieza, conservación, funcionamiento del Paseo Público correrá a cargo del Parque España de la Laguna S.A. de C.V, y en caso de incumplimiento la Administración Pública Municipal podrá realizar dichas acciones, mismas que correrán a cargo del solicitante a través del cobro en el impuesto predial.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Parque España de la Laguna S.A. de C.V., no traspasara a terceros por ningún motivo las obligaciones o algún beneficio que derive del presente convenio, debiendo cumplir con lo dispuesto en los Reglamentos Municipales, Leyes Estatales, así como federales, que apliquen en el cumplimiento del presente convenio.

**ARTÍCULO CUARTO.** Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero del Ayuntamiento y Síndico respectivamente, para que concurran a la suscripción y firma del convenio de la presente operación, que en este decreto se pactan.

**ARTÍCULO QUINTO.** Una vez celebrado el convenio, el Ayuntamiento informará a este Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre los términos en que éste fue celebrado en un término no mayor a 10 días hábiles.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 3 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 1,823.96 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Quintas San Isidro” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor de la persona moral “Parque España de la Laguna S.A. de C.V.”, con objeto de llevar a cabo su remodelación, en el cual está considerada sustituir la barda actual que colinda con esta porción de terreno alineándolo con la banqueta.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 29 del mes de abril del año 2020 ese dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, numeral 10 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302que dispone *” Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.*

**TERCERO.** Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.

**CUARTO.** Que el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, según consta en la certificación del acta de Cabildo, de fecha 18 de diciembre de 2019, aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 1,823.96 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Quintas San Isidro” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor de la persona moral “Parque España de la Laguna S.A. de C.V.”

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción de terreno del área de cesión municipal N°11 de la fracción de la manzana 23 del Fraccionamiento “Quintas San Isidro” de esa ciudad, con una superficie de 1,823.96 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide en línea quebrada 133.43 metros, 81.20 metros, 168.52 metros, 5.03 metros, 14.73 metros y colinda con Parque España.

Al Sur: mide en línea quebrada 21.02 metros, 113.37 metros, 29.96 metros, 9.18 metros, 8.81 metros, 15.30 metros, 14.06 metros, 60.66 metros, 45.56 metros, 54.14 metros y colinda con fracción del mismo predio.

Al Oriente: mide 2.81 metros y colinda con área de Cárcamo.

Al Sur Oriente: mide 24.21 metros y colinda con fracción del mismo predio.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en las Oficinas de Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 12061, Libro 121, Sección Primera de fecha 07 de abril de 2003.

**QUINTO.** La autorización de esta operación es con objeto de llevar a cabo la remodelación del Parque España para crear un paseo público general, por lo que, en caso de darle un uso distinto al estipulado, por ese solo hecho se reincidirá el contrato revirtiéndose el predio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin responsabilidad del R. Ayuntamiento de Torreón.

**SEXTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, en virtud de que se realizará una remodelación al Parque España, el cual otorgará un beneficio de recreación a los habitantes de ese sector.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 1,823.96 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Quintas San Isidro” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor de la persona moral “Parque España de la Laguna S.A. de C.V.”

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción de terreno del área de cesión municipal N°11 de la fracción de la manzana 23 del Fraccionamiento “Quintas San Isidro” de esa ciudad, con una superficie de 1,823.96 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide en línea quebrada 133.43 metros, 81.20 metros, 168.52 metros, 5.03 metros, 14.73 metros y colinda con Parque España.

Al Sur: mide en línea quebrada 21.02 metros, 113.37 metros, 29.96 metros, 9.18 metros, 8.81 metros, 15.30 metros, 14.06 metros, 60.66 metros, 45.56 metros, 54.14 metros y colinda con fracción del mismo predio.

Al Oriente: mide 2.81 metros y colinda con área de Cárcamo.

Al Sur Oriente: mide 24.21 metros y colinda con fracción del mismo predio.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en las Oficinas de Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 12061, Libro 121, Sección Primera de fecha 07 de abril de 2003.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es con objeto de llevar a cabo la remodelación del Parque España para crear un paseo público general, por lo que, en caso de darle un uso distinto al estipulado, por ese solo hecho se reincidirá el contrato revirtiéndose el predio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin responsabilidad del R. Ayuntamiento de Torreón.

**ARTÍCULO TERCERO.** Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 302, 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Allende, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, los lotes de terreno con una superficie de 8-84-52.57 hectáreas, que constituye el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora” de ese municipio, a favor de sus actuales poseedores, con objeto de continuar con los tramites de escrituración y llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, en virtud que el decreto número 34 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 17 de abril de 2015, en el que se autorizó esta operación con anterioridad, quedo sin vigencia.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 16 de octubre de 2019, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en acta de Cabildo de fecha 24 de septiembre de 2019, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, los lotes de terreno con una superficie de 8-84-52.57 hectáreas, que constituye el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora” de ese municipio, a favor de sus actuales poseedores, en virtud que el decreto número 34 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 17 de abril de 2015, en el que se autorizó esta operación con anterioridad, quedo sin vigencia.

La superficie antes mencionada, se identifica con el siguiente:

**CUADRO DE CONSTRUCCIÓN**

**SUPERFICIE DE 8-84-52.57 HECTÁREAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EST.** | **P.V.** | **DISTANCIA** | **RUMBO** | **V** | **COORDENADAS**  **X Y** | |
| 1 | 2 | 126.16 | N 37°43’37”W | 2 | 312661.12 | 3133853.93 |
| 2 | 3 | 46.86 | S 50°29’27”W | 3 | 312624.97 | 3133824.12 |
| 3 | 4 | 18.47 | S 19°42’54”E | 4 | 31263120 | 3133806.73 |
| 4 | 5 | 135.61 | S 46°45’00”W | 5 | 312532.42 | 3133713.81 |
| 5 | 6 | 96.47 | S 49°06’32”W | 6 | 312459.49 | 3133650.66 |
| 6 | 7 | 20.16 | S 55°20’13”W | 7 | 312442.91 | 3133639.20 |
| 7 | 8 | 30.00 | N 30°59’55”W | 8 | 312427.46 | 3133664.91 |
| 8 | 9 | 49.67 | S 79°01’47”W | 9 | 312378.70 | 3133655.46 |
| 9 | 10 | 10.00 | S 58°39’49”W | 10 | 312370.16 | 3133650.26 |
| 10 | 11 | 68.23 | S 19°13’25”E | 11 | 312392.62 | 3133585.83 |
| 11 | 12 | 131.60 | S 60°26’39”W | 12 | 312278.15 | 3133585.83 |
| 12 | 13 | 82.46 | S 63°06’04”W | 13 | 312204.61 | 3133520.92 |
| 13 | 14 | 70.16 | S 39°18’40”E | 14 | 312249.06 | 3133483.62 |
| 14 | 15 | 212.50 | N 57°24’58”E | 15 | 312428.11 | 3133429.33 |
| 15 | 16 | 329.45 | S 68°13’20”E | 16 | 312734.05 | 3133543.77 |
| 16 | 17 | 30.53 | N 29°17’30”W | 17 | 312719.12 | 3133421.54 |
| 17 | 18 | 28.07 | N 10°46’21”W | 18 | 312713.87 | 3133448.16 |
| 18 | 19 | 143.88 | N 10°34’30”W | 19 | 312687.46 | 3133475.74 |
| 19 | 20 | 10.99 | N 01°53’45”E | 20 | 312687.83 | 3133617.18 |
| 20 | 21 | 75.96 | N 02°53’38”E | 21 | 312691.66 | 3133628.16 |
| 21 | 22 | 28.35 | N 34°50’03”E | 22 | 312707.86 | 3133704.02 |
| 22 | 1 | 40.60 | N 48°35’35”E | 1 | 312738.31 | 3133727.29 |

**TERCERO.** La autorización de esta operación es exclusivamente para continuar con el trámite de escrituración y llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Allende, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la enajenación de la superficie en mención, logrando así garantizar certeza jurídica al predio con la escrituración de los lotes y con esto se lleve a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, el cual se otorgará un beneficio social.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, los lotes de terreno con una superficie de 8-84-52.57 hectáreas, que constituye el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora” de ese municipio, a favor de sus actuales poseedores, en virtud que el decreto número 34 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 17 de abril de 2015, en el que se autorizó esta operación con anterioridad, quedo sin vigencia.

La superficie antes mencionada, se identifica con el siguiente:

**CUADRO DE CONSTRUCCIÓN**

**SUPERFICIE DE 8-84-52.57 HECTÁREAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EST.** | **P.V.** | **DISTANCIA** | **RUMBO** | **V** | **COORDENADAS**  **X Y** | |
| 1 | 2 | 126.16 | N 37°43’37”W | 2 | 312661.12 | 3133853.93 |
| 2 | 3 | 46.86 | S 50°29’27”W | 3 | 312624.97 | 3133824.12 |
| 3 | 4 | 18.47 | S 19°42’54”E | 4 | 31263120 | 3133806.73 |
| 4 | 5 | 135.61 | S 46°45’00”W | 5 | 312532.42 | 3133713.81 |
| 5 | 6 | 96.47 | S 49°06’32”W | 6 | 312459.49 | 3133650.66 |
| 6 | 7 | 20.16 | S 55°20’13”W | 7 | 312442.91 | 3133639.20 |
| 7 | 8 | 30.00 | N 30°59’55”W | 8 | 312427.46 | 3133664.91 |
| 8 | 9 | 49.67 | S 79°01’47”W | 9 | 312378.70 | 3133655.46 |
| 9 | 10 | 10.00 | S 58°39’49”W | 10 | 312370.16 | 3133650.26 |
| 10 | 11 | 68.23 | S 19°13’25”E | 11 | 312392.62 | 3133585.83 |
| 11 | 12 | 131.60 | S 60°26’39”W | 12 | 312278.15 | 3133585.83 |
| 12 | 13 | 82.46 | S 63°06’04”W | 13 | 312204.61 | 3133520.92 |
| 13 | 14 | 70.16 | S 39°18’40”E | 14 | 312249.06 | 3133483.62 |
| 14 | 15 | 212.50 | N 57°24’58”E | 15 | 312428.11 | 3133429.33 |
| 15 | 16 | 329.45 | S 68°13’20”E | 16 | 312734.05 | 3133543.77 |
| 16 | 17 | 30.53 | N 29°17’30”W | 17 | 312719.12 | 3133421.54 |
| 17 | 18 | 28.07 | N 10°46’21”W | 18 | 312713.87 | 3133448.16 |
| 18 | 19 | 143.88 | N 10°34’30”W | 19 | 312687.46 | 3133475.74 |
| 19 | 20 | 10.99 | N 01°53’45”E | 20 | 312687.83 | 3133617.18 |
| 20 | 21 | 75.96 | N 02°53’38”E | 21 | 312691.66 | 3133628.16 |
| 21 | 22 | 28.35 | N 34°50’03”E | 22 | 312707.86 | 3133704.02 |
| 22 | 1 | 40.60 | N 48°35’35”E | 1 | 312738.31 | 3133727.29 |

Los lotes que se encuentran pendientes por escriturar y que forman parte de la superficie total de 8-84-52.57 hectáreas, se describen a continuación:

**1.-** Lote 02 de la manzana 01, con una superficie de 925.85 m2., ubicado en el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora”, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 25.70 metros y colinda con Lote 05.

Al Sur: mide 28.10 metros y colinda con Lote 01.

Al Este: mide 38.65 metros y colinda con calle H. Leonel Moreno V.

Al Oeste: mide 31.00 metros y colinda con Lote 03.

**2.-** Lote 13 de la manzana 01, con una superficie de 964.54 m2., ubicado en el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora”, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 62.69 metros y colinda con Acceso.

Al Sur: mide 67.02 metros y colinda con calle Del Ejido.

Al Este: mide 29.50 metros y colinda con Acceso.

Al Oeste: mide 1.29 metros y colinda con Acceso.

**3.-** Lote 02 de la manzana 02, con una superficie de 670.67 m2., ubicado en el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora”, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 20.30 metros y colinda con calle Javier Mina.

Al Sur: mide 18.50 metros y colinda con Lote 05.

Al Este: mide 35.20 metros y colinda con Lote 03.

Al Oeste: mide 34.00 metros y colinda con Lote 01.

**4.-** Lote 08 de la manzana 02, con una superficie de 295.21 m2., ubicado en el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora”, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 17.50 metros y colinda con Lote 01.

Al Sur: mide 17.50 metros y colinda con Lote 04..

Al Este: mide 17.00 metros y colinda con Lote 01.

Al Oeste: mide 17.00 metros y colinda con calle La Tembladora.

**5.-** Lote 04 de la manzana 03, con una superficie de 1,007.98 m2., ubicado en el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora”, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 37.40 metros y colinda con Lote 02 y 03.

Al Sur: mide 34.00 metros y colinda con Lote 06.

Al Este: mide 28.61 metros y colinda con calle La Tembladora.

Al Oeste: mide 28.00 metros y colinda con Lote 01.

**6.-** Lote 01 de la manzana 04, con una superficie de 249.47 m2., ubicado en el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora”, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 20.16 metros y colinda con propiedad privada.

Al Sur: mide 6.96 metros y colinda con calle Javier Mina.

Al Este: mide 23.58 metros y colinda con Lote 02.

Al Oeste: mide 17.67 metros y colinda con Lote 07.

**7.-** Lote 04 de la manzana 04, con una superficie de 243.44 m2., ubicado en el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora”, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 9.00 metros y colinda con propiedad privada.

Al Sur: mide 9.00 metros y colinda con calle Javier Mina.

Al Este: mide 28.33 metros y colinda con Lote 05.

Al Oeste: mide 26.17 metros y colinda con Lote 03.

**8.-** Lote 02 de la manzana 05, con una superficie de 1,622.61 m2., ubicado en el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora”, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 47.62 metros y colinda con Lote 03 y 04.

Al Sur: mide 38.40 metros y colinda con calle Javier Mina.

Al Este: mide 33.31 metros y colinda con Lote 13.

Al Oeste: mide 43.20 metros y colinda con Lote 14.

**9.-** Lote 10 de la manzana 05, con una superficie de 229.95 m2., ubicado en el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora”, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 18.99 metros y colinda con Lote 11.

Al Sur: mide 18.55 metros y colinda con calle Javier Mina.

Al Este: mide 12.40 metros y colinda con calle H. Leonel Moreno V.

Al Oeste: mide 12.40 metros y colinda con Lote 12.

**10.-** Lote 04 de la manzana 06, con una superficie de 610.04 m2., ubicado en el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora”, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 38.16 metros y colinda con Lote 05.

Al Sur: mide 40.00 metros y colinda con Lote 03.

Al Este: mide 15.00 metros y colinda con propiedad privada.

Al Oeste: mide 8.36 metros y colinda con calle H. Leonel Moreno V y 8.81 metros con calle H. Leonel Moreno V

**11.-** Lote 06 de la manzana 07, con una superficie de 255.74 m2., ubicado en el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora”, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 10.00 metros y colinda con calle Advincula Valdez.

Al Sur: mide 10.00 metros y colinda con propiedad privada.

Al Este: mide 26.00 metros y colinda con Lote 08.

Al Oeste: mide 26.00 metros y colinda con Lote 04.

**12.-** Lote 01 de la manzana 08, con una superficie de 305.45 m2., ubicado en el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora”, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 26.10 metros y colinda con calle Tranvía.

Al Sur: mide 31.31 metros y colinda con calle Del Ejido.

Al Este: mide 24.00 metros y colinda con Lote 02.

Dichos inmuebles se encuentran inscritos a favor del R. Ayuntamiento de Allende, en las Oficinas del Registro Público de la ciudad de Piedras Negras del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 26504, Libro 266, Sección I, de fecha 6 de marzo de 2009.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente para continuar con el trámite de escrituración y llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Allende, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de las operaciones realizadas con la enajenación del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Para los efectos de este Decreto, se reconocerán las operaciones realizadas conforme a los Decretos previamente autorizados respecto a este predio, conforme a lo establecido en la Ley.

**ARTÍCULO TERCERO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Daniel Héctor Saldívar Olvera, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16 del mes octubre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada el C. Daniel Héctor Saldívar Olvera, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Quea la iniciativa Popular con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Daniel Héctor Saldívar Olvera, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*Señoras y señores diputados: aunque a algunos representantes populares, prefieren a una ciudadanía apática, desinformada y que no se involucre en los asuntos públicos, puesto que así tienen un mayor margen de gobernabilidad sin tener que cargar con el peso del cuestionamiento o la rendición de cuentas; la realidad es que, la democracia, para ser efectiva, requiere de un alto grado de participación ciudadana, toda vez que esta participación representa la esencia misma de este modelo de gobierno, el cual está basado en la soberanía popular, la cual, a su vez, es ejercida a través de diversos personajes.*

*Tristemente, y en este afán por excluir a los ciudadanos de la toma de decisiones, en ocasiones se tiene la idea de que el trabajo de la ciudadanía dentro de una democracia consiste única y exclusivamente en acudir a las urnas cada que hay elecciones. Nada más alejado de la realidad*

*Es derecho y (si queremos tener una democracia más sólida) también un deber de la ciudadanía tener una participación activa en la vida pública incluso fuera de jornadas electorales.*

*En los últimos años, cada vez son más los actores políticos, gobernantes y representantes en general. Que han comprendido esta importancia de involucrar a la ciudadanía para tener una democracia más fuerte.*

*Como prueba de la anteriormente dicho, tenemos que le propio Instituto Nacional Electoral ha creado proyectos como la Estrategia Nacional de Educación Cívica, el cual a grandes rasgos, es un plan estratégico que busca que la ciudadanía tenga una participación más activa y dinámica dentro de los quehaceres de al vida pública.*

*También, contamos con algunos titulares del poder ejecutivo, como en el caso de Saltillo, donde el alcalde ha ciudadanizado diversos sectores con la creación de Consejos Ciudadanos para el seguimiento de Políticas Públicas,*

*Por último, tenemos en el propio poder legislativo coahuilense, sus antecesores del año 2001, crearon la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la cual se presentan diversos mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede involucrarse en este modelo de gobierno democrático y ser factor en la toma de decisiones de diversos ámbitos.*

*Precisamente, uno de los mecanismos que se presentan en dicha ley es la iniciativa popular, establecida en el capítulo tercero de la misma. El cual establece, sin entrar en detalles, que cualquier ciudadano puede realizar propuestas en diversas materias con la finalidad de que sean analizadas por las autoridades y, en su caso, ser aprobadas para convertirse en una realidad.*

*Un gran mecanismo para fomentar que la ciudadanía se involucre y aporte sus ideas basadas en su experiencia y conocimientos, para mejorar la realidad que tenemos en le estado.*

*El problema surge cuando por alguna extraña razón las autoridades ni siquiera se toman la molestia de leer la iniciativa presentada por la ciudadanía. Ni se aprueba, ni se desecha, simplemente se manda a la llamada “congeladora” en donde se pierde el tiempo.*

*Esto, además de representar una falta de respeto para quien se tomó el tiempo de analizar, investigar y proponer alguna mejora, podría ser también una gran pérdida para mejorar la manera de gobernar por parte de nuestros representantes.*

*Dicho lo anterior esta iniciativa busca evitar que por temas políticos o de intereses desconocidos disfrazados de “falta de tiempo” o “trabajo excesivo” las y los legisladores estatales se escuden en no leer, dictaminar y votar sobre cualquier iniciativa presentada por la ciudadanía.*

*Se pretende establecer un plazo razonable dentro del cual las y los diputados tengan que hacer su trabajo, atender a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica del Congreso y dar respuestas a la ciudadanía.*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, estamos convencidos deque la democracia participativa sin duda alguna fortalece la democracia representativa, por lo que coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos.

Dentro de este contexto, quienes integramos la presente Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia efectuamos el estudio y análisis del proyecto de reforma y de las consideraciones que motivan al mismo, verificándose que busca la finalidad de establecer en la Ley de Participación Ciudadana un plazo para que el Congreso del Estado lleve a cabo el trámite correspondiente a la iniciativa popular.

En este sentido el promovente propone modificaciones en el sentido siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **LEY VIGENTE** | **PROPUESTA** |
| **ARTÍCULO 43. EL TRÁMITE PARA DECIDIR LA PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA LEGISLATIVA.** Toda iniciativa popular en materia legislativa que se presente ante el Poder Legislativo del Estado, se sujetará al trámite legislativo siguiente:  I. El Congreso del Estado o, en su caso, la Diputación Permanente turnará la iniciativa a una comisión que se integrará con siete diputados.  El funcionamiento de la comisión se regirá por la Ley Orgánica del Congreso del Estado.  II. La comisión resolverá sobre la procedencia de la iniciativa, bajo las reglas siguientes:  1. Verificará que la iniciativa cumpla con los requisitos previstos en el artículo anterior.  2. En caso de que falte alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, se notificará al solicitante para que en un plazo no mayor de quince días hábiles presente la información requerida.  3. Una vez cumplidos los requisitos necesarios para la iniciativa popular, la comisión resolverá, en su caso, sobre la procedencia de la misma.  4. Si el solicitante no cumple con lo previsto en el numeral 2 de esta fracción, la comisión declarará la improcedencia de plano en los términos previstos por la ley.  5. La comisión notificará al solicitante o, en su caso, a su representante la resolución sobre la procedencia o improcedencia de la iniciativa popular.  6. La iniciativa que se declare procedente se sujetará al proceso legislativo que establece la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Congreso del Estado.  7. En la discusión de la iniciativa, podrán participar con voz hasta tres personas autorizadas por los solicitantes ciudadanos.  III. Toda omisión, acto o resolución del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente que viole el trámite de la iniciativa popular, podrá ser impugnada en los términos de la ley de la materia.  IV. (DEROGADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2008) | ARTÍCULO 43. EL TRÁMITE PARA DECIDIR LA PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA LEGISLATIVA. Toda iniciativa popular en materia legislativa que se presente ante el Poder Legislativo del Estado, se sujetará al trámite legislativo siguiente, **el cual no podrá exceder los 60 días hábiles contados a partir del momento de su presentación en el informe de correspondencia:**  I. El Congreso del Estado o, en su caso, la Diputación Permanente turnará la iniciativa a una comisión que se integrará con siete diputados.  El funcionamiento de la comisión se regirá por la Ley Orgánica del Congreso del Estado.  II. La comisión resolverá sobre la procedencia de la iniciativa, bajo las reglas siguientes:  1. Verificará que la iniciativa cumpla con los requisitos previstos en el artículo anterior.  2. En caso de que falte alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, se notificará al solicitante para que en un plazo no mayor de quince días hábiles presente la información requerida.  3. Una vez cumplidos los requisitos necesarios para la iniciativa popular, la comisión resolverá, en su caso, sobre la procedencia de la misma.  4. Si el solicitante no cumple con lo previsto en el numeral 2 de esta fracción, la comisión declarará la improcedencia de plano en los términos previstos por la ley.  5. La comisión notificará al solicitante o, en su caso, a su representante la resolución sobre la procedencia o improcedencia de la iniciativa popular.  6. La iniciativa que se declare procedente se sujetará al proceso legislativo que establece la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Congreso del Estado.  7. En la discusión de la iniciativa, podrán participar con voz hasta tres personas autorizadas por los solicitantes ciudadanos.  III. Toda omisión, acto o resolución del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente que viole el trámite de la iniciativa popular, podrá ser impugnada en los términos de la ley de la materia.  IV. (DEROGADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2008) |

Como se observa, el iniciador promueve la adición de la porción normativa *“el cual no podrá exceder de los 60 días hábiles, contados a partir del momento de su presentación en el informe de correspondencia”.*

Así, para pronunciarnos con respecto de la iniciativa efectuamos un análisis de las disposiciones vigentes encontrando que el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana contiene los requisitos con los que habrá de cumplir cualquier propuesta de esta naturaleza, y el artículo 43 establece el trámite que habrá de darse a las mismas.

En este tenor, resulta indispensable distinguir, con toda claridad, que previo al estudio y dictamen por parte de la comisión que, por cuestión de materia, resultara competente, para dictaminar las iniciativas populares, las mismas están sujetas a revisión por parte de una comisión plural a efecto de que ésta verifique si se ha cumplido o no con los requisitos de procedencia establecidos en el ya citado artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana.

En este orden de ideas la norma refiere *que “el funcionamiento de dicha comisión se regirá por lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso*”.

Por su parte el la fracción II estipula las reglas a las que habrá de sujetarse la comisión plural para efectos de resolver sobre la procedencia de la iniciativa, entre las cuales como correctamente señala el promovente, no se observa un plazo expreso.

Así, si bien de entrada pudiera pensarse que no existe un plazo para estos efectos, lo cierto es que el artículo 129 de la Ley Orgánica, relativo al funcionamiento de las comisiones legislativas establece que “***las comisiones deberán dictaminar, acordar e informar, según el caso, sobre los asuntos de su competencia, en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha en que le fueren remitidos.***

*(…)*

*Cuando alguna comisión juzgase necesario disponer de mayor tiempo, deberá solicitar la ampliación del plazo establecido en el párrafo anterior hasta por 60 días naturales más, a fin de dictaminar, acordar informar sobre un asunto. Transcurrido este plazo no se concederá ninguna otra prorroga por lo que la comisión respectiva tendrá que resolver en definitiva la suerte del asunto”.*

De lo anterior se advierte, que contrario a lo interpretado por el promovente, sí existe un plazo cierto y razonable para resolver sobre la procedencia de las iniciativas populares, no obstante lo anterior, por tratarse de una ley que tiene por propósito fomentar la participación de los ciudadanos en la vida pública, quienes dictaminamos coincidimos con el espíritu de la reforma, estimando oportuno, establecer en las disposiciones correspondientes, con toda claridad el trámite al que se someten las iniciativas populares, por lo que, con la finalidad de garantizar el principio de certeza jurídica, estimamos procedente modificar la Ley de Participación Ciudadana para señalar que el trámite sobre la procedencia de las iniciativas populares se resolverá en los plazos previstos en el artículo 129 de la Ley Orgánica.

En este orden de ideas, queremos enfatizar que como se señala expresamente en la ley en comento sólo aquellas iniciativas consideradas procedentes, serán sometidas al procedimiento legislativo, establecido en la Ley Orgánica (conformado por las distintas etapas y sujeto a los plazos previstos en la Ley Orgánica del Congreso), siendo éste el procedimiento ordinario al que se someten todas las iniciativas, lo que en el estudio del caso en particular es de especial relevancia, para guiar el contenido y posición de la porción normativa ha adicionarse.

Así, no estimamos oportuno insertar la porción normativa propuesta en el primer párrafo del artículo 43, puesto que ello en lugar de abonar a alcanzar la finalidad perseguida, concerniente en fijar con mayor claridad el procedimiento, originaría confusión y antinomias entre esta norma y la Ley Orgánica del Congreso, así mismo notamos que la propuesta fijaba el plazo en días hábiles mientras que la ley orgánica establece el mismo plazo, pero éste se contabiliza en días naturales y por último se proponía que el plazo empezara a correr a partir de la presentación de la iniciativa “*en el informe de correspondencia”,* lo cualtambién resulta contradictorio a lo previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de este Poder.

En virtud de lo anterior y para efecto de guardar la armonía de nuestro sistema de normas coincidimos en hacer las modificaciones en la fracción II, numeral 1 en el sentido siguiente:

II. La comisión resolverá sobre la procedencia de la iniciativa, bajo las reglas siguientes:

1. Verificará que la iniciativa cumpla con los requisitos previstos en el artículo anterior, ***en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha en que le fuere remitida.***

*Cuando la comisión juzgase necesario disponer de mayor tiempo, deberá solicitar la ampliación del plazo establecido en el párrafo anterior hasta por 60 días naturales más, a fin de dictaminar, acordar informar sobre el asunto. Transcurrido este plazo no se concederá ninguna otra prorroga por lo que la comisión respectiva tendrá que resolver en definitiva la suerte del asunto”.*

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma el numeral 1. De la fracción II del artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana de Coahuila de Zaragoza, en el sentido siguiente:

**ARTÍCULO 43. …**

I. …

II. …

1. Verificará que la iniciativa cumpla con los requisitos previstos en el artículo anterior, **en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha en que le fuere remitida.**

Cuando la comisión juzgase necesario disponer de mayor tiempo, deberá solicitar la ampliación del plazo establecido en el párrafo anterior hasta por 60 días naturales más, a fin de dictaminar, acordar informar sobre el asunto. Transcurrido este plazo no se concederá ninguna otra prorroga por lo que la comisión respectiva tendrá que resolver en definitiva la suerte del asunto.

2. a 7. ...

III. ...

IV. …

**TRANSITORIOS**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual plantea una reforma a los artículos 42 y 43 a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila (uso de la tribuna por parte de ciudadanos), planteada por el C. Ingeniero Erick Rodrigo Valdez Rangel**.**

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 04 de diciembre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 10 del mes diciembre del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual plantea una reforma a los artículos 42 y 43 a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila (uso de la tribuna por parte de ciudadanos), planteada por el C. Ingeniero Erick Rodrigo Valdez Rangel y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Quea la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual plantea una reforma a los artículos 42 y 43 a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, planteada por el C. Ingeniero Erick Rodrigo Valdez Rangel, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“La participación ciudadana es la intervención organizada de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces socioestatales”.*

*Ernesto Isunza Vera*

*“La participación ciudadana permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de las políticas públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana”.*

*Alberto J. Olvera*

*Hoy en día, uno de los términos que con mayor frecuencia invocan los políticos mexicanos al pronunciar sus discursos, es el de participación ciudadana, habla, de su importancia y de su necesidad para la profundización de la democracia en nuestro país. Sin embargo, este pensamiento no siempre ha imperado; de hecho, es una palabra muy novedosa, pues si nos remontamos a unas décadas más atrás, se podrá observar que la participación ciudadana nunca fue tan importante.*

*La democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. Sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente este poder que se le ha otorgado, es necesario que los ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas o que son del interés de todos, ya que la participación permite que las opiniones de cada uno de los integrantes, de una nación, entidad o comunidad sean escuchadas.*

*Y no importa que sea una democracia directa, representativa, deliberativa o participativa, cualquiera de éstas necesita de la participación de la gente. En efecto, en la primera, para tomar decisiones y llegar a acuerdos; en la segunda, para formar los órganos de gobierno y elegir a nuestros representantes; en la democracia deliberativa, porque es la forma en que los ciudadanos se hacen escuchar en la toma de decisiones públicas; y en la última, para concurrir con el gobierno en la elaboración y evaluación de políticas públicas. Por tanto, sea el tipo de democracia que sea, lo cierto es que necesitamos de la participación de los ciudadanos para que el gobierno tenga razón de ser y se convierta verdaderamente en el gobierno del pueblo.*

*No obstante, la injerencia de los actores privados sobre el Estado también es importante porque controla y templa el poder de los representantes políticos y de los funcionarios públicos pues una vez elegidos, es indispensable vigilar cómo y en qué ejercen los fondos estatales y de qué forma administran los recursos de la nación, Con la supervisión de nuestros gobernantes impedimos que tomen decisiones en función de sus intereses, y evitamos la corrupción, el fraude, los sobornos y otras prácticas deshonestas,*

*En síntesis, la participación de los ciudadanos es sustancial porque modera y controla el poder de los políticos y porque la sociedad se hace escuchar en la toma de decisiones,*

*Para comprender lo anterior, se debe señalar que la participación no se limita en el voto como muchas personas piensan, existen múltiples formas de tomar parte en los asuntos públicos, y el voto es sólo una de ellas,*

*La participación ciudadana es aquella donde la sociedad posee una injerencia directa con el Estado, asimismo, tiene una visión más amplia de lo público, Esta participación está muy relacionada con el involucramiento de los ciudadanos en la administración pública. Los mecanismos de democracia directa (iniciativa de ley, referéndum, plebiscito y consultas ciudadana;), la revocación de mandato y la cooperación de los ciudadanos en la prestación de servicios o en la elaboración de políticas públicas, son formas de participación ciudadana.*

*La participación ciudadana es muy importante para la democracia porque como se ha mencionado anteriormente, nos permiten vigilar y controlar la gestión de nuestros gobernantes, además, es la manera en que la ciudadanía se hace escuchar y puede tomar parte en los asuntos públicos,*

*En el 2018, según medios informativos locales, de las más de mil 200 iniciativas que se presentaron en el Congreso del Estado en los últimos 6 años, solamente el 2.62 por ciento (32) provino de ciudadanos, de ellas, solo 8 han pasado todo el trámite legislativo hasta su aprobación,*

*Pese a que la Ley de Participación Ciudadana de Coahuila “facilita” la presentación de iniciativa populares al pedir un mínimo de requisitos para que sean recibidas por el órgano legislativo, una revisión a la estadística legislativa revela que de 2012 a finales de 2018 se han presentado mil 219 propuestas, de las cuales solo 32 son de carácter popular,*

*En la 59 Legislatura, que estuvo en funciones entre 2012 y 2014, fueron presentadas 407 iniciativas, de las cuales solo 6 fueron de la autoría de ciudadanos coahuilenses y únicamente 2 de esas 6 fueron tramitadas y culminaron con su aprobación.*

*Después, en la 60 Legislatura se recibieron 720 iniciativas, de las cuales 20 fueron catalogadas como populares, es decir, que fueron presentadas por ciudadanos y sólo 6 de ellas fueron aprobadas por los diputados locales.*

*En tanto, a lo que corresponde a la actual legislatura, el año pasado, hasta el mes de octubre, fueron presentadas 92 propuestas de Ley, de las cuales 6 tienen el carácter de populares. Hasta el momento, ninguna de ellas ha sido aprobada por los legisladores locales.*

*De las 32 iniciativas ciudadanas presentadas desde el 2012 hasta el mes de octubre del 2018, 8 han sido aprobadas y 24 permanecen en la congeladora legislativa sin dictamen.*

*En el año 2019 se ha presentado un alto índice de participación ciudadana, 47 iniciativas (contando la presente) bajo el concepto de populares, superando en 15 iniciativas a todas las que se presentaron en los últimos 7 años de ejercicio legislativo. Esto representa sin duda un alto índice de participación ciudadana en materia legislativa a nivel nacional.*

*Sin embargo, desde el punto de vista ciudadano, consideramos que las facultades que otorgan las diversas leyes, disposiciones y capítulos en el tema de la participación ciudadana, en específico en materia legislativa, si bien presenta un avance en esta materia, aun presenta un gran e importante “vacío”, el cual es no permitir a los ciudadanos que presentan iniciativas el derecho a hacer uso de la tribuna para exponer su proyecto a la legislatura y que este sea aprobado o rechazado por el pleno, esta acción constituiría un importante y considerable logro, no solo a nivel nacional, sino internacional, aumentando los niveles considerablemente en democracia participativa y en participación ciudadana; Sin mencionar la agilidad que se le daría al congreso en cuestión de documentos y papelería recibida, se lograría desahogar los trabajos y asuntos en comisiones, optimizando el aparato legislativo en todas sus áreas, al igual que los grandes ahorros que se presentarían por llevar acabo esta proposición.*

*El abrir la tribuna a la ciudadanía implicaría un acto importante en tema de empoderamiento de la participación ciudadana generando optimización en los asuntos legislativos.*

*Agradezco su tiempo, comprensión y dedicación a esta propuesta, de igual manera quedo a su disposición y en espera de retroalimentación.*

**TERCERO.-** Quienes integramos la presente Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia efectuamos el estudio y análisis del proyecto de reforma y de las consideraciones que motivan al mismo, verificándose que ésta persigue la finalidad de establecer en la Ley de Participación ciudadana, con respecto al trámite de las iniciativas populares, el derecho de los ciudadanos de exponer su iniciativa en tribuna.

Así, se observa que el promovente plantea la modificación en los términos siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA El ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.** | |
| **ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.** Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:  I. Presentarse por escrito.  II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.  III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.  IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.  V. Nombre y firma de quien la presenta.  El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular. | 5.- ARTÍCULO 42.- LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR. Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:  I...  II…  III…  IV…  V. SEÑALAR SI EL PROPONENTE DESEA HACER USO DE SU DERECHO DE PRESENTAR LA INICIATIVA EN TRIBUNA FRENTE A LA LEGISLATURA.  Y  VI.. |
| ARTÍCULO 43. EL TRÁMITE PARA DECIDIR LA PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA LEGISLATIVA. Toda iniciativa popular en materia legislativa que se presente ante el Poder Legislativo del Estado, se sujetará al trámite legislativo siguiente:  I. El Congreso del Estado o, en su caso, la Diputación Permanente turnará la iniciativa a una comisión que se integrará con siete diputados.  El funcionamiento de la comisión se regirá por la Ley Orgánica del Congreso del Estado.  II. La comisión resolverá sobre la procedencia de la iniciativa, bajo las reglas siguientes:  1. Verificará que la iniciativa cumpla con los requisitos previstos en el artículo anterior.  2. En caso de que falte alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, se notificará al solicitante para que en un plazo no mayor de quince días hábiles presente la información requerida.  3. Una vez cumplidos los requisitos necesarios para la iniciativa popular, la comisión resolverá, en su caso, sobre la procedencia de la misma.  4. Si el solicitante no cumple con lo previsto en el numeral 2 de esta fracción, la comisión declarará la improcedencia de plano en los términos previstos por la ley.  5. La comisión notificará al solicitante o, en su caso, a su representante la resolución sobre la procedencia o improcedencia de la iniciativa popular.  6. La iniciativa que se declare procedente se sujetará al proceso legislativo que establece la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Congreso del Estado.  7. En la discusión de la iniciativa, podrán participar con voz hasta tres personas autorizadas por los solicitantes ciudadanos.  III. Toda omisión, acto o resolución del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente que viole el trámite de la iniciativa popular, podrá ser impugnada en los términos de la ley de la materia.  IV. (DEROGADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2008) | 6.- ARTÍCULO 43. EL TRÁMITE PARA DECIDIR LA PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA LEGISLATIVA. Toda iniciativa popular en materia legislativa que se presente ante el Poder Legislativo del Estado, se sujetará al trámite legislativo siguiente:  I…  II. La comisión resolverá sobre la procedencia de la iniciativa, bajo las reglas siguientes:  Del 1…. al 6...  7. En la discusión de la iniciativa, podrán participar con voz hasta tres personas autorizadas por los solicitantes ciudadanos.  EXCEPTO, CUANDO LA DISCUSIÓN SE LLEVE A CABO EN RIBUNA FRENTE A LA LEGISLATURA, PARA ESTE CASO SOLO PODRÁ PARTICIPAR CON VOZ UNA PERSONA. EL PROMOVENTE HARÁ USO DE LA TRIBUNA PARA DAR A CONOCER Y EXPLICAR A LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA, LOS MOTIVOS, EL SENTIDO Y LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA INICIATIVA, CON LA FINALIDAD DE SER DICTAMINADA POR EL PLENO. PARA LA PROCEDENCIA, LAS Y LOS DIPUTADOS DEBERÁN VOTAR SI SE ACEPTA LA DEMANDA DEL PROPONENTE PARA HCER USO DE LA TRIBUNA.  III…  IV… |

En este sentido el iniciador estima que *“las facultades que otorgan las diversas leyes, disposiciones y capítulos en el tema de la participación ciudadana, en específico en materia legislativa, si bien presenta un avance en esta materia, aun presenta un gran e importante “vacío”, el cual es no permitir a los ciudadanos que presentan iniciativas el derecho a hacer uso de la tribuna para exponer su proyecto a la legislatura y que este sea aprobado o rechazado por el pleno”* y que considera que *“esta acción constituiría un importante y considerable logro, no solo a nivel nacional, sino internacional, aumentando los niveles considerablemente en democracia participativa y en participación ciudadana”.*

Una vez analizado el objeto y contenido de la propuesta normativa, esta dictaminadora estima necesario, hacer una serie de consideraciones previas a pronunciarse por la procedencia de la iniciativa.

En este orden de ideas, debemos partir de los postulados contenidos en el artículo 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señalan que:

**“*Artículo 41.*** *Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.*

***“Artículo 41.*** *El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal (…)”.*

Así, podemos notar como los principios de representación, pluralismo y división de poderes surgen con la democracia representativa.

A lo largo de nuestra historia democrática se ha ido fortaleciendo la democracia directa, a través de diversos mecanismos como el plebiscito, el referendo, la consulta popular y la iniciativa popular, y en forma aún más reciente la revocación del mandato. No obstante los múltiples beneficios que traen consigo los mecanismos referidos, es importante dejar en claro que para que puedan implementarse es necesario que los mismos se ajusten a las bases y límites constitucionales.

En este orden de ideas, debemos señalar, que el constituyente al diseñar la forma de gobierno y al establecer la cláusula de división de poderes, diseñó el andamiaje de nuestro país, garantizando un sistema de pesos y contrapesos, en el que se limitara el poder de la autoridad y se asegurara el respeto de las libertades individuales y colectivas.

Parte de ese diseño normativo consistió en fijar las facultades de cada Poder con suma claridad y de acuerdo a las características de las funciones propias prohibiéndose que estas facultades pudieran reunirse en una misma persona.

Así observamos un Poder Ejecutivo unipersonal encargado de dirigir, coordinar, planificar y ejecutar las acciones de gobierno, un Poder Judicial al que le compete la administración de la justicia y un poder legislativo colegiado a cargo del desarrollo de la tarea legislativa y del control de la acción del ejecutivo, y la fiscalización.

En particular, dado el tema de estudio en este dictamen nos abocaremos al caso del Poder Legislativo.

En nuestro régimen, cobran especial importancia los principios de pluralismo y división de poderes, desde la teoría de la representación, el parlamento representa no solo a quien le ha votado, sino al cuerpo electoral en su conjunto. Por eso las decisiones del parlamento se atribuyen al pueblo soberano. Para que ello sea posible es necesario que las cámaras actúen como órganos colegiados mediante los procesos recogidos en las normas reglamentarias, en los que los miembros de la asamblea expresan su opinión en la formación paulatina del acto parlamentario.

En este sentido, la teoría refiere que solo los parlamentos son capaces de expresar las distintas opciones ideológicas, ya que la pluralidad de opiniones políticas encuentra su acomodo en la asamblea.

Así, el ejercicio de las funciones que la Constitución le atribuye al Poder legislativo parte del reconocimiento del pluralismo y constituye el vehículo para que las diferentes ideologías puedan expresarse.

Los miembros de las asambleas son titulares de una serie de facultades dotadas de carácter instrumental para el ejercicio de su función legislativa, conocidas como garantías de las facultades parlamentarias.

Estas atribuciones les permiten **formar su opinión y divulgarla libremente**, concretar su parecer en actuaciones que impulsen la actividad ante la cámara o expresarlo en la toma de decisiones en la forma de voto.

Estas facultades, componen el núcleo esencial del estatus parlamentario, adquieren su máxima trascendencia para el ordenamiento cuando se ejercitan en el proceso de elaboración de una ley.

Algunos autores consideran que las referidas facultades quedan comprendidas dentro del derecho a acceder a cargos públicos al ser medios oportunos para verificar el principio democrático en el parlamento, el Tribunal Constitucional Español las considera dentro del estatus constitucional del parlamentario, al formar parte de las atribuciones que tienen relación directa con el ejercicio de las potestades legislativas.

Si observamos el contenido de las disposiciones constitucionales y legales en relación a las facultades legislativas y sus garantías para ejercerlas encontramos los artículos 67 de la Constitución Local y 21 de la Ley Orgánica del Congreso.

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza

***Artículo 67.*** *Son atribuciones del Poder Legislativo:*

*(REFORMADA, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)*

***I.*** *Expedir, reformar, derogar y abrogar leyes y decretos, en todo lo concerniente al Poder Público del Estado.*

***II.*** *Iniciar ante el Congreso General las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como la reforma o derogación de unas y otros; y secundar, cuando lo estime conveniente, las iniciativas hechas por las Legislaturas de los otros Estados.*

***III.*** *Reclamar ante el Congreso de la Unión cuando alguna ley general constituya un ataque a la Soberanía o Independencia del Estado o a la Constitución Federal*

*(REFORMADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)*

***IV.*** *Adicionar y reformar esta Constitución en los términos que la misma prescribe.*

*(REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADA, P.O. 2 DE AGOSTO DE 2007)*

***V.*** *Designar a los integrantes del organismo público autónomo a que se refiere la fracción VII del artículo 7º de esta Constitución, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, en los términos y conforme al procedimiento que disponga la ley.*

***VI.*** *Facultar al Ejecutivo del Estado para que por sí o por medio de una comisión, celebre arreglos con los Estados vecinos sobre sus límites territoriales; reservándose el mismo Congreso la Facultad de aprobar o no dichos convenios, los que en el primer caso, serán sometidos al Congreso de la Unión, para los efectos que establece la Constitución General.*

*(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)*

***VII.*** *Ratificar o no, la erección de nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

***VIII.*** *Dictar leyes conducentes a combatir en el Estado, el alcoholismo, la vagancia y el juego.*

*(REFORMADA, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)*

***IX.*** *Expedir, reformar, derogar y abrogar leyes y decretos en materia municipal, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, con sujeción a los cuales los Ayuntamientos deberán aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.*

*El objeto de las leyes o decretos a que se refiere el párrafo anterior será establecer:*

***a)*** *Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de imparcialidad, igualdad, publicidad, inmediatez, gratuidad, audiencia y legalidad;*

***b)*** *Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento;*

***c)*** *Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esa Constitución;*

***d)*** *El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, el Congreso del Estado considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y*

***e)*** *Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.*

*(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)*

***X.*** *Conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales del Estado.*

*(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 1992)*

***XI.*** *Suspender ayuntamientos; declarar que estos han desaparecido; suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros; designar concejos municipales en aquellos casos en que proceda y a quienes deban suplir las ausencias temporales o absolutas de alguno de los miembros del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta Constitución y en los demás ordenamientos aplicables.*

*(REFORMADA, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)*

***XII.*** *Fijar el territorio que corresponda a los Municipios; arreglar sus límites y, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, modificar la extensión de los mismos, suprimirlos y crear otros, cuando así lo exija el buen servicio público; asimismo otorgar su aprobación para la celebración de convenios de coordinación o asociación de los Municipios del Estado con los Municipios de otros Estados de la República, para la más eficaz prestación de los servicios públicos municipales o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponden.*

***XIII.*** *Cambiar provisionalmente la residencia de los Poderes del Estado por la misma mayoría que exige la fracción anterior, en los términos de esta Constitución.*

*(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)*

***XIV.*** *Establecer, mediante una ley, las bases conforme a las cuales el Estado, los Municipios y las entidades paraestatales y paramunicipales, podrán contraer obligaciones y empréstitos, así como autorizar los conceptos y montos de los mismos, con observancia de lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

*(REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)*

***XV.*** *Recibir para su conocimiento las declaratorias de validez de las elecciones de gobernador, diputados y miembros de los Ayuntamientos, que emita el Instituto Electoral de Coahuila.*

*(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)*

***XVI.*** *Erigirse en Colegio Electoral, para elegir al ciudadano que deba sustituir al Gobernador del Estado, en los términos de los artículos 78 y 79 de esta Constitución.*

*(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADA, P.O. 25 DE MAYO DE 2007)*

***XVII.*** *Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que les someta el Gobernador del Estado, en los términos de esta Constitución y las leyes.*

*Igualmente, integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la Estado; nombrar a dicho servidor público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo del Estado, en los términos y conforme al procedimiento establecido en esta Constitución y leyes aplicables.*

*(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADA, P.O. 25 DE MAYO DE 2007)*

***XVIII.*** *Conocer de las renuncias y de las licencias de los diputados, del Gobernador, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como de los miembros de los Ayuntamientos y Concejos Municipales.*

*(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)*

***XIX.*** *Otorgar licencia para separarse temporalmente de sus cargos, a los servidores públicos a que se refiere la fracción anterior.*

*(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)*

***XX.*** *Nombrar comisiones permanentes y especiales, para el estudio de los proyectos de leyes y decretos, así como para atender asuntos de su competencia y de interés público Estatal y Municipal.*

*(REFORMADA, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)*

***XXI.*** *Conceder o negar permiso a los diputados para desempeñar algún empleo, cargo o comisión federal, estatal y municipal, de conformidad con el artículo 43 de esta Constitución;*

*(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)*

***XXII.*** *Recibir la protesta de Ley a los Diputados, al Fiscal General del Estado, al Gobernador y a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.*

*(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 1992)*

***XXIII.*** *Designar al Presidente y Consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila; en la forma que determine la ley.*

*(REFORMADA, P.O. 10 DE FEBRERO DE 1998)*

***XXIV.*** *Elaborar y aprobar su propio presupuesto de egresos, así como rendir su cuenta pública en los términos de ley.*

*(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)*

***XXV.*** *Conceder carta de ciudadanía y la calidad de Coahuilenses, a quienes fueren merecedores de ello; otorgar premios y recompensas a los que hayan prestado servicios de importancia a la humanidad, al País o al Estado; y declarar beneméritos a los que se hayan distinguido por servicios eminentes prestados al mismo Estado.*

***XXVI.*** *Rehabilitar, con arreglo a las leyes, a los que por sentencia pronunciada en el Estado hayan perdido los derechos de ciudadanía, civiles o de familia.*

***XXVII.*** *Declarar suspenso a un ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos, por resistirse a servir los cargos de elección popular sin causa justificada.*

*(REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)*

***XXVIII.*** *Expedir la ley que organice al Ministerio Público y sus auxiliares.*

*(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)*

***XXIX.*** *Erigirse en Jurado de Sentencia para conocer un juicio político de aquellas faltas u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, imputadas a los servidores públicos a que se refiere el artículo 163 de esta Constitución.*

*(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2006)*

***XXX.*** *Expedir las normas para la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, en los términos que establece esta Constitución y las leyes.*

*(REFORMADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)*

***XXXI.*** *A petición de más de la mitad de sus miembros, integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los Municipios, los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Gobernador.*

*(REFORMADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)*

***XXXII.*** *Expedir las Leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno del Estado y los Municipios, en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico.*

*(REFORMADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2015) (REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2014)*

***XXXIII.*** *Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, los cuales deben estar armonizados con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, discutiendo primero los ingresos que deben decretarse para cubrir el ejercicio presupuestal, tomando en cuenta, entre otros elementos, los informes de la entidad de fiscalización superior.*

*El Congreso deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos del Estado, las partidas necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores y pagaderos en dicho ejercicio:*

***a)*** *Que constituyan deuda pública del Estado o de las entidades paraestatales que cuenta con la garantía del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, y:*

***b)*** *Que se deriven de contratos para proyectos para prestación de servicios aprobados por el Congreso conforme a las leyes aplicables.*

*Asimismo, examinar, discutir y aprobar anualmente las leyes de ingresos de los Municipios, tomando en cuenta, entre otros elementos, los informes de la entidad de fiscalización superior, así como determinar, también anualmente, las bases, montos y plazos que habrán de observarse conforme a los principios que establece el artículo 158-T de esta Constitución, para que los Municipios reciban de inmediato y sin demora las participaciones y aportaciones federales o estatales que les correspondan.*

*En el caso de no aprobarse la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán en vigor las del año inmediato anterior, con las actualizaciones que sean pertinentes de acuerdo al índice de precios al consumidor.*

*Las leyes garantizarán la gratuidad de la información pública bajo el principio de disponibilidad presupuestal, sin perjuicio de los derechos o cuotas proporcionales, equitativas y mínimas por la reproducción, gastos de envío, servicio o trámite público, conforme a las leyes fiscales.*

*(REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2014)*

***XXXIV.*** *Revisar, por conducto de la entidad de fiscalización superior denominada Auditoría Superior del Estado, en los términos previstos en las leyes, la gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, Municipios, organismos públicos autónomos, entidades paraestatales, paramunicipales, mandatos, fondos, fideicomisos y de cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que gestione recursos públicos, con objeto de conocer sus resultados y comprobar si se han ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos, según corresponda y a su presupuesto de egresos y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas.*

*(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 27 DE MAYO DE 2016)*

*Las cuentas públicas serán entregadas al Congreso a más tardar el treinta de abril del año siguiente al ejercicio correspondiente. Solo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del titular del Ejecutivo del Estado, suficientemente justificada a juicio de la legislatura local.*

*(REFORMADO, P.O. 27 DE MAYO DE 2016)*

*El Congreso concluirá la revisión de las cuentas públicas en un periodo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que reciba el Informe Anual de Resultados por parte de la Auditoría Superior del Estado, emitiendo el dictamen correspondiente con base en el análisis de su contenido, en las conclusiones técnicas del mismo y, en su caso, en la glosa, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en la ley de la materia.*

*(ADICIONADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)*

*Si del examen que realice la Auditoría Superior del Estado aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En caso de la revisión en cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos en los términos de la Ley.*

*(ADICIONADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)*

*El Congreso del Estado evaluará el desempeño de la Auditoría Superior del Estado y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.*

*(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 1992)*

***XXXV.*** *Autorizar a la Diputación Permanente para que resuelva aquellos asuntos que se presenten durante su funcionamiento y que no requieran la intervención directa del Congreso.*

***XXXVI.*** *Formar un Reglamento Interior y acordar las providencias para hacer concurrir a los diputados ausentes.*

*(REFORMADA, P.O. 22 DE JUNIO DE 2007)*

***XXXVII.*** *Nombrar y remover a los servidores públicos de la Oficialía Mayor y la Tesorería.*

*(REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2014)*

***XXXVIII.*** *Expedir leyes en materia de fiscalización superior y rendición de cuentas.*

***XXXIX.*** *Velar por la observancia de la Constitución y las leyes.*

*(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)*

*Con este propósito, emitirá la ley reglamentaria que regule la justicia constitucional local a que se refiere el artículo 158 de esta Constitución.*

*(ADICIONADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)*

***XL.*** *Solicitar informes al Ejecutivo del Estado y al Supremo Tribunal de Justicia sobre asuntos de su competencia, cuando lo estime conveniente para el mejor ejercicio de sus funciones.*

*(ADICIONADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)*

***XLI.*** *Expedir leyes sobre planeación del desarrollo económico y social del Estado, así como para el fomento de las actividades económicas.*

*(ADICIONADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)*

***XLII.*** *Autorizar que se constituyan en el Estado, bajo su vigilancia y amparo, asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y asociaciones o sociedades cooperativas de productores, que en defensa de sus intereses o del interés general, se propongan vender directamente en mercados extranjeros, productos que sean la principal fuente de riqueza de la región, o que no sean artículos de primera necesidad.*

*Asimismo, por sí o a propuesta del Ejecutivo y cuando así lo exijan las necesidades públicas, derogar las autorizaciones concedidas para la formación de dichas asociaciones.*

*(ADICIONADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)*

***XLIII.*** *Determinar los servicios públicos que, además de los expresamente consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con sus condiciones territoriales y socioeconómicas y su capacidad administrativa y financiera, podrán tener a su cargo los Municipios de la Entidad.*

*(ADICIONADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)*

***XLIV.*** *Expedir, con base en lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias, Leyes que rijan las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores y entre los Municipios y quienes laboran a su servicio.*

*(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (ADICIONADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)*

***XLV.*** *Expedir la ley sobre el Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes generales aplicables.*

*(REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2006)*

***XLVI.*** *Solicitar la protección de los Poderes de la Unión, en los casos y términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

*(REFORMADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)*

***XLVII.*** *Expedir las Leyes y Acuerdos indispensables para hacer efectivas las facultades que anteceden y todas las demás que le confieren esta Constitución y la General de la República.*

*(REFORMADA, P.O. 22 DE JUNIO DE 2007)*

***XLVIII.*** *Designar al Auditor Superior del Estado, y*

*(ADICIONADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2012)*

***XLIX.*** *Ordenar la comparecencia en los términos que la ley señale, de las autoridades o servidores públicos que hayan desestimado las recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila a fin de que funden y motiven su rechazo; y*

*(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2014)*

***L.*** *Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior del Estado, en los términos que disponga la ley.*

*(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (ADICIONADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2014)*

***LI.*** *Ratificar, a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, que designe el Gobernador del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.*

*(ADICIONADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)*

***LII.*** *Ratificar el nombramiento del titular de la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo del Estado y entidades estatales y designar con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes a los de Organismos Públicos Autónomos.*

*(ADICIONADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)*

***LIII.*** *Nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción en los términos de esta Constitución.*

*(ADICIONADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)*

***LIV.*** *Las demás que le confieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los demás ordenamientos legales.*

*(ADICIONADO, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2019)*

*De conformidad a lo que disponga su ley orgánica, el Congreso del Estado, tratándose de expedición, abrogación o reformas de leyes o decretos en materia municipal, deberá notificarlo a los Ayuntamientos.*

**Ley Orgánica del Congreso**

***ARTÍCULO 17.-*** *Los derechos y prerrogativas de las y los Diputados serán vigentes desde el momento en que rindan la protesta de Ley y hasta que concluyan su período constitucional.*

*Los derechos y prerrogativas se suspenden en los casos de licencia o falta absoluta.*

*Independientemente de que su elección haya sido bajo el principio de mayoría relativa o bajo el principio de representación proporcional, tendrán la misma categoría e iguales derechos y obligaciones.*

***ARTÍCULO 21.-*** *Son derechos de las Diputadas y los Diputados, en los términos de la presente Ley:*

***I.*** *Elegir y ser electos para integrar la Mesa Directiva del Pleno y la Diputación Permanente, así como de las Comisiones Ordinarias y Extraordinarias y Comités del Congreso del Estado;*

***II.*** *Ser integrantes de cuando menos una comisión o comité, pudiendo formar parte de más, sin que esta participación pueda exceder de cinco casos entre comisiones permanentes y comités;*

*Excepcionalmente, podrán formar parte de más comisiones o comités de los señalados en el párrafo anterior, cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno, tomando en consideración la proporcionalidad del número de integrantes de los grupos parlamentarios y partidos políticos representados en el Congreso, procurando en todo momento observar el principio de paridad de género.*

*También podrán asistir con voz pero sin voto a las sesiones de las comisiones o comités de las que no formen parte.*

***III.*** *Formar parte de un Grupo Parlamentario;*

***IV.*** *Iniciar Leyes y Decretos ante el H. Congreso del Estado* ***e intervenir en las discusiones******y votaciones de los mismos****, conforme a lo establecido por la presente Ley;*

***V.*** *Proponer al Pleno del H. Congreso del Estado la aprobación para la presentación de iniciativas de leyes y decretos ante el Congreso de la Unión;*

***VI.*** *Presentar ante el Pleno y Comisiones proposiciones y denuncias;*

***VII.*** *Gestionar ante las autoridades competentes la atención de las demandas de sus representados;*

***VIII.*** *Obtener designación por el Pleno, la Diputación Permanente o por la Comisión de Gobierno para representar al Congreso del Estado en los foros, consultas y reuniones nacionales e internacionales;*

***IX.***  *Orientar a las y los ciudadanos del Estado acerca de los medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus derechos individuales o sociales;*

***X.*** *Contar con los apoyos administrativos y de asesoría, dietas, asignaciones, prestaciones, franquicias y viáticos que les permitan desempeñar con eficacia y dignidad su encargo, los cuales se fijarán en el presupuesto de egresos del Congreso del Estado y conforme a la posibilidad financiera del mismo;*

***XI.*** *Solicitar al Pleno Legislativo licencia para separarse temporalmente del cargo; y*

***XII.*** *Acceder a todos los documentos del Congreso del Estado, a las cuentas públicas de los sujetos obligados y a toda la información financiera que se presente ante la legislatura, sus comisiones y comités, sin restricción alguna, con excepción de aquella información en la que se deba guardar la debida reserva de acuerdo a los casos en que así lo disponga la Ley de Acceso a la Información pública y Protección de datos Personales o así lo haya determinado mediante el acuerdo de reserva correspondiente la autoridad competente y en su caso por así determinarlo la mesa directiva del congreso.*

De las disposiciones señaladas podemos observar que el derecho de intervenir en las discusiones de iniciativas, proposiciones y pronunciamientos, es una garantía esencial para el desarrollo de la función legislativa, y por lo tanto un derecho de los legisladores.

En este sentido, si bien la facultad de iniciar leyes no es exclusiva de las y los diputados confiriéndose esta facultad a otros Poderes, órganos dotados de autonomía constitucional, Ayuntamientos y ciudadanos, ello de ninguna forma se traduce en conferir a estos sujetos otros derechos íntimamente relacionados con la función legislativa.

Como se ha señalado anteriormente, las reglas del procedimiento legislativo están diseñadas para permitir el desarrollo de las funciones de los legisladores tomando en consideración las características de un parlamento, así se aprecia que en ningún caso se permite que agentes distintos a los legisladores participen en las discusiones que se susciten en el Pleno con respecto a iniciativas o proposiciones.

En este contexto la adición de la porción normativa “***EXCEPTO, CUANDO LA DISCUSIÓN SE LLEVE A CABO EN TRIBUNA FRENTE A LA LEGISLATURA, PARA ESTE CASO SOLO PODRÁ PARTICIPAR CON VOZ UNA PERSONA. EL PROMOVENTE HARÁ USO DE LA TRIBUNA PARA DAR A CONOCER Y EXPLICAR A LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA, LOS MOTIVOS, EL SENTIDO Y LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA INICIATIVA, CON LA FINALIDAD DE SER DICTAMINADA POR EL PLENO.*** PARA LA PROCEDENCIA, LAS Y LOS DIPUTADOS DEBERÁN VOTAR SI SE ACEPTA LA DEMANDA DEL PROPONENTE PARA HACER USO DE LA TRIBUNA”, no resulta congruente con las bases y principios constitucionales de representación, división de poderes y pluralismo. No obstante ello, el derecho del ciudadano de exponer los aspectos relevantes de su iniciativa esta salvaguardado en la propia Ley de Participación Ciudadana en el momento procesal correspondiente al estudio, discusión y dictamen de las comisiones legislativas.

Aunado lo anterior, se observa una serie de inconsistencias en los vocablos utilizados como es el caso de la frase “cuando la discusión se lleve a cabo en tribuna frente a la legislatura” en la cual estimamos lo correcto debería ser utilizar la palabra “pleno”; tampoco resulta oportuno referir que ello es con la “finalidad de ser dictaminada por el Pleno” ya que el dictamen está a cargo de órganos legislativos distintos al pleno denominados comisiones.

Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Se considera no procedente la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual plantea una reforma a los artículos 42 y 43 a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, relativa al uso de la tribuna por parte de ciudadanos, planteada por el C. Ingeniero Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**SEGUNDO.-** Archívese el expediente correspondiente como asunto concluido.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual crea el Capitulo Segundo Bis. Denominado "LESIONES CONTRA LA MUJER POR RAZÓN DE GÉNERO", del Título Primero denominado "Delitos Contra la Vida", al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 04 de diciembredel año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 10 del mes diciembre del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia la iniciativa Popular mediante la cual plantean una reforma al artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Quela iniciativa Popular con proyecto de decreto mediante la cual crea el Capitulo Segundo Bis. Denominado "LESIONES CONTRA LA MUJER POR RAZÓN DE GÉNERO", del Título Primero denominado "Delitos Contra la Vida", al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*El término violencia hacia la mujer, definido por la convención de Belem do Pará en 1994, es cualquier acción o conducta, basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado que constituye una violación a su dignidad y a sus derechos y al ejercicio en libertad de su existencia.*

*Debido a esto, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano en el sentido de promover, espetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional.*

*A su vez, el objetivo de desarrollo sostenible s (ODSS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo se busca “Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”, podemos ver en los datos que nos proporciona ONU Mujeres, que la violencia contra las mujeres y las niñas es generalizada en todos los países y regiones. A escala mundial, el 19%, o lo que es igual 1 de cada 5 mujeres, han experimentado violencia física o sexual a manos de su pareja intima en los últimos 12 meses.*

*En México, 66% de las mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física o sexual a lo largo de su vida. (ENDIREH 2016).*

*Siendo esta clase de violencia física o moral, un menosprecio de la mujer con quien se mantiene o ha mantenido una relación afectiva, tratando a ésta de forma degradante siendo golpeada, intimidada u obligada a hacer algo por el agresor por el mero hecho de·ser mujer, sino que además es vejada y tratada no como una persona, sino como un objeto o, en todo caso, con desprecio de su dignidad humana, y en la consideración de dicho agresor, por ser inferior a él.*

*Lo que más duele en estas circunstancias no es la coacción, el golpe o la amenaza, sino la humillación.*

*Asimismo, como antecedente, se señala que el comité CEDAW 2012, hizo también recomendaciones a México referentes a la violencia contra las mujeres, entre la que destaca:*

*Recomendación 19, inciso c): Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer.*

*En este tipo de lesiones, el agresor en la mayoría de los casos es un hombre y generalmente ligado sentimentalmente a la víctima. ESTE TIPO DE LESIONES TIENEN UN SOLO OBJETIVO DESFIGURARLAS, MUTILARTAS Y HUMILLARLAS.*

*Existen datos que señalan que el 80% de los casos son mujeres y que más del 66% no denuncian.*

*Los químicos como el ácido sulfúrico, clorhídrico y nítrico, son sustancias que además de ser empleadas en varias industrias, son utilizadas por particulares para cometer distintos delitos. lesiones graves, tentativa de homicidio o feminicidio, cuando se arrojan a mujeres, niñas y varones para desfigurarles y causar un intenso dolor; desaparición forzada, cuando se usan para disolver restos humanos; y delitos contra la salud, cuando se usan para la creación de drogas sintéticas, como las metanfetaminas.*

*Estos productos al contacto con la piel, provocan quemaduras profundas de tercer grado, perdida de piel, músculos y hasta parte de los huesos.*

*Algunas de las victimas pierden los ojos, los parpados y sufren un dolor inimaginable, o bien pierden la vida por la gravedad de las lesiones.*

*De acuerdo a testimonios de las victimas cuando les arrojaron ácido, su ropa, zapatos y sobre todo la piel se les deshicieron. Literalmente la piel se les cae. Lo alarmante es que este delito va creciendo, es una nueva forma de violencia hacia las mujeres.*

*En Países como Colombia incremento en años pasados contra mujeres han regulado o Inglaterra, donde observaron un en los ataques con ácido, especialmente su comercialización y su uso.*

*Por ello y considerando lo alarmante de los datos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde Coahuila se coloca en el Décimo tercer lugar en Feminicidios y Séptimo en violencia familiar, es que proponemos la iniciativa.*

*Por lo anterior y considerando que el Articulo 1, segundo y tercer párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

*Que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, reconoce que la Discriminación representa un obstáculo para el bienestar de las familias y de las sociedades, que a su vez entorpece las posibilidades de las mujeres para contribuir en el desarrollo de sus países y de la humanidad.*

*Que la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Belém do Pará”, en su artículo 1 se refiere a que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.*

**TERCERO.-** Quienes integramos la presente Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia efectuamos el estudio y análisis del proyecto de reforma y de las consideraciones que motivan al mismo, verificándose que ésta persigue la finalidad de establecer en el Código Penal tipos penales autónomos en relación a la conducta mediante la cual se infieran a la mujer lesiones por razón de su género.

En ese contexto se plantea la creación de un Capítulo compuesto por tres artículos, que consisten en lo siguiente:

***CAPITULO SEGUNDO BIS***

***“LESIONES CONTRA LA MUJER POR RAZÓN DE GÉNERO”***

***ARTÍCULO 188 BIS.-· AL QUE CAUSE LESIONES A UNA MUJER EN RAZÓN DE SU GÉNERO SE LE IMPONDRA DE SIETE A CATORCE AÑOS DE PRISION,***

***SE CONSIDERA QUE EXISTEN RAZONES DE GÉNERO, CUANDO CONCURRAN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:***

***I. QUE LAS LESIONES CAUSADAS SEAN INFAMANTES, DEGRADANTES O UNA MUTILACION; O***

***II. QUE PREVIO A LA LESIÓN INFLIGIDA EXISTAN DATOS QUE ESTABLEZCAN QUE SE HAN COMETIDO AMENAZAS, ACOSO O VIOLENCIA DEL SUJETO ACTIVO CONTRA LA VÍCTIMA.***

***SI ENTRE EL ACTIVO Y LA VÍCTIMA EXISTIÓ UNA RELACIÓN SENTIMENTAL AFECTIVA O DE CONFIANZA; DE PARENTESCO LABORAL, DOCENTE O CUALQUIERA QUE IMPLIQUE SUBORDINACIÓN O SUPERIORIDAD, Y SE ACREDITA QUE EN VIRTUD DE ESA RELACIÓN FUERON INFLIGIDAS LAS LESIONES INFAMANTES, DEGRADANES O MUTILACIONES, SE IMPONDRÁN DE NUEVE A DIECIOCHO AÑOS DE PRISIÓN.***

***ARTÍCULO 188 TER.- LAS PENAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR SE AUMENTARAN EN DOS TERCIOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:***

***I. CUANDO LAS LESIONES SEAN PROVOCADAS MEDIANTE EL EMPLEO DE ÁCIDOS O SUBSTANCIAS CORROSIVAS; O***

***II. CUANDO LAS LESIONES SEAN PROVOCADAS COMO RESULTADO DE UN PROCEDIMIENTO CONSISTENTE EN LA RESECCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS GENITALES EXTERNOS FEMENINOS O MAMAS, ASÍ COMO OTRAS LESIONES DE LOS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS POR MOTIVOS NO MÉDICOS*.**

En este sentido quienes dictaminamos, queremos enfatizar que para esta legislatura es una tarea primordial el llevar a cabo todas las medidas necesarias, dentro de nuestro ámbito de competencia, para erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.

En este contexto resalta que en 1992, el Comité de la CEDAW, en su Recomendación general Nº 19, declaró que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación por su condición y que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Esta violencia inhibe gravemente la capacidad de la mujer para disfrutar de los derechos y las libertades en plano de igualdad con los hombres.

Al respecto dicho Comité refirió que en el artículo 1 de la Convención se define la discriminación contra la mujer. En la cual se incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la **violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada**. **Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad.** La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones concretas de la Convención, independientemente de que en ellas se mencione expresamente a la violencia o no.

Así, la violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de convenios específicos de derechos humanos, constituye discriminación, tal como se entiende en el artículo 1 de la Convención. Estos derechos y libertades comprenden, entre otros:

a) el derecho a la vida;

b) el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

c) el derecho a la protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno;

d) el derecho a la libertad y la seguridad de las personas;

e) el derecho a la protección igual de la ley;

f) el derecho a la igualdad en la familia;

g) el derecho al nivel más alto posible de salud física y mental;

h) el derecho a condiciones de empleo justas y favorables.

En virtud de lo anterior, el Comité recomendó entre otras cosas que:

*a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia basada en el sexo, ejercida mediante actos públicos o privados.*

*b) Los Estados velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer proteja de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y dignidad.*

*…*

*r) Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia figuran las siguientes:*

*i) sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso de violencia en el hogar;*

*ii) legislación que elimine la defensa del honor como justificativo para atacar a las mujeres de la familia o atentar contra su vida;*

*iii) servicios para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia en la familia, incluidos refugios y programas de asesoramiento y rehabilitación;*

*iv) programas de rehabilitación para los culpables de violencia en el hogar;*

*v) servicios de apoyo para las familias en las que haya habido un caso de incesto o de abuso sexual.*

*s) Los Estados informen acerca del alcance de la violencia en el hogar y el abuso sexual y sobre las medidas preventivas, punitivas y correctivas que hayan adoptado.*

*t) Los Estados adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para prestar protección eficaz a las mujeres contra la violencia dirigida a ellas, incluidas entre otras:*

*i) medidas jurídicas eficaces, incluidas sanciones penales, recursos civiles y disposiciones de indemnización para proteger a la mujer contra todo tipo de violencia, incluida la violencia y los malos tratos en la familia, el ataque sexual y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo;*

*ii) medidas preventivas, incluidos programas de información pública y de educación para modificar las actitudes relativas a las funciones y la condición del hombre y de la mujer;*

*iii) medidas de protección, incluidos refugios, servicios de asesoramiento, rehabilitación y apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo.*

*u) Los Estados informen sobre todas las formas de violencia contra la mujer, e incluyan todos los datos de que dispongan acerca de la frecuencia de cada forma de violencia y de los efectos de esa violencia sobre las mujeres víctimas.*

*v) En los informes de los Estados se incluya información acerca de las medidas jurídicas, preventivas y de protección que se hayan adoptado para superar el problema de la violencia contra la mujer y acerca de la eficacia de esas medidas.*

En base a estos compromisos de carácter convencional y a los principios consignados en nuestra Constitución Local, como legisladores, hemos estado continuamente analizando y perfeccionando el marco jurídico para garantizar a las niñas y mujeres una vida libre de violencia.

En este contexto, nos congratulamos de que emanen por parte de la ciudadanía propuestas en torno a este tema, como es la iniciativa objeto del presente dictamen, en la que se propone tipificar distintas conductas relativas a infligir lesiones a las mujeres por razón de su género.

No obstante lo anterior, esta Comisión Legislativa observa que, el artículo 201 del Código Penal, vigente ya contempla las conductas que pretenden incorporarse, en el sentido siguiente:

***Artículo 201 (Lesiones calificadas)***

*Las lesiones dolosas serán calificadas cuando se cometan con una o más de las circunstancias previstas en el artículo 184 de este código.*

*Cuando respecto a la conducta lesiva concurran hasta tres circunstancias calificativas de las previstas en el artículo 184 de este código, se* ***aumentará en una mitad el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según las lesiones de que se trate conforme a dicho artículo 200.***

*Más si respecto a la conducta lesiva concurren más de tres circunstancias calificativas de las previstas en el artículo 184 de este código, se incrementará en tres cuartas partes el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según la lesión de que se trate conforme a dicho artículo 200.*

***También se considerarán lesiones calificadas las lesiones que se causen dolosamente lesiones a una mujer en razón de su género.***

***Se considera que existe razón de género cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:***

***1) Que previo a la lesión infringida, haya datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso o violencia del agresor en contra de la víctima siendo esta última de sexo femenino.***

***2) Si entre el agresor y la victima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o un grado de superioridad y, sea acreditado que en base a esa relación fueron infringidas las lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones.***

***3) Las lesiones se hayan infligido en zonas genitales.***

***Cuando respecto a la conducta lesiva concurran cualquiera de las circunstancias de las previstas el párrafo anterior, se aumentará en una mitad el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según las lesiones de que se trate conforme a dicho artículo 200.***

***Más si respecto a la conducta lesiva concurren una o más circunstancias de las previstas en el artículo 184 de este código con alguna de las previstas en el párrafo anterior, se incrementará en tres cuartas partes el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según la lesión de que se trate conforme a dicho artículo 200.***

*Se aumentará en una mitad del mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones, según las mismas de que se trate conforme al artículo 200 de este Código, a quien se las infiera a una persona adulta mayor de 60 años o más.*

Ante, tal circunstancia, la iniciativa planteada no se ajusta al parámetro de necesidad, al ya encontrarse previstas estas conductas en el ordenamiento vigente y contemplar incluso penalidades mayores a las contempladas en la propuesta.

Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Se considera no procedente la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual crea el Capitulo Segundo Bis. Denominado "LESIONES CONTRA LA MUJER POR RAZÓN DE GÉNERO", del Título Primero denominado "Delitos Contra la Vida", al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**SEGUNDO.-** Archívese el expediente correspondiente como asunto concluido.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante el cual se crea el Capítulo Tercero Ter. “**DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO**”, del Título Sexto de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Ingeniero Erick Rodrigo Valdez Rangel**;** y

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 04 de diciembre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 10 del mes diciembre del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante el cual se crea el Capítulo Tercero Ter. “**DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO**”, del Título Sexto de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Ingeniero Erick Rodrigo Valdez Rangel, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante el cual se crea el Capítulo Tercero Ter. “**DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO**”, del Título Sexto de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Ingeniero Erick Rodrigo Valdez Rangel, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*El debate sobre la participación ciudadana en el ejercicio y el control del gobierno constituye un terreno complejo y políticamente confuso en el México contemporáneo. Todos los actores políticos y sociales aceptan y reclaman la necesidad de la participación, pero cada actor le otorga significaciones diferentes.*

*La confusión se ha acentuado en tiempos recientes con la popularización de conceptos relacionados con la participación, como transparencia y rendición de cuentas. La matriz última de esta curiosa coincidencia discursiva nos remite a la lucha ideológica que desde la década de los ochenta han venido librando los dos principales proyectos políticos que se disputan hoy por hoy la hegemonía política e ideológica en América Latina: el neoliberal y el democrático-participativo, teniendo siempre como trasfondo cultural, tanto en un caso como en otro, los remanentes, más o menos vivos y actuantes en cada país, del proyecto autoritario.*

*Debe aclararse que la idea de proyectos remite a modelos típico -ideales, no a realidades concretas, las cuales son siempre hibridaciones complejas y con frecuencia contradictorias de principios y aspiraciones políticas.*

*Desde el otro proyecto político, que denominaremos democrático -participativo, la participación es vista como el eje de una práctica de la política que permite a los ciudadanos intervenir en los asuntos de interés colectivo a través de la creación de espacios públicos donde no sólo se debaten, sino que se deciden y vigilan, las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno.*

*Esta vertiente de la participación resume numerosos experimentos sociales en varias partes del mundo y se inspira en desarrollos recientes de la teoría democrática, ante todo las teorías de la sociedad civil, del espacio público, la democracia deliberativa y la propia democracia participativa*

*En México la limitada experiencia nacional en esta materia ha conducido a que se confunda la noción de participación ciudadana con las formas de democracia directa: referéndum, plebiscito e iniciativa popular. Indudablemente las formas de la democracia directa abren un espacio político a la expresión de las preferencias de la ciudadanía, pero todas ellas tienen un carácter excepcional, es decir, sólo pueden ser utilizadas en condiciones políticas muy específicas, de tal forma que rara vez pueden ser empleadas realmente, más aun, no dejan de ser ambivalentes en la medida que puedan ser utilizadas para fines de legitimación de gobiernos autoritarios o de líderes personalistas.*

*Equiparar la participación ciudadana con la democracia directa es un error conceptual que limita el horizonte político de la democracia.*

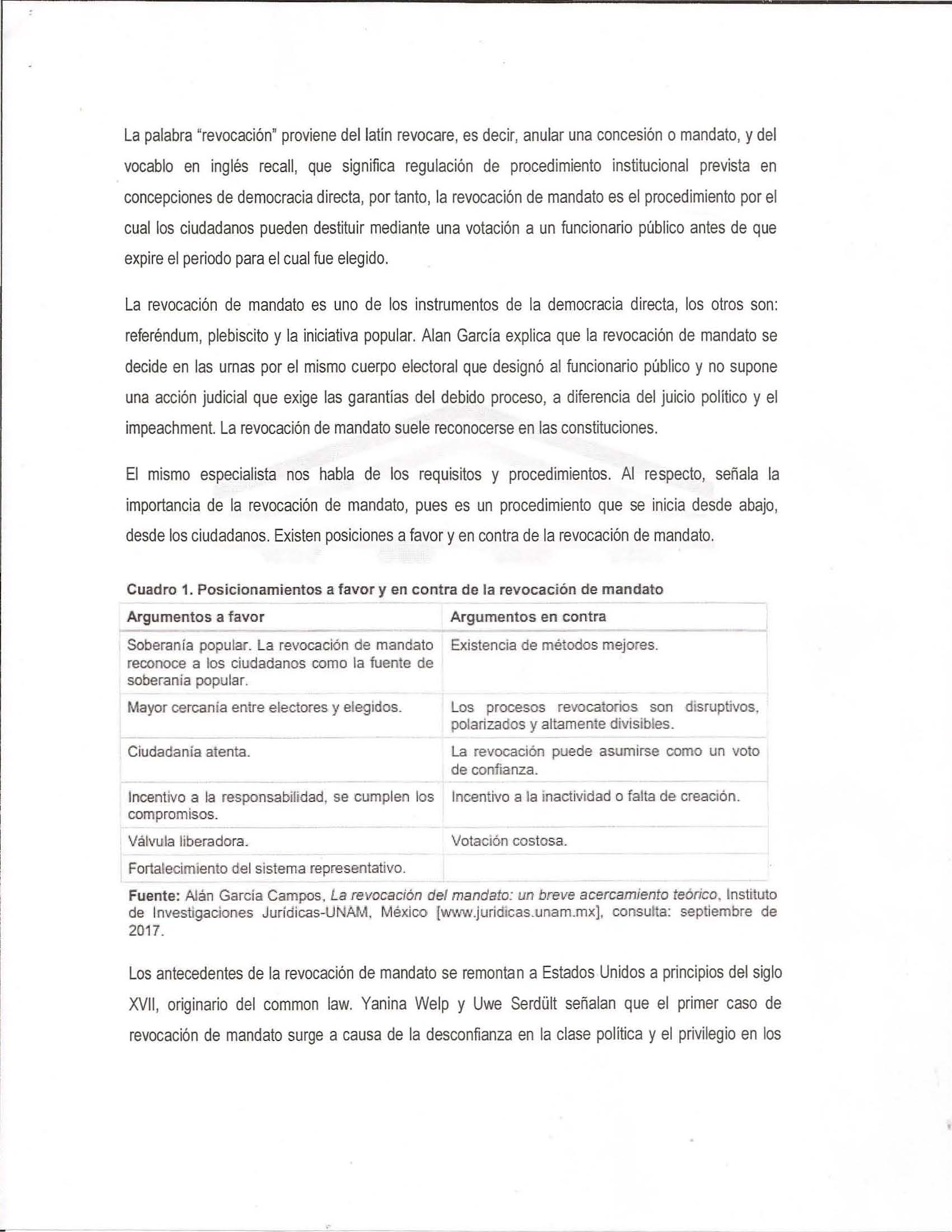
*En México la discusión sobre la participación está atrasada respecto de los debates latinoamericanos más relevantes. En realidad atestiguamos el predominio de una confusión conceptual y política, de manera que los actores civiles y políticos hablan de participación en un sentido meramente figurativo, es decir, como una alusión a muy diferentes procesos en marcha. No encontramos en el horizonte simbólico de los actores una idea clara acerca del papel de la participación en la democratización de la vida pública.*

*La notable ausencia en México de tradiciones participativas en el sentido de culturas y prácticas que impulsan la profundización de la democracia necesita ser explicada históricamente.*

*La palabra “revocación” proviene del latín revocare, es decir, anular una concesión o mandato, y del vocablo en inglés recall, que significa regulación de procedimiento institucional prevista en concepciones de democracia directa, por tanto, la revocación de mandato es el procedimiento por el cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido.*

*La revocación de mandato es uno de los instrumentos de la democracia directa, los otros son: referéndum, plebiscito y la iniciativa popular. Alan García explica que la revocación de mandato se decide en las urnas por el mismo cuerpo electoral que designó al funcionario público y no supone una acción judicial que exige las garantías del debido proceso, a diferencia del juicio político y el impeachment. La revocación de mandato suele reconocerse en las constituciones.*

*El mismo especialista nos habla de los requisitos y procedimientos. Al respecto, señala la importancia de la revocación de mandato, pues es un procedimiento que se inicia desde abajo, desde los ciudadanos. Existen posiciones a favor y en contra de la revocación de mandato.*

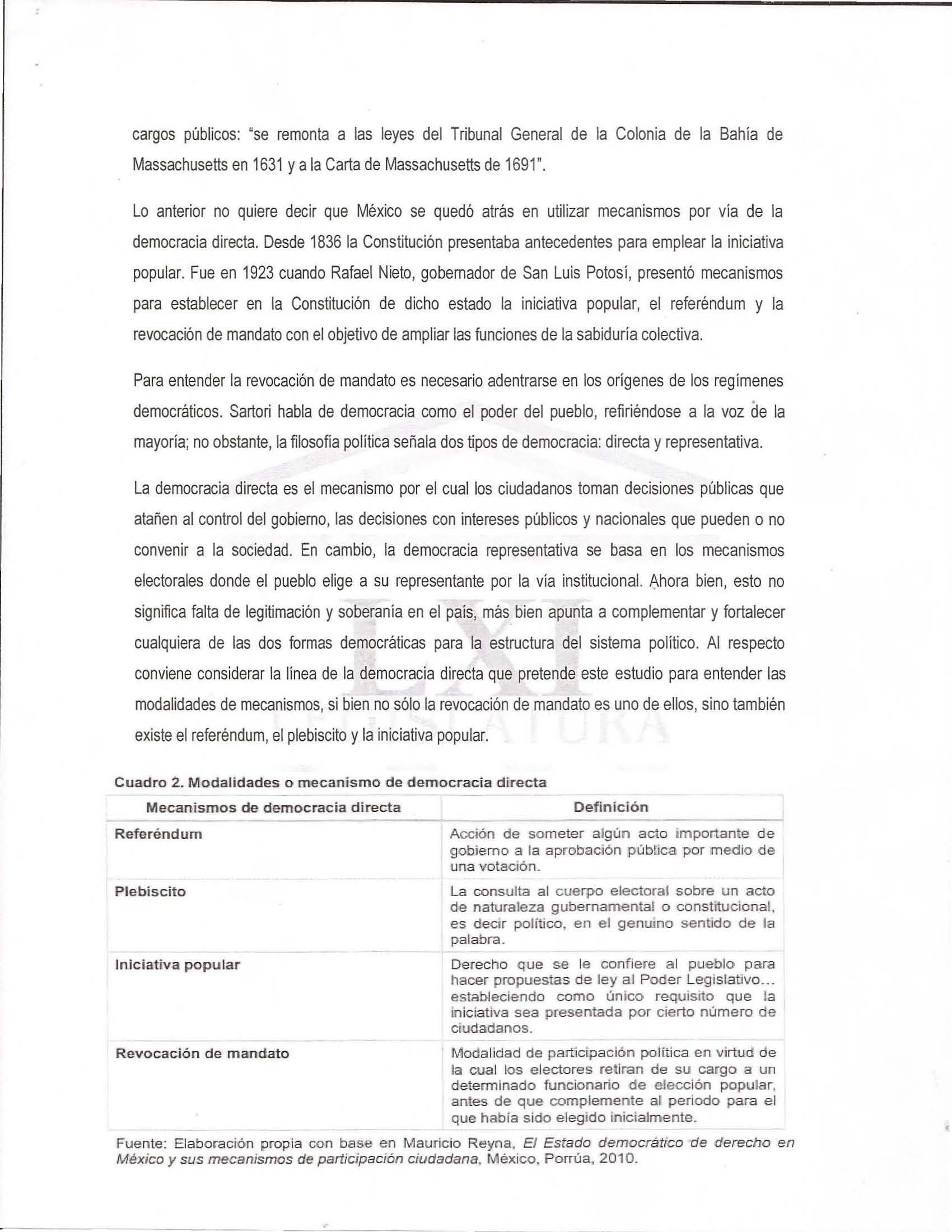
**

*Los antecedentes de la revocación de mandato se remontan a Estados Unidos a principios del siglo XVII, originario del common law. Yanina Welp y Uwe Serdült señalan que el primer caso de revocación de mandato surge a causa de la desconfianza en la clase política y el privilegio en los cargos públicos: “se remonta a las leyes del Tribunal General de la Colonia de la Bahia de Massachusetts en 1631 ya la Carta de Massachusetts de 1691”.*

*Lo anterior no quiere decir que México se quedó atrás en utilizar mecanismos por vía de la democracia directa. Desde 1836 la Constitución presentaba antecedentes para emplear la iniciativa popular. Fue en 1923 cuando Rafael Nieto, gobernador de San Luís Potosí, presentó mecanismos para establecer en la Constitución de dicho estado la iniciativa popular, el referéndum y la revocación de mandato con el objetivo de ampliar las funciones de la sabiduría colectiva.*

*Para entender la revocación de mandato es necesario adentrarse en los orígenes de los regímenes democráticos. Sartori habla de democracia como el poder del pueblo, refiriéndose a la voz de la mayoría; no obstante, la filosofía política señala dos tipos de democracia: directa y representativa.*

*La democracia directa es el mecanismo por el cual los ciudadanos toman decisiones públicas que atañen al control del gobierno, las decisiones con intereses públicos y nacionales que pueden o no convenir a la sociedad. En cambio, la democracia representativa se basa en los mecanismos electorales donde el pueblo elige a su representante por la vía institucional. Ahora bien, esto no significa falta de legitimación y soberanía en el país, más bien apunta a complementar y fortalecer cualquiera de las dos formas democráticas para la estructura del sistema político. Al respecto conviene considerar la línea de la democracia directa que pretende este estudio para entender las modalidades de mecanismos, si bien no sólo la revocación de mandato es uno de ellos, sino también existe el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.*

**

*La modernización en la política se concibe como la ocurrencia de cambios orientados hacia formas de organización libres y democráticas. La amplia consolidación de la democracia directa y de la participación ciudadana consolida mecanismos para defender a la sociedad e intervenir en la toma de decisiones públicas.*

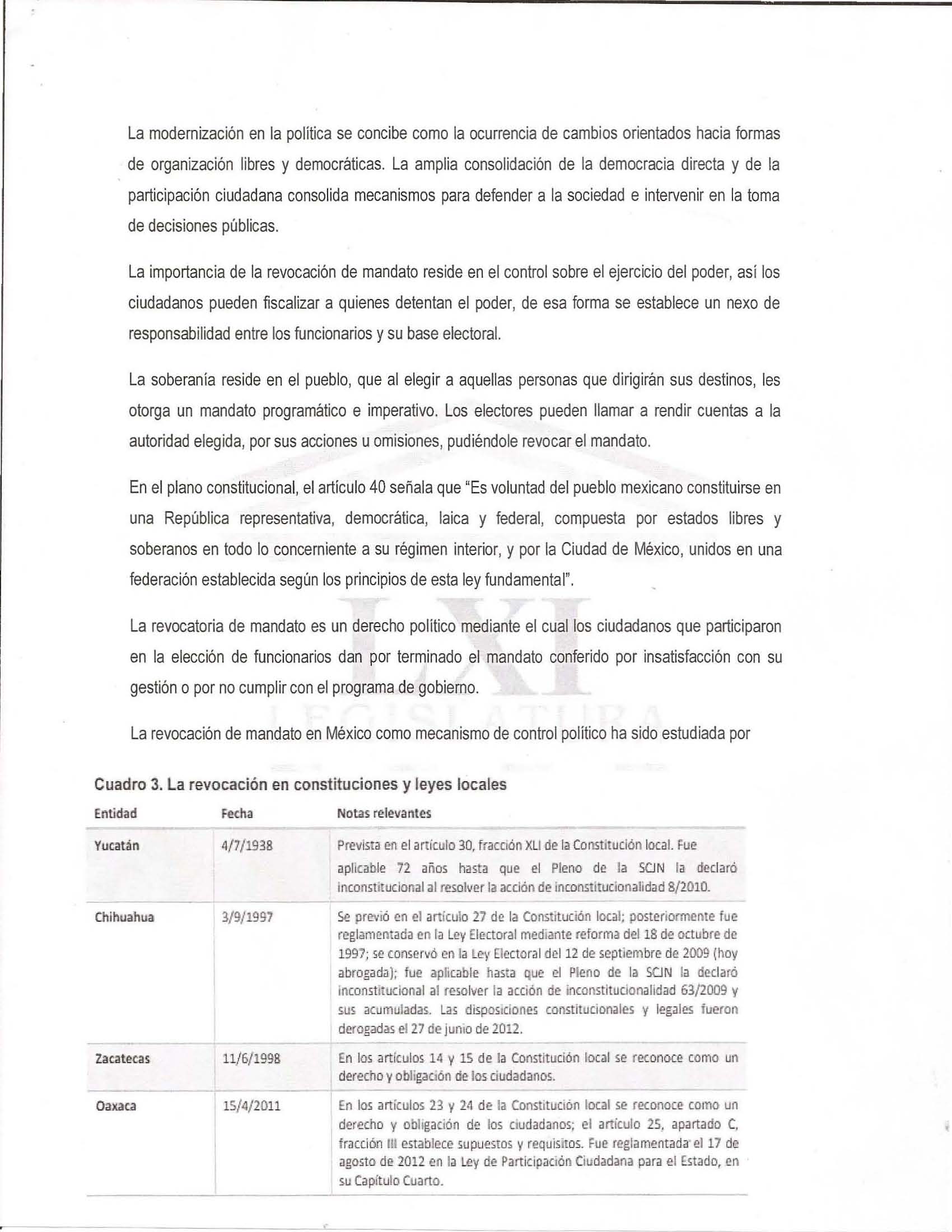
*La importancia de la revocación de mandato reside en el control sobre el ejercicio del poder, así los ciudadanos pueden fiscalizar a quienes detentan el poder, de esa forma se establece un nexo de responsabilidad entre los funcionarios y su base electoral.*

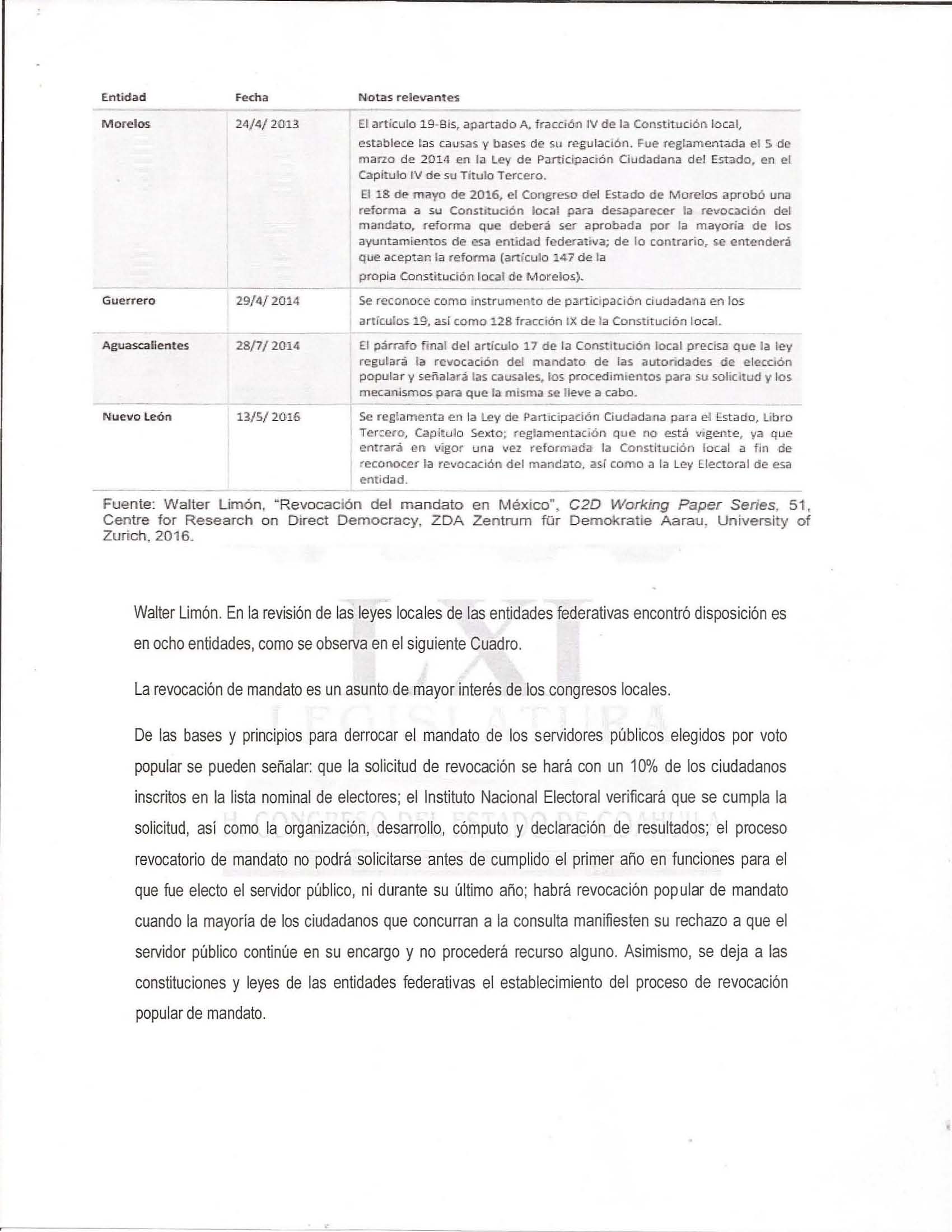
*La soberana reside en el pueblo, que al elegir a aquellas personas que dirigirán sus destinos, les otorga un mandato programático e imperativo. Los electores pueden llamar a rendir cuentas a la autoridad elegida, por sus acciones u omisiones, pudiéndole revocar el mandato. ´*

*En el plano constitucional, el artículo 40 señala que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.*

*La revocatoria de mandato es un derecho político mediante el cual los ciudadanos que participaron en la elección de funcionarios dan por terminado el mandato conferido por insatisfacción con su gestión o por no cumplir con el programa de gobierno.*

*La revocación de mandato en México como mecanismo de control político ha sido estudiada por*

**

**

*Walter Limón, En la revisión de las leyes locales de las entidades federativas encontró disposición es en ocho entidades, como se observa en el siguiente Cuadro,*

*La revocación de mandato es un asunto de mayor interés de los congresos locales,*

*De las bases y principios para derrocar el mandato de los servidores públicos elegidos por voto popular se pueden señalar: que la solicitud de revocación se hará con un 10% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores; el Instituto Nacional Electoral verificará que se cumpla la solicitud, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; el proceso revocatorio de mandato no podrá solicitarse antes de cumplido el primer año en funciones para el que fue electo el servidor público, ni durante su último año; habrá revocación popular de mandato cuando la mayoría de los ciudadanos que concurran a la consulta manifiesten su rechazo a que el servidor público continúe en su encargo y no procederá recurso alguno, Asimismo, se deja a las constituciones y leyes de las entidades federativas el establecimiento del proceso de revocación popular de mandato,*

*El Estado democrático moderno, se fortalece y consolida mediante el fortalecimiento del marco jurídico regulatorio para la implementación de los mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa popular y la revocación de mandato.*

*El ejercicio de esos mecanismos activa a la ciudadanía en la vigilancia del correcto ejercicio público de sus representantes populares o mandatarios, ya que la democracia participativa no debe limitarse al ejercicio del voto, sino también a vigilar el desempeño en de su función pública. Es la revocación del mandato, una figura al alcance de los ciudadanos, para que estos, determinen si el representante popular surgido del sufragio, es merecedor o no de la confianza ciudadana, y si debe o no continuar en el cargo.*

*La presente Iniciativa, tiene como objeto incorporar la revocación del mandato como un mecanismo de participación ciudadana, al alcance de los electores, para que mediante esta vía y conforme a los procedimientos que al efecto se establezcan, puedan determinar la separación del servidor público respectivo, del ejercicio del cargo que los propios electores le confirieron.*

*El objetivo de la revocación es que los votantes tengan un control permanente sobre los funcionarios públicos, como lo señala el ARTÍCULO 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.”*

*En este orden de ideas, si bien la democracia representativa que ha adoptado nuestro país, se ejerce a través de funcionarios, quienes se eligen periódicamente, pudiendo estimarse, que el día de los comicios el ciudadano, previa valoración de la gestión de gobierno, estará en condiciones de expresar su voluntad soberana, para lograr una verdadera democracia, en cuanto a la designación de los representantes populares y su eventual revocación de mandato, es necesario que en nuestro sistema jurídico se incluya y regule este tipo de participación directa, en la que a través del ejercicio de la soberanía popular el pueblo designe y remueva a quien ha dejado de abanderar los intereses de la colectividad, porque permitir que continúe en el cargo, puede acarrear como consecuencia, la inestabilidad política y social en casos extremos.*

*Por tanto, la revocación del mandato puede definirse como un mecanismo de democracia directa, mediante el cual los ciudadanos tienen el derecho para revocar del cargo a los servidores públicos surgidos del sufragio, que hayan incurrido en alguna de las causales previstas por la propia ley.*

*La revocación del mandato, es una figura ya prevista en la Constitución General de la República, desde la reforma municipal publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983. El artículo 115 establece la revocación del mandato como un procedimiento a través del cual, las legislaturas de los estados pueden separar de su cargo, a los miembros de los ayuntamientos cuando estos se coloquen en algunas de las causas graves establecidas por la propia legislación local. Por ello, más que un mecanismo de participación ciudadana está prevista como un procedimiento sancionatorio.*

*En el ámbito local, la revocación del mandato ha sido incorporada en diversas legislaciones, como un instrumento de la democracia directa, a través del cual se reconoce el derecho de los ciudadanos a separar del cargo a servidores públicos surgidos del voto popular.*

*Así, por ejemplo, la constitución local del Estado de Yucatán establecía la revocación del mandato, hasta que fue suprimida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 8/2010, bajo el argumento de que la reforma que dio lugar a la misma carecía de sustento constitucional. Asimismo, estableció la tesis jurisprudencial número P./J. 21/2012 (10a.)*

*A la fecha, las constituciones de los estados de Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, y Aguascalientes, tienen establecida la revocación del mandato como un mecanismo de participación ciudadana.*

*En Nuevo León, la revocación del mandato está reconocida en su Ley de Participación Ciudadana, sin embargo, a la fecha se encuentra en vacatio legis, en espera de su reconocimiento en la constitución local.*

*En el estado de Morelos, estuvo incorporada en su constitución local, hasta que, en el año de 2016, a iniciativa de los propios legisladores locales, fue suprimida por el Poder Legislativo, argumentando razones de inconstitucionalidad.*

*La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad número 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, promovidas por un grupo de diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, por el Partido del Trabajo y el Procurador General de la República, declaró la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley Electoral Local, que establecían la figura de la revocación del mandato popular.*

*Asimismo, estableció la tesis jurisprudencial número P./J. 28/2013 (9a.), en la que sostiene que nuestro ordenamiento fundamental dispone de otros medios para fincar responsabilidades de los servidores que llevan a la misma consecuencia de remoción del cargo para el que fueron electos, es decir, le otorga a la revocación de mandato, una connotación sancionatoria, pasando por alto que es un mecanismo de participación ciudadana.*

*La Constitución Política de la Ciudad de México, recientemente expedida, incorporo la figura de la revocación del mandato como un instrumento de participación ciudadana. A diferencia de otros esfuerzos locales, en un giro a sus precedentes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad número 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 Y 19/2017, confirmó la constitucionalidad de la revocación del mandato, pero en una votación sumamente dividida.*

*La incorporación de la revocación del mandato, en nuestro marco jurídico, reconoce el poder de la ciudadanía para que, mediante su determinación, pueda decidir si un servidor público surgido del voto popular es merecedor de continuar o no, en el ejercicio del cargo, desde luego, que el procedimiento deberá instrumentarse durante el desempeño del cargo y una vez satisfechos los requisitos previstos en la ley y con efectos vinculantes. A la vez, tanto el Programa como la Declaración de Principios de nuestro partido.*

*La presente iniciativa, dota de una base constitucional al derecho de los ciudadanos para revocar el mandato a sus representantes populares, complementado esta facultad deducida de los artículos 39 y 40 de nuestra norma suprema. Igualmente, precisa la facultad de las legislaturas de los estados para incorporarla en su legislación local. Se establece también, que la legislación secundaria, establecerá los requisitos y procedimientos específicos, que faciliten y hagan efectiva participación ciudadana.*

**TERCERO.-** Esta dictaminadora considera que para estar en posibilidades de verificar si la propuesta resulta procedente, es indispensable revisar la constitucionalidad de la misma y su correspondencia con el ordenamiento jurídico vigente.

En este sentido hacemos este análisis partiendo del hecho de que en fecha 20 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, esta reforma entre otras cosas introdujo a nuestro marco legal lo siguiente:

* Serán sujetos al proceso de revocación: el Presidente de la República, las y los Gobernadores de las entidades federativas y el Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; **para estos casos en las constituciones locales se establecerán las normas relativas, conforme a lo previsto en el artículo 116.**
* En lo relativo al Presidente de la República, se establece que la revocación de mandato podrá ser convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a petición de la ciudadanía cuando la solicitud incluya la participación de al menos 3% de la Lista Nominal, y siempre y cuando involucre por lo menos a 17 entidades federativas que representen, mínimo, el 3% de la lista de electores de cada una de ellas.
* Se especifica que el Instituto Nacional Electoral, dentro de los siguientes treinta días a la recepción de la solicitud, verificará el requisito establecido y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato, el cual solo se **podrá solicitar una ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Durante el mes previo a esta fecha, los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud.**
* La votación para la revocación del mandato será libre, directa y secreta, y se llevará a cabo el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria (en fecha que no coincida con jornadas electorales federales o locales); el proceso de revocación será válido si participa al menos el 40% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, además de que la revocación solo procederá por mayoría absoluta.
* La organización, desarrollo y cómputo de la votación quedará a cargo del INE, que emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que realizará el cómputo final una vez resueltas las impugnaciones y emitirá la declaratoria de revocación.
* Se señala que está prohibido el uso de recursos públicos en la recolección de firmas, en la promoción y en la propaganda, y que el INE, así como los organismos públicos locales, promoverán la participación ciudadana y serán los únicos encargados de la difusión objetiva e imparcial del proceso.
* Se manifiesta que de proceder la revocación de mandato, quien asumirá la Presidencia de la República de manera provisional durante los 30 días siguientes, será quien ocupe la Presidencia del Congreso y será este órgano el que nombre a quien concluirá el periodo constitucional.
* En los Artículos Transitorios se señala que, en caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2021, y que la petición correspondiente tendrá que presentarse dentro de los primeros 15 días de diciembre de ese año.
* **Asimismo, el artículo sexto transitorio fija la obligación de las entidades federativas de armonizar su legislación dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.**

En relación al tema que nos ocupa, la reforma a los ordenamientos legales locales debe necesariamente partir de las bases generales previstas en los artículos 116 de la Constitución General y Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, disposiciones que señalan lo siguiente:

***Artículo 116. …***

***…***

***I.*** *Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado.* ***Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad.***

***…***

***…***

***…***

***…***

***II.*** *a* ***IX. …***

***Sexto.*** *Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local.* ***La solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad; podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales y quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional.***

***Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato del Ejecutivo local con anterioridad a este Decreto armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia de dichas normas.***

Hasta antes de esta reforma a la Constitución General nuestra Carta Magna estipulabaun único caso en el que procedía la revocación del mandato, resultando éste el de los miembros del ayuntamiento (disposición intocada en esta reforma), de esta manera en el artículo 115, se establece lo siguiente:

***“Artículo 115.*** *Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,**democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:*

***I.*** *Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.*

*Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.*

***Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan.”***

*…*

Por lo que hace a este último supuesto el Código Municipal del Estado refiere, en relación a la revocación del mandato lo siguiente:

***DE LA SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN***

***ARTÍCULO 74.*** *Son causas de suspensión del mandato de alguno, de algunos o de todos los miembros del Ayuntamiento:*

*I. Incurrir en las responsabilidades administrativas establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.*

*II. La incapacidad temporal física y/o mental para el desempeño del cargo.*

*III. Por faltar consecutivamente a tres sesiones ordinarias de Cabildo sin existir causa justificada.*

*IV. Por abandono de sus funciones en un término de quince días hábiles consecutivos, sin causa justificada.*

*V. La declaración de procedencia en materia de responsabilidad penal, en los términos de la ley de responsabilidades de los servidores públicos estatales y municipales, hasta en tanto culmine el proceso penal correspondiente.*

***ARTÍCULO 75.*** *Son causas de revocación del mandato de alguno, de algunos o de todos los miembros del Ayuntamiento:*

*I. La resolución condenatoria dictada por el Congreso del Estado, en juicio político instaurado en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Serán causas específicas:*

*a). Los actos u omisiones que lesionan la integridad del territorio del estado o su soberanía, libertad e independencia interior.*

*b). El ataque sistemático a la forma de gobierno republicano, representativo y popular.*

*c). Las violaciones sistemáticas y graves a las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado.*

*d). El incumplimiento reiterado de las obligaciones que a los ayuntamientos impone la Constitución Política Local y las leyes que de ella emanan, cuando cause perjuicios graves al municipio o se trastorne el funcionamiento normal de la institución.*

*e). Las violaciones sistemáticas y graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública y a las leyes que regulan el manejo de los recursos económicos.*

*f). Promover o adoptar una forma de gobierno o bases de organización política distintas de las señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

*II. La sentencia condenatoria que recaiga al proceso penal que se lleve a cabo, en el supuesto de la fracción V, del artículo anterior.*

*III. La incapacidad definitiva física y/o mental para el desempeño del cargo.*

*IV. Dejar de asistir, sin causa justificada, a cuatro sesiones ordinarias de Cabildo en forma continua o el abandono de sus funciones por un lapso de treinta días hábiles consecutivos, sin causa justificada.*

***ARTÍCULO 76.*** *En ningún caso será suspendido o revocado el mandato de los miembros de los ayuntamientos por causas de orden civil o cuando se trate de delitos culposos o leves.*

***ARTÍCULO 77.*** *El procedimiento para decretar la suspensión o revocación del mandato de alguno o de algunos de los miembros del Ayuntamiento o Consejo Municipal, se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales y por la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila.*

***ARTÍCULO 78.*** *Decretada la suspensión o revocación del mandato de alguno o de algunos de los miembros del Ayuntamiento, el Congreso del Estado llamará al suplente o suplentes para que rindan la protesta y ocupen el cargo correspondiente, dentro de las 72 horas siguientes a la notificación su resolución. En caso de no comparecer ningún suplente y no siendo necesaria la ocupación del cargo para que el ayuntamiento pueda sesionar válidamente, quedará vacante por el resto del período. Si la suspensión o revocación del mandato de alguno o de algunos de los miembros del Ayuntamiento impide que éste pueda sesionar válidamente, se deberá proceder en los términos que para la desaparición de ayuntamientos se establecen en este código.*

***ARTÍCULO 79.*** *De suspenderse o revocarse el mandato de quien funja como presidente municipal, el Congreso del Estado elegirá al que deba ocupar el cargo de presidente municipal.*

En este sentido los integrantes de esta dictaminadora observamos que la propuesta no se ajusta a las bases constitucionales en la materia, en cuestiones como, que se pretende incorporar la figura de la revocación del mandato en la Ley de Participación Ciudadana y no en la Constitución Política del Estado, tampoco se ajusta en lo concerniente al porcentaje mínimo necesario para solicitar la revocación del mandato que se menciona en el transitorio sexto citado; de igual manera se observa que no coinciden los plazos que se fijan para la solicitud de la revocación de mandato ni la fecha en que debe realizarse la consulta; la propuesta no se encuentra armonizada con la votación requerida para que sea vinculante la revocación de mandato; no hay claridad en quien asumirá el cargo de gobernador en el caso particular de la revocación del mandato, entre otros.

Del mismo modo se verifica que la iniciativa contradice lo establecido en el Código Municipal sobre los términos de procedencia de la revocación del mandato, su procedimiento y votación, incluso en cuánto a los sujetos, puesto que en dicho código se contempla la revocación del mandato de otros integrantes del ayuntamiento y no únicamente del Presidente Municipal.

Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Se considera no procedente la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante el cual se crea el Capítulo Tercero Ter. “**DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO**”, del Título Sexto de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Ingeniero Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**SEGUNDO.-** Archívese el expediente correspondiente como asunto concluido.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma al párrafo segundo del artículo 86 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 23 de abril de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 04 de mayo del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma al párrafo segundo del artículo 86 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos de que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas populares, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando segundo, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular mediante la cual se plantean una reforma al párrafo segundo del artículo 86 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente. Infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular mediante la cual se propone que en los 38 ayuntamientos del Estado se les proporcione un perro adiestrado a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, suscrita por el C. Félix Gerardo Cabello Dueñas; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 23 de abril de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 04 de mayo del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular mediante la cual se propone que en los 38 ayuntamientos del Estado se les proporcione un perro adiestrado a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, suscrita por el C. Félix Gerardo Cabello Dueñas, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos de que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas populares, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando segundo, concluyendo que la misma, no reúne el requisito enunciado en la fracción III del ya citado artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al carecer del proyecto de articulado.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular mediante la cual se propone que en los 38 ayuntamientos del Estado se les proporcione un perro adiestrado a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, suscrita por el C. Félix Gerardo Cabello Dueñas, no reúne el requisito enunciado en la fracción III del ya citado artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al carecer del proyecto de articulado.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales, 2 y 5 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo, hágasele saber que cuenta con un plazo no mayor a 15 días hábiles para presentar la información relativa al requisito faltante.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular mediante la cual se propone que se apruebe el uso de gas pimienta e inmovilizador electrónico para defensa del personal a todas las mujeres de los 38 ayuntamientos del Estado y se modifique el artículo 280 sección quinta, estableciendo un control de gramos y voltios respectivamente, suscrita por el C. Félix Gerardo Cabello Dueñas; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 23 de abril de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 04 de mayo del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular mediante la cual se propone que se apruebe el uso de gas pimienta e inmovilizador electrónico para defensa del personal a todas las mujeres de los 38 ayuntamientos del Estado y se modifique el artículo 280 sección quinta, estableciendo un control de gramos y voltios respectivamente, suscrita por el C. Félix Gerardo Cabello Dueñas, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos de que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas populares, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando segundo, concluyendo que la misma, no reúne el requisito enunciado en la fracción III del ya citado artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al carecer del proyecto de articulado.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular mediante la cual se propone que se apruebe el uso de gas pimienta e inmovilizador electrónico para defensa del personal a todas las mujeres de los 38 ayuntamientos del Estado y se modifique el artículo 280 sección quinta, estableciendo un control de gramos y voltios respectivamente, suscrita por el C. Félix Gerardo Cabello Dueñas, no reúne el requisito enunciado en la fracción III del ya citado artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al carecer del proyecto de articulado.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales, 2 y 5 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo, hágasele saber que cuenta con un plazo no mayor a 15 días hábiles para presentar la información relativa al requisito faltante.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular mediante la cual se reforman el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar y la Ley Federal de Protección al Consumidor, planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso el día 9 de enero del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 16 de enero de 2020, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular mediante la cual se reforman el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar y la Ley Federal de Protección al Consumidor, planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente Acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en su Artículo 42 establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone:

**ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.** Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:

**I.** Presentarse por escrito.

**II.** Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.

**III.** Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.

**IV.** Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.

**V.** Nombre y firma de quien la presenta.

El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.

**TERCERO.-** Que una vez analizada la iniciativa popular en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, verificó que la misma reúne todos los requisitos previstos en la Ley de Participación ciudadana.

**CUARTO.-** Que como se desprende del análisis de la iniciativa popular, la misma pretende reformar Leyes Federales y un Reglamento Federal de ámbito de aplicación también federal.

**QUINTO.-** Que en este sentido, la presente dictaminadora advierte que no es Competencia de este Congreso reformar leyes federales tal y como se desprende de lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos que en su fracción X establece que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, lo siguiente:

***X.*** *Para legislar en toda la República sobre* ***hidrocarburos****, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;*

**SEXTO.-** Que en este sentido la norma citada, señala en forma expresa la facultad de legislar en estas materias, la cual evidentemente recae en el Congreso General, por lo tanto, además de pretender reformar una Ley y un reglamento de aplicación federal, razones por las que la iniciativa popular no resulta procedente al no reunir los requisitos de orden constitucional ni legal.

**SÉPTIMO.-** Que en virtud de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Esta comisión determina declarar improcedente la iniciativa popular mediante la cual se reforman el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar y la Ley Federal de Protección al Consumidor, planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, al contravenir lo dispuesto en la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez que este congreso carece de facultades para legislar en materias de competencia federal.

**SEGUNDO.-** Notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en materia Político- Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Electoral de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Omar Delgado Chávez; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso el día 15 de enero de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 17 de enero del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia la iniciativa popular mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en materia Político- Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Electoral de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Omar Delgado Chávez, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV.* ***Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.***

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos de que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas populares, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando segundo, concluyendo que la misma, incumple con el requisito previsto en el numeral IV del ya citado artículo 42 al proveer un domicilio para oír y recibir notificaciones que no se encuentra en el lugar ***donde reside la autoridad competente para conocer de la iniciativa, al proporcionar un domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco.***

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en materia Político- Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Electoral de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Omar Delgado Chávez, carece del requisito previsto en la fracción IV del artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, concerniente a proveer un domicilio para oír y recibir notificaciones que se encuentre en el lugar ***donde reside la autoridad competente para conocer de la iniciativa.***

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales, 2 y 5 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo por estrados y asimismo, hágasele saber que cuenta con un plazo no mayor a 15 días hábiles para presentar la información relativa al requisito faltante.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa ciudadana mediante la cual se propone que se analice y se hagan debates, foros, mesas de trabajo, tesis en relación con el consumo de alcohol y la violencia contra la mujer en las familias, para todas las mujeres de los 38 Ayuntamientos de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Félix Gerardo Cabello Dueñas; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 23 de abril de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 04 de mayo del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa ciudadana mediante la cual se propone que se analice y se hagan debates, foros, mesas de trabajo, tesis en relación con el consumo de alcohol y la violencia contra la mujer en las familias, para todas las mujeres de los 38 Ayuntamientos de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Félix Gerardo Cabello Dueñas, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos de que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas populares, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando segundo, concluyendo que la misma, no reúne el requisito enunciado en la fracción III del ya citado artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al carecer del proyecto de articulado.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular mediante la cual se propone que se analice y se hagan debates, foros, mesas de trabajo, tesis en relación con el consumo de alcohol y la violencia contra la mujer en las familias, para todas las mujeres de los 38 Ayuntamientos de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Félix Gerardo Cabello Dueñas, no reúne el requisito enunciado en la fracción III del ya citado artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al carecer del proyecto de articulado.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales, 2 y 5 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo, hágasele saber que cuenta con un plazo no mayor a 15 días hábiles para presentar la información relativa al requisito faltante.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 03 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

1. <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1585760.coahuila-por-abajo-de-la-media-nacional-en-trabajo-infantil.html> [↑](#footnote-ref-1)